



## **Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales**

**Tema:** Evolución y aplicación del Derecho Internacional Humanitario

Estudiante: Hilma José Madriz Morraz

Monografía para optar al grado de:

Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales

**Profesor tutor: Orlando Guerrero**

**Managua, Nicaragua, julio del 2003**



## **Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales**

**TITULO:** Evolución y aplicación del Derecho Internacional Humanitario

Estudiante: Hilma José Madriz Morraz

Monografía presentada al jurado integrado por:

**PRESIDENTE:** \_\_\_\_\_

**SECRETARIO:** \_\_\_\_\_

**VOCAL:** \_\_\_\_\_

Para completar las exigencias del grado  
Licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales

**Managua, Nicaragua**

## ***DEDICATORIA***

Hoy, he realizado un sueño, una de las metas que siempre me había trazado, la cual no hubiese logrado sin el apoyo, amor y comprensión de las personas que nunca me abandonaron, sino me alentaron y animaron a seguir adelante, superando juntos cada etapa hasta llegar a este día.

- A Dios: por protegerme, darme salud y aliento, por demostrarme día a día que me ama y que está siempre conmigo.

- A mi madre Dolores de Madriz (q.e.p.d) que siempre estará conmigo, a mi padre, Marco Antonio Madriz (q.e.p.d) por su fe en mí, de quienes heredé la capacidad, las ansias de superación y los conocimientos transmitidos desde mi más tierna infancia.

- A la persona más importante de mi vida, que ha sido para mí, ejemplo del más sincero amor, mi esposo: Guy Nury, al cual agradezco por alentarme cada día a ser la mejor, a superarme, a sentirme la mujer más amada en este mundo.

- A mis hijos, Michel y Marie Josephine, por la paciencia y comprensión que han tenido por todos esos momentos que no pasé por con ellos.

- A mi hermana Annel, que siempre soñó con la graduación de su pequeña hermana.

- A mis compadres, Alejandro Burgos y Carmen Luisa Burgos que han sido para mí padre y hermana, por todo su apoyo, amor y amistad.

## **AGRADECIMIENTOS**

- A todos los catedráticos, que a través de estos años me han impartido sus conocimientos.
- A mis amigas y compañeras de clases: Carmen, Karen y Enmanuel, por su amistad incondicional.
- A María de Jesús Fuentes, vice- decana de la Facultad de Diplomacia, por sus palabras de aliento, por no dejarme desfallecer en este intento.
- Al doctor Orlando Guerrero, mi tutor en esta empresa, por brindarme además de su apoyo en el desarrollo de este trabajo, su amistad.

Gracias.

# ÍNDICE

	Pág.
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
 <b>I. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO</b>	
<b>A. Definición.....</b>	<b>3</b>
1. Finalidad.....	3
2. Jus In Bello y Jus Ad Bellum.....	3
a. Jus In Bello.....	4
b. Jus Ad Bellum.....	4
3. Principios fundamentales.....	5
4. Normas fundamentales.....	8
<b>B. Origen del Derecho Internacional Humanitario.....</b>	<b>9</b>
1. Derecho Consuetudinario.....	9
2. Derecho de Gentes.....	10
3. Derecho Internacional Humanitario Contemporáneo.....	11
a. Origen y precursores.....	11
b. Tratados de Relevancia del Derecho Internacional Humanitario. Cronología.....	13
c. Derecho de Ginebra y Derecho de la Haya.....	14
1) Principio del Derecho de Ginebra.....	15
2) Principio del Derecho de La Haya.....	16
3) Desarrollo del Derecho de Ginebra y del Derecho de La Haya.....	16
4. Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos.....	20
<b>C. Los cuatro Convenios de Ginebra 12 de agosto de 1949.....</b>	<b>22</b>
1. Convenio I.....	23
2. Convenio II.....	24
3. Convenio III.....	26

4. Convenio IV.....	30
5. Arto. 3 común a los cuatro Convenios.....	33
a. Comentario al Arto. 3.....	33
6. Protocolos adicionales a los cuatro Convenios.....	38
a. Protocolo I.....	39
b. Protocolo II.....	51
7. Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.....	54

## **II. EL CICR Y LA ONU EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)**

<b>A. El Cometido del CICR.....</b>	<b>56</b>
1. El Derecho de Asistencia.....	56
a. Las bases jurídicas de la acción del CICR.....	57
1) Las Bases Convencionales.....	57
2) Las Bases Estatutarias.....	59
b. Las víctimas.....	59
2. Elaboración y Desarrollo del DIH.....	63
3. El Emblema de la Cruz Roja.....	64
a. Origen del emblema.....	65
b. Un emblema, dos símbolos, dos usos.....	66
1) Símbolo de protección, uso protector.....	66
2) Símbolo de pertenencia, uso indicativo.....	66
3) Uso indicativo y protector del emblema en tiempos de paz.....	67
4) Uso indicativo y protector del emblema en tiempos de conflicto.....	68
c. Los usos abusivos del emblema.....	70
1) Las imitaciones.....	70
2) Las usurpaciones.....	71

3) Los abusos graves, la perfidia.....	71
4. Refugiados y Desplazados.....	72
a. Distinción entre refugiados y desplazados internos..	72
b. Protección jurídica de los refugiados.....	73
c. Protección y asistencia a los refugiados.....	74
d. Protección jurídica de los desplazados.....	74
e. Protección y asistencia a los desplazados.....	75
<b>B. La ONU y el DIH.....</b>	<b>76</b>
1. Operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas por la ONU o bajo sus auspicios.....	76
2. Operaciones de restablecimiento de la paz desplegadas por la ONU o bajo sus auspicios.....	77
3. El CICR, la ONU y el Derecho Internacional Humanitario.....	77
4. Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la paz de la ONU.....	79
a. Posición del CICR.....	79
b. Posición de la ONU.....	79

### **III. APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.**

#### **A. Procedimientos de aplicación del Derecho Internacional**

<b>Humanitario.....</b>	<b>83</b>
1. Medidas de Aplicación Nacional.....	83
2. Medidas preventivas.....	84
3. Medidas de Supervisión y Control.....	84
a. Potencias protectoras.....	84
b. Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas..	85
1) Las funciones de la CIH de Encuestas previstas en el Arto 90 del Protocolo I.....	87

2) Medios que permiten iniciar el funcionamiento de la CIH de Encuestas.....	88
4. Medidas de Represión.....	88
a. Infracciones graves.....	89
5. La Corte Penal Internacional.....	89
a. Antecedentes históricos.....	89
b. Jurisdicción.....	92
c. Principio de Responsabilidad Penal.....	92
d. Complementariedad.....	94
e. Competencia.....	94
f. Presentación de denuncias.....	95
g. Garantías de Juicio Justo.....	95
h. Protección y reparación a las víctimas.....	95
i. Deficiencias.....	96
j. Responsabilidad de los Estados.....	97
k. Situación de los países latinoamericanos.....	98
6. Nicaragua y la Corte Penal Internacional.....	98
<b>B. Responsables de la aplicación.....</b>	<b>98</b>
<b>C. Medidas para la aplicación.....</b>	<b>99</b>
<b>D. Promoción de las medidas nacionales de aplicación y las Comisiones Nacionales.....</b>	<b>103</b>
1. El objetivo de las Comisiones Nacionales de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.....	104
2. Las funciones de las Comisiones Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario.....	104
3. Composición de la Comisión.....	106
4. las Comisiones Nacionales de aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Centroamérica.....	106
5. El papel de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.....	107



<b>E. Estructura Constitucional y posición del Derecho</b>	
<b>Internacional Humanitario en las Leyes Nicaragüenses.....</b>	<b>109</b>
1. Los delitos internacionales en el Proyecto de Código Penal de Nicaragua.....	111
a. Propuesta de Modificaciones al Proyecto de Código Penal de Nicaragua.....	112
<b>F. La Aplicación de la Convención de Ottawa en Nicaragua.....</b>	<b>113</b>
1. Obligaciones básicas.....	114
2. Destrucción de las minas antipersonales almacenadas.....	115
a. Resumen estadístico del Desminado Nacional hasta marzo del 2003.....	116
3. Informes Anuales.....	117
4. Resumen de labores de la Comisión Nacional de Desminado en el año 2002.....	119

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

## INTRODUCCIÓN

El Estudio sobre la evolución y aplicación del Derecho Internacional Humanitario es el título de esta tesis monográfica, un tema de mucha importancia para la sociedad en general y para la comunidad internacional porque este derecho adquiere sus verdaderas dimensiones por estar tan estrechamente relacionado con el hombre y de él pueden depender la vida y la libertad de innumerables seres humanos, si, por desgracia, la guerra se tiende sobre el mundo.

El tema fue escogido principalmente por dos razones, primeramente a nivel personal he tenido experiencias en varios países en situaciones de conflicto, en consecuencia he querido conocer y profundizar sobre los derechos de las personas que sufren a causa de estas circunstancias. En segundo lugar, este tema se relaciona directamente con mi carrera al ser el Derecho Internacional Humanitario una rama del Derecho Internacional público.

Con esta monografía se pretende difundir el Derecho Internacional Humanitario, a la vez ayudar a las personas a conocer a qué entidades dirigirse en caso de conflictos armados y además saber utilizar los medios y mecanismos que el Derecho Internacional Humanitario ofrece a toda la sociedad en general. Es importante conocer la poderosa influencia que ejerce el mismo ya que no conoce frontera alguna al ser universal, y no poder ser derogado o anulado.

Los problemas prácticos que se intentarán resolver con el trabajo monográfico, serán entre otros:

- Esclarecer qué es el Derecho Internacional Humanitario su definición, finalidad, principios y normas fundamentales así como el origen del mismo;
- Comparar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos;

- Analizar el cometido del CICR y la posición de la ONU para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario;
- Difundir los procedimientos, medidas de aplicación y represión del Derecho Internacional Humanitario en los cuales se encuentra el papel del CICR, de las Comisiones nacionales de aplicación, la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta y la Corte Penal Internacional;
- Dar a conocer la estructura constitucional y posición del Derecho Internacional Humanitario en las Leyes Nicaragüenses, así como los logros ejemplares con relación a la aplicación de la Convención de Ottawa en Nicaragua.

Esta monografía proporcionará un nuevo instrumento metodológico para futuras investigaciones tanto a los estudiosos del tema, como para información práctica en general.

## **I. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**

### **A. Definición**

El Derecho Internacional Humanitario es el cuerpo de normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no internacionales, y que limita por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas y a los bienes afectados, o que pueden estar afectados, por el conflicto<sup>1</sup>.

#### **1. Finalidad**

El Derecho Internacional Humanitario tiene por objeto reglamentar las hostilidades a fin de mitigar sus rigores. La finalidad del Derecho Internacional Humanitario en caso de conflicto armado, es por una parte, proteger a las personas que no participan, o han dejado de participar en las hostilidades y por otra parte, limitar los métodos y medios de hacer la guerra, así pues, se aborda la realidad de un conflicto sin entrar en consideraciones relativas a los motivos o a la legalidad del recurso a la fuerza, únicamente se regulan los aspectos que tienen un alcance humanitario.

#### **2. Jus In Bello y Jus Ad Bellum**

Cuando hablamos de Derecho Internacional Humanitario hay que distinguir entre el jus in bello y el jus ad bellum.<sup>2</sup>

---

1 El Derecho Internacional Humanitario. Instituto Internacional de Derechos del Hombre. pág. 2

2 Robert Kolb, "Origen de la pareja terminológica ius ad bellum / ius in bello". Revista Internacional de la Cruz Roja No 143, pp. 589-598

a. Jus In Bello

A partir del Convenio de Ginebra de 1864, de la Declaración de San Petersburgo de 1868 y de los Convenios de La Haya, el derecho de la guerra se orienta, en el campo del derecho internacional convencional, hacia perspectivas bien articuladas: la protección internacional de las víctimas de los conflictos armados, por una parte, y, por otra parte, la limitación de los medios y de los métodos de combate.

Estos dos cuerpos de normas son conocidos como Derecho de Ginebra y Derecho de La Haya, respectivamente; El conjunto de ambos cuerpos de normas forma lo que se ha solido llamar jus in bello (derecho en la guerra), es decir, la parte del derecho de la guerra por la que se rige el comportamiento del Estado en caso de conflicto armado, este derecho trata de humanizar el conflicto armado, en consecuencia se refiere a las reglas de conducción de la guerra, a cual son los derechos y obligaciones de los combatientes.

b. Jus Ad Bellum

Sin embargo el derecho de la guerra contenía también otro cuerpo de normas cuya finalidad era reglamentar el derecho a la guerra que aún tenía el Estado soberano; esta reglamentación de la guerra “lícita”, se refería a los procedimientos para recurrir a la fuerza y tenía como finalidad excluir del ámbito de las relaciones internacionales el recurso abusivo a la guerra, con la finalidad de disminuir su frecuencia como medio para solucionar las controversias internacionales, este cuerpo de normas, conocido como jus ad bellum (derecho a la guerra) completaba el conjunto del derecho de la guerra como rama del derecho internacional público.

Hoy en día, esta parte del derecho internacional público ha disminuido con la prohibición de recurrir a la fuerza, refrendada definitivamente en la Carta de las

Naciones Unidas, los Estados se ven impedidos, en la actualidad, para resolver sus litigios por ese medio, es decir mediante conflictos armados.<sup>3</sup>

Las excepciones a esta regla fundamental de la prohibición de la guerra son sólo dos: en primer lugar, se trata de medidas de seguridad colectiva que la Organización de las Naciones Unidas puede tomar, como órgano de la comunidad internacional, con respecto a un Estado que represente una amenaza para la paz.<sup>4</sup>

La segunda excepción, que es sin duda la más seria amenaza para el respeto de la prohibición de recurrir a la fuerza, es la que permite la guerra defensiva.<sup>5</sup>

Habida cuenta de las dificultades que tiene la comunidad internacional para definir la noción de agresión y, por lo tanto, la de agresor, así como de la politización a nivel mundial de todo litigio internacional, dada la estructura actual de la comunidad internacional, esta excepción a la prohibición general de recurrir al uso de la fuerza pone permanentemente en peligro la observancia de su prohibición.

### **3. Principios fundamentales**

Como en todas las disciplinas, el Derecho Internacional Humanitario tiene principios fundamentales de los cuales se derivan otras nociones.

Un principio a nivel filosófico es una abstracción de índole moral, deducida de tendencias ideales de la sociedad, que se impone a la conciencia humana y llega a ser un imperativo absoluto, indiscutible. Hugo de Groot (Grocio) señala:

“He visto en el mundo cristiano entero una libertad de guerrear de la cual hasta las naciones bárbaras se avergonzarían. Las guerras fueron iniciadas bajo pretextos insignificantes o bajo ninguno, y llevadas acabo sin ninguna referencia de ley, divina o humana”<sup>6</sup>

---

3 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo I, art. N°2, parr. 4

4 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo 7, art. N°39 - 50

5 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo 7, art. N°51

6 Hugo de Groot (Grocio) “Prolegómeno de Jure Belli Ac Pacis”. Indianápolis.1975. pág. 15

A nivel del derecho humanitario, es una regla, fundada sobre el juicio y la experiencia que una comunidad adopta para guiar su conducta. Los principios del Derecho Internacional Humanitario que son de índole oficial, regulan, en tiempo de conflicto, el comportamiento de los Estados con sus enemigos. Jean Pictet, en referencia a estos principios filosóficos y humanitarios expresa:

“No pudiendo pretender eliminar de un golpe la plaga de la guerra, se intentó primeramente mitigar los rigores inútiles de la misma. El interés recíproco de los beligerantes los indujo también a observar, en la conducción de las hostilidades, ciertas "reglas del juego”<sup>7</sup>

A semejanza de Grocio quien, en su obra “Sobre Derecho de la Guerra y de la Paz”, enumera las normas que constituyen las bases más sólidas del derecho de la guerra, juristas y filósofos se preocuparon para reglamentar los conflictos a lo largo de los siglos. De esta preocupación común, surgieron los principios del derecho humanitario.

En el siglo XVIII, es importante la contribución de Jean-Jacques Rousseau. En efecto, ante la evolución de la guerra entre Estados, Jean-Jacques Rousseau formula el siguiente principio:

“La guerra no es, pues, una relación de hombre a hombre, sino de un Estado con otro Estado, en la que los particulares sólo son enemigos accidentalmente, no como hombres, ni como ciudadanos, sino como soldados (...) Siendo el objeto de la guerra la destrucción del Estado enemigo, hay derecho para matar a sus defensores en tanto que tienen las armas en las manos; pero luego que las dejan y se rinden, no son enemigos ni instrumentos del enemigo, y como vuelven a entrar en la simple clase de hombres, ya no se tiene derecho sobre su vida”.<sup>8</sup>

---

7 Jean Pictet: “Los principios fundamentales de la Cruz Roja. Instituto Henry Dunant, Ginebra 1979

8 Jean Jacques Rousseau, (1712 -1778), extracto de “El Contrato Social”, 1ª edición, libro I, capítulo 4, año 1762

En 1899, Frédéric de Martens enuncia, para los casos no previstos en el Derecho Internacional Humanitario, el siguiente principio:

“... las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.”<sup>9</sup>

Dicho principio, que ya tenía valor de norma consuetudinaria, fue retomado en el Art. 1, Párr. 2, del Protocolo Adicional I, de 1977 de los Convenios de Ginebra de 1949.

Si Jean-Jacques Rousseau y Frédéric de Martens enunciaron los denominados principios de humanidad, los autores de la Declaración de San Petersburgo formularon, explícita e implícitamente, los principios de distinción, de necesidad militar y de prohibición de los males superfluos de la siguiente manera:

“Que el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo... Que, a este efecto, es suficiente poner fuera de combate al mayor número posible de hombres..... Que este objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o haría su muerte inevitable.”<sup>10</sup>

En los Protocolos de 1977 se reafirman y se puntualizan dichos principios, en particular el de distinción:

“... las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.”<sup>11</sup>

---

9 Cláusula de Martens. Conferencia de la Paz de La Haya de 1899

10 Declaración de San Petersburgo, de 1868 con el fin de prohibir el uso de ciertos objetivos en tiempos de guerra. Publicación CICR, 1996

11 Protocolo I, art. 48 , Protocolo II, art. 13



Por último, existe el principio de proporcionalidad, que establece el equilibrio entre dos intereses divergentes, uno dictado por consideraciones de necesidad militar y el otro de humanidad.

#### **4. Normas fundamentales<sup>12</sup>**

Elaboradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1966 estas normas son textos sencillos, claros y concisos que resumen lo esencial del Derecho Internacional Humanitario. No tienen la autoridad de un instrumento jurídico y no pretenden, en absoluto, reemplazar los tratados vigentes y fueron redactadas con el fin de facilitar la difusión del Derecho Internacional Humanitario.

Estas normas son las siguientes:

- Las personas puestas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral. Dichas personas serán, en todas las circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable.
- Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate.
- Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto en cuyo poder estén. El personal sanitario, las instalaciones, los medios de transporte y el material sanitarios serán protegidos.
- El emblema de la cruz roja o el de la media luna roja sobre fondo blanco es el signo de dicha protección y ha de ser respetado.
- Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones (políticas, religiosas u otras.) Serán protegidos contra cualquier acto de violencia o de represalias.

---

12 CICR "Derecho Internacional Humanitario, repuestas a sus preguntas", pág. 6. Publicación CICR, 1998

Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y a recibir socorros.

- Toda persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. Nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. Nadie será torturado física o mentalmente, ni sometido a castigos corporales o a tratos crueles o degradantes.

- Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de un derecho ilimitado por lo que atañe a la elección de los métodos y medios de hacer la guerra. Queda prohibido emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos.

- Las partes en conflicto harán, en todas las circunstancias, la distinción entre la población civil y los combatientes, con miras a respetar a la población y los bienes civiles. Ni la población civil como tal ni las personas civiles serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos militares.

## **B. Origen del Derecho Internacional Humanitario**

### **1. Derecho consuetudinario**

Así como no hay sociedad, sea cual fuere, sin normas de vida, no ha habido guerra sin ciertas normas, vagas o precisas, que presidieran el desencadenamiento de las hostilidades, su conducción y su término. Proteger al hombre contra los males de la guerra y de la arbitrariedad no es una idea nueva. Las primeras leyes de la guerra ya fueron proclamadas algunos milenios antes de nuestra era por las grandes civilizaciones. Hammurabi, Rey de Babilonia decía:

“Promulgo estas leyes para evitar que el fuerte oprima al débil”

Muchos textos antiguos, como el Mahabarata<sup>13</sup>, la Biblia o el Corán, contienen normas en las que se recomienda el respeto del adversario. Por ejemplo, el Viqayet, texto escrito durante el apogeo de la dominación sarracena en España, hacia finales del siglo XIII, contiene un verdadero código de leyes de la guerra. El Convenio de Ginebra de 1864 codifica, pues, y mejora, a modo de un tratado multilateral, las leyes y costumbres de la guerra, antiguas, fragmentarias y dispersas, por las cuales se protege a los heridos y al personal enfermero.

## **2. Derecho de gentes**

Hugo de Groot (Grocio) señala:

“La justicia trae la paz a la conciencia, mientras la injusticia causa tormento y angustia (...) La justicia es aprobada y la injusticia condenada por el común acuerdo de hombres buenos.”<sup>14</sup>

El Derecho de gentes es la expresión utilizada en la doctrina clásica y es sinónimo de Derecho Internacional Público o Derecho Internacional. Este se define como el conjunto de normas jurídicas por las que se rigen las relaciones entre los estados así como con los demás miembros de la sociedad internacional. Grocio por sus obras es considerado como el padre del derecho de gentes. A raíz de la reforma que dividía en aquella época, a la cristiandad en Europa, pensó que el derecho ya no era la expresión de la justicia divina, sino de la razón humana, que ya no precedía a la acción, sino que dimanaba de ella, de ahí la necesidad de encontrar otro principio de unidad para las relaciones internacionales, el derecho de gentes proporcionó este principio.

Hasta mediados del siglo XIX, los acuerdos concertados para proteger a las víctimas de la guerra sólo eran ocasionales y obligaban únicamente a las partes contratantes, según fórmulas de estricta reciprocidad. En realidad, se trataba de

---

<sup>13</sup> Libro hindú que relata las guerras y hechos heroicos

<sup>14</sup> Hugo de Groot (Grocio) “Prolegómeno de Jure Belli Ac Pacis”. Indianápolis. 1975. pág. 15

acuerdos de capitulación militar, válidos, la mayoría de las veces solamente mientras duraba el conflicto<sup>15</sup>. El nacimiento del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo, ligado al del Movimiento de la Cruz Roja, modifica completamente esa situación: en adelante, los Estados estarán obligados por un tratado universal, aplicable en todo tiempo y en toda circunstancia. Un paso enorme para la humanidad.

### **3. Derecho Internacional Humanitario contemporáneo**

#### **a. Origen y precursores**

Los ejércitos austriaco y francés se enfrentaron, el 24 de junio de 1859, en Solferino, ciudad de Lombardía al norte de Italia. Al cabo de 16 horas de combate, 6,000 muertos y 36,000 heridos cubrían el campo de batalla. Esa misma tarde, un ciudadano suizo, Henry Dunant<sup>16</sup>, se encontraba en la zona por casualidad y quedó estupefacto ante lo que vio: insuficientes servicios sanitarios en ambos ejércitos, miles de soldados heridos eran abandonados, sin asistencia, a su sufrimiento. Gracias a la ayuda de personas civiles de las localidades vecinas, Henry Dunant les prestó socorro sin discriminación, sin embargo, perdieron la vida 22,000 austriacos y 17,000 franceses en Solferino.

De regreso en Suiza, Henry Dunant no lograba apartar de su mente esa visión de pesadilla y para evitar que se repitiera la situación de la que había sido testigo en Solferino, decidió escribir “Un recuerdo de Solferino”<sup>17</sup>, que publicó, por cuenta suya, en noviembre de 1862 y que envió luego a algunos amigos, filántropos, militares, hombres políticos, familias reinantes. El éxito fue inmediato. En este

---

<sup>15</sup> Código de Lieber, 24 de abril de 1863, Instrucciones para la Gobernación de los ejércitos de los Estados Unidos en campaña. Disposición según la cual los tratados eran aplicables solamente cuando todos los beligerantes son partes en los mismos. Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996

<sup>16</sup> Henry Dunant (1828-1910), Negociante suizo fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja

<sup>17</sup> Henry Dunant. “Un recuerdo de Solferino”, 1ra edición. Ginebra, 1862. CICR. 1995. pp. 113 y 124

pequeño libro, Henry Dunant presenta su testimonio y formula dos ideas determinantes:

“Durante una época de paz y de tranquilidad, ¿No se podrían fundar sociedades voluntarias de socorro cuya finalidad sea prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos?”

“En circunstancias extraordinarias, como cuando se reúnen personalidades del arte militar, de diferentes nacionalidades, ¿no sería de desear que aprovechen la ocasión de esa especie de congreso para formular algún principio internacional, convencional y sagrado que, una vez aprobado y ratificado, serviría de base para Sociedades de Socorro a los heridos?”

De la primera de estas ideas nació la institución de la Cruz Roja, de la segunda el Convenio de Ginebra de 1864, en adelante indisolublemente vinculados. El libro profético de Henry Dunant tuvo profunda repercusión en una opinión que en aquella época comenzaba a abrirse más ampliamente a los sentimientos de humanidad. El general Guillaume-Henri Dufour, valiéndose de su experiencia como hombre de guerra, le prestó muy pronto un apoyo moral y activo. El general Guillaume-Henri Dufour<sup>18</sup> escribe a Henry Dunant el siguiente comentario:

“Son necesarios ejemplos tan palpitantes como los que usted nos cita para darnos cuenta de las torturas y las lágrimas que cuesta la gloria de los campos de batalla.”<sup>19</sup>

“Un recuerdo de Solferino” fue leído sobre todo por Gustave Moynier, Fundador del CICR, quién presidía en Ginebra, la Sociedad de Utilidad Pública. Era un hombre realista y realizador. Convocó a esta Sociedad para estudiar las propuestas de Henry Dunant e intentar ponerlas por obra. Y para ello, la Sociedad designó una comisión. Así, a partir del 17 de febrero de 1863, se reunió un Comité de 5 personas: Henry Dunant, Gustave Moynier, el general Guillaume-Henri Dufour, los doctores Louis Appia y Théodore Maunoir. Desde el primer día, este comité se constituyó como institución permanente, llamado primeramente “Comité

---

<sup>18</sup> Guillaume-Henri Dufour, fundador del CICR

<sup>19</sup> Publicación CICR. DIH, respuesta a sus preguntas, pág. 8

Internacional de Socorros a los militares heridos” es el órgano fundador de la Cruz Roja y el promotor de los Convenios de Ginebra. En 1880, este comité tomó el nombre de “Comité Internacional de la Cruz Roja”.

En el año de 1863, este pequeño Comité de simples personas privadas convocó en Ginebra a los Estados del Mundo; en octubre de 1863, se hicieron representar 16 países y se sentaron las bases de lo que sería la Cruz Roja, en sus comienzos solamente para el socorro a los militares heridos. En esa Conferencia se aprobó el uso del emblema, una cruz roja sobre fondo blanco. Pero la Conferencia no tenía competencia para tratar las cuestiones jurídicas. Ese será el cometido de la Conferencia Diplomática convocada el año siguiente, en la que se firmó el primer “Convenio de Ginebra, del 22 de agosto de 1864, para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña”.

Este Convenio de Ginebra de 1864 sentó las bases del desarrollo del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo. Las principales características de ese tratado son normas permanentes, escritas, de alcance universal, destinadas a proteger a las víctimas de los conflictos; es un tratado multilateral, abierto a todos los países; tiene la obligación de prodigar cuidados sin discriminación a los militares heridos y enfermos y afirma el respeto e identificación del personal sanitario, así como del material y de los equipamientos sanitarios mediante un emblema, una cruz roja sobre fondo blanco.<sup>20</sup>

#### b. Tratados de Relevancia del Derecho Internacional Humanitario. Cronología<sup>21</sup>

La mencionada cronología demuestra claramente que algunos conflictos armados influyeron, de forma más o menos inmediata, en el desarrollo del Derecho

---

<sup>20</sup> Conferencia Internacional de Ginebra de 1863. Resolución Artículo 8, Votos c y d

<sup>21</sup> Anexo N°1, Tratados y textos relativos al Derecho Internacional Humanitario, Cronología. Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996

Internacional Humanitario. En la Primera Guerra Mundial (1914- 1918) se recurre a métodos de guerra sino nuevos, al menos en gran escala: empleo de gases contra el enemigo, primeros bombardeos aéreos, captura de cientos de miles de prisioneros de guerra. Los tratados de 1925 y 1929 son fruto de esa evolución. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), se registra la misma proporción de civiles y de militares muertos, mientras que esa proporción era de uno contra diez en 1914- 1918. El año 1949, la comunidad internacional responde a ese trágico balance, en particular a las horribles persecuciones de que fueron víctimas las personas civiles, con la revisión de los Convenios vigentes y con la aprobación de un nuevo instrumento: el Cuarto Convenio de Ginebra que protege a las personas civiles. Más adelante, en 1977, los Protocolos adicionales responden a las consecuencias de índole humanitaria de las guerras de descolonización que los Convenios de 1949 sólo cubrían de forma imperfecta.

c. Derecho de Ginebra y Derecho de La Haya<sup>22</sup>

El derecho humanitario contemporáneo resulta esencialmente de dos iniciativas tomadas independientemente una de la otra. La primera iniciativa de Henry Dunant y de sus colegas tuvo como meta la protección de los heridos y miembros del personal sanitario de los ejércitos en el campo de batalla, iniciativa que debía llegar a la adopción del primer Convenio de Ginebra de 1864.

Como todas las etapas significativas de este derecho tuvieron lugar en Ginebra se designa bajo el nombre de “Derecho de Ginebra”. El Derecho de Ginebra, o derecho humanitario propiamente dicho, tiende a salvaguardar a los militares fuera de combate, así como a las personas que no participan en las hostilidades en particular la población civil.

---

22 Bugnion, Francois. Droit de Genève et Droit de La Haye. CICR. Suiza 2001. pp. 901-922

La otra iniciativa es la del Zar Alejandro II, quién convocó a una conferencia que resultó en la adopción de la “Declaración de San Petersburgo” (1868), esta declaración sentó los principios fundamentales del derecho de las conductas de las hostilidades. Como los futuros convenios de La Haya de 1899 y de 1907 quedaron como los principales pilares del derecho de la conducta de las hostilidades este derecho se designa con el nombre de “Derecho de La Haya”. En el Derecho de La Haya, o derecho de la guerra propiamente dicho, se determinan los derechos y deberes de los beligerantes en la conducción de las operaciones y se limita la elección de los medios para causar daños al enemigo.

Sin embargo estas dos ramas no son totalmente independientes, dado que la finalidad de algunas normas del Derecho de la Haya es de proteger a las víctimas de los conflictos, y la finalidad de otras del Derecho de Ginebra es limitar la acción de los contendientes en las hostilidades. El Derecho de La Haya y el Derecho de Ginebra se han ampliamente reunido con la aprobación el 8 de julio de 1977 de los protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra de 1949, estos protocolos han actualizado no solamente las reglas relativas a la protección de las víctimas de la guerra, pero también las que rigen la conducta de las hostilidades.

#### 1) Principio del Derecho de Ginebra

El principio del Derecho de Ginebra prescribe tres deberes con las víctimas de la guerra: respetarlas, protegerlas, tratarlas con humanidad, nociones afines que se complementan o sea lo mínimo que debe recibir el individuo para poder llevar una existencia aceptable. De éste se define el siguiente principio: “las personas puestas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades serán respetadas, protegidas y tratadas con humanidad.”



## 2) Principio del Derecho de La Haya o Derecho de la guerra

Indudablemente, los textos de La Haya son también de inspiración humanitaria. Pero su finalidad es reglamentar las hostilidades. En el Reglamento de La Haya se dice que los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los medios para causar daños al enemigo. De este se define el siguiente principio: “el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o los medios de guerra no es ilimitado”.

## 3) Desarrollo del Derecho de Ginebra y del Derecho de La Haya

Si todo el derecho humanitario procede del gran impulso creador dado en Ginebra el año 1864, el primer capítulo del derecho de la guerra se escribió en San Petersburgo, el año 1868. Alarmado por la invención de una bala hueca, llena de pólvora, que explotaba en el punto del impacto, el Zar Alejandro II, que ya había manifestado sus convicciones humanitarias aboliendo la esclavitud, convocó en su capital una conferencia para “mitigar, en lo posible, las calamidades de la guerra”. El 11 de diciembre de 1868, se firmó en la Conferencia la Declaración de San Petersburgo, que obliga todavía hoy a 17 Estados. Prohíbe no solamente la bala explosiva, sino también, a propuesta de la delegación Suiza, "todo proyectil de un peso inferior a 400 gramos que sea explosivo o esté cargado de materias fulminantes o inflamables". Señalando de paso que esta última prohibición, la de los proyectiles inflamables, no fue respetada en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que da un profundo significado a la Declaración de San Petersburgo es que, en su preámbulo y por primera vez, se formuló, con una admirable precisión, el principio fundamental del derecho de la guerra.

“Considerando “que el único objetivo legítimo” de la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo; que para ello basta poner fuera de combate al mayor número posible de hombres; que se sobrepasaría esta finalidad empleando armas

que agraven inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate o hagan que su muerte sea inevitable; que el empleo de semejantes armas sería, por lo tanto, contrario a las leyes de la humanidad.”<sup>23</sup>

Esta Declaración contiene también una firme promesa de las Potencias a concertarse en el futuro para prohibir el uso de armas inhumanas.

La obra de Francis Lieber<sup>24</sup> había preparado la opinión pública a la idea de que era necesaria y posible una reglamentación de la guerra. Esta aspiración se plasmó en la convocatoria, por el Zar Alejandro II, de una Conferencia para la codificación del derecho de la guerra, que se celebró en Bruselas el año 1874. La cuestión más debatida fue la definición de combatientes, cuando se trató de determinar el círculo de las personas con derecho a participar en la lucha. Así, se redactaron en Bruselas las cuatro famosas condiciones que se reproducirán ulteriormente, palabra por palabra, en el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra. Por lo que atañe a los bombardeos, se dice ya que no se deben atacar las ciudades o localidades “abiertas, que no estén defendidas”, base para los futuros textos de La Haya. La Declaración de Bruselas nunca ha tenido fuerza de ley, porque no ha sido ratificada. Pero, gracias a ella, se llegó a una etapa importante. Por su parte, el Instituto de Derecho Internacional aprobó, en 1880, el Manual de Oxford, redactado por Gustave Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja. En el manual se formulan los principios del derecho de la guerra con perfecta claridad y se establece un justo equilibrio entre el ideal humanitario y las exigencias militares.

En 1898, el Zar Nicolás II convocó la primera “Conferencia de la Paz”, que tuvo lugar en La Haya, para delimitar los males de la guerra y prohibir armas nuevas, lo que despertó grandes esperanzas. Pero los representantes de 26 países, reunidos el

---

23 Preámbulo de la declaración de San Petersburgo

24 Código de Lieber, 24 de abril de 1863. Instrucciones para la gobernación de los ejércitos en los EE.UU. en campaña. Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996

18 de mayo de 1899, renunciaron muy pronto a reducir los armamentos, a proscribir los explosivos y los submarinos. No obstante, la Conferencia prohibió “lanzar proyectiles desde globos”, emplear gases asfixiantes así como las “balas que se dilatan o se aplastan en el cuerpo humano”, balas “dum-dum” que causaban horribles heridas. Pero la tarea principal de la Conferencia era redactar el “Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra en tierra”, ampliamente inspirado en la Declaración de Bruselas y en el Manual de Oxford, redactar el Convenio para el arreglo pacífico de los conflictos y el Convenio para la adaptación del Convenio de Ginebra de 1864 a la guerra marítima, cuyas disposiciones se mejoran y completan en el Convenio de Ginebra del 6 de julio de 1906 con sus 33 artículos.

La Conferencia expresó el deseo de que se celebrase, para completar su obra, una segunda Conferencia de la Paz, que tuvo lugar el año 1907, también en La Haya, esta vez convocada por el presidente de los Estados Unidos. Durante esta segunda Conferencia de la Paz, se revisaron el Reglamento y los otros dos Convenios, sobre todo el que versa sobre el arreglo pacífico de los conflictos; de hecho, se añade el esbozo de un procedimiento para prevenirlos: el arbitraje. De las tres declaraciones, se reproducen dos: las relativas a las balas dum-dum y a los proyectiles lanzados desde globos. Entre los nuevos Convenios, uno versa sobre el comienzo de las hostilidades, otro sobre los derechos y deberes de los neutrales; los otros siete sobre la guerra en el mar, y es ésta la obra principal de la segunda Conferencia de la Paz de 1907. El Reglamento de La Haya ha regido la guerra en el transcurso del siglo XX, y algunas de sus disposiciones están todavía en vigor. Por una parte, se determinan los derechos y deberes de los beligerantes en la conducción de las hostilidades, en particular el comportamiento de los combatientes y, por otra parte, se limita la elección de los medios para causar daños. Sin embargo, en muchos puntos, el Reglamento ha sido completado, e incluso reemplazado, por los Convenios de Ginebra de 1929 y 1949 y, más recientemente, por sus Protocolos adicionales de 1977.

Durante la Conferencia Diplomática del 27 de julio de 1929, se adaptó el Convenio de 1906 con la aviación sanitaria Art. 18 Convenio I, y suprimiendo el Art. 25 Convenio I la cláusula *si omnes*<sup>25</sup>, Art. 24 Convenio 1906. Además, la Conferencia Diplomática de 1929 reconoció a los países musulmanes el derecho a servirse de la media luna roja, en lugar de la cruz roja, Art. 19 Convenio I. El Convenio II de 1929 refuerza la protección de los prisioneros de guerra ya considerada en el Convenio IV de La Haya en el cual se definía la categoría de combatientes que tiene, en caso de captura, derecho al estatuto de prisionero de guerra y que se beneficie de un trato particular.

De índole específicamente humanitaria, elemento primordial de civilización y de paz, el Derecho de Ginebra encarna el ideal mismo de la Cruz Roja. Así mismo, los textos del Derecho de La Haya son también de inspiración humanitaria pero su finalidad es reglamentar las hostilidades y, por ello, se basan parcialmente todavía en las necesidades militares y en la conservación del Estado. El conjunto de estos derechos se concreta en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Todavía existen dos ámbitos que pertenecen claramente al derecho de La Haya: el Convenio de 1954 para la protección de los bienes culturales, firmado, por lo demás, en la metrópoli neerlandesa, y el Convenio firmado en Ginebra, el 10 de octubre de 1980, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sobre la prohibición o la restricción del empleo de determinadas armas convencionales.

---

<sup>25</sup> Disposición según la cual los tratados eran aplicables sólo cuando los beligerantes son partes en los mismos

#### **4. Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos<sup>26</sup>**

Por lo que respecta a las ideas, estos dos movimientos tienen el mismo origen histórico y filosófico: tanto el uno como el otro nacieron de la necesidad de proteger a la persona humana contra las fuerzas que la amenazan. Sin embargo, de este concepto surgieron dos tendencias distintas: limitar los males de la guerra y defender al ser humano contra la arbitrariedad. En el transcurso de los siglos, han seguido un desarrollo paralelo.

Evidentemente, los Derechos Humanos son los principios más generales, mientras que el Derecho Internacional Humanitario es de índole particular y excepcional, pues comienza a aplicarse en el momento preciso en que la guerra llega a impedir o a restringir el ejercicio de los derechos humanos. Pero los dos sistemas jurídicos son diferentes, porque si el Derecho Internacional Humanitario sólo es válido en caso de conflicto armado, los Derechos Humanos se aplican prácticamente sobre todo en tiempo de paz, ya que sus instrumentos contienen cláusulas derogatorias para los casos de conflicto. Además, los Derechos Humanos se derivan esencialmente de las relaciones entre el Estado y los propios súbditos, mientras que el Derecho Internacional Humanitario depende de las relaciones entre el Estado y los súbditos enemigos.

Tras un largo período de evolución por separado, esas dos ramas del derecho internacional se han acercado progresivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que sus ámbitos de aplicación se entrelazan, en gran parte. Tienen ambas el mismo objetivo: la protección de la persona humana. En cambio, los respectivos puntos de mira son situaciones diferentes y han evolucionado de manera distinta. No obstante, se han establecido entre los Convenios de Ginebra y los convenios de los Derechos Humanos relaciones que ponen estas dos ramas del derecho internacional en relación la una con la otra sin

---

<sup>26</sup> Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Folleto N°13. Naciones Unidas

que, con la mayor frecuencia, se haya tenido tal intención. De hecho, por un lado, se puede descubrir en los Convenios de Ginebra de 1949<sup>27</sup> una tendencia a considerar sus estipulaciones como normas que establecen no ya solamente obligaciones que gravan a los Estados contratantes sino también derechos individuales de los cuales gozan las personas protegidas. Así, se prevé, en cada uno de los cuatro Convenios, que las personas protegidas no pueden renunciar a los derechos que en los mismos se les conceden (artículo 7 de los tres primeros Convenios, artículo 8 del cuarto). Además, el artículo 3, común a los cuatro Convenios, impone a las Partes el respeto, en los conflictos no internacionales, de reglas mínimas de humanidad; reglamenta, de ese modo, las relaciones entre los Estados y sus propios súbditos y se adentra, por lo tanto, en el ámbito tradicional de los Derechos Humanos.

Por otro lado los convenios sobre los Derechos Humanos son, en principio, aplicables también en los conflictos armados<sup>28</sup> cuando un conflicto no amenaza la vida de la nación, lo que puede ocurrir en intervenciones militares limitadas de un Estado en el territorio de otro Estado, los convenios de los Derechos Humanos son aplicables en toda su amplitud, paralelamente al Derecho Internacional Humanitario.

La convergencia del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos contribuye a mostrar que la guerra y la paz, las guerras civiles y los conflictos internacionales, el derecho internacional y el derecho interno son más y más interdependientes. El derecho de la guerra y el derecho de la paz, el derecho internacional y el derecho interno, cuyos ámbitos de aplicación estaban, en su origen, claramente separados, son hoy, a menudo, aplicables simultánea y paralelamente. Así, los Convenios de Ginebra y los Convenios de los Derechos Humanos pueden aplicarse, con frecuencia, de manera cumulativa.

---

<sup>27</sup> Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Normas fundamentales del Derecho Internacional humanitario aplicables a los conflictos armados. Suiza, 1979

<sup>28</sup> Artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950

### C. Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949<sup>29</sup>

"La Cruz Roja es la única gran idea en nombre de la cual no se ha jamás matado. De su acción caritativa y cotidiana, desde su origen, esa idea ha suscitado la conclusión de los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra que han salvado innumerables vidas. Estoy convencido que el porvenir del mundo reposa sobre el respeto del derecho. Este Derecho de Ginebra, háganlo que viva, que resplandezca, que salve".<sup>30</sup>

En 1934, la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Tokio, aprobó el "Proyecto de convenio relativo a las personas civiles de nacionalidad enemiga que se hallan en el territorio de un beligerante o en el territorio ocupado por éste", preparado por el CICR. Pero ese proyecto tampoco llegó a resultado alguno, porque los Gobiernos se opusieron a la convocación de una Conferencia Diplomática que hubiera podido conducir a su aprobación. Así, las disposiciones del proyecto de Tokio no pudieron ser aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que ya sabemos.

Después de la Segunda Guerra Mundial y tras de una conflagración sin precedentes, de un lado se organizaba la paz bajo la autoridad de las Naciones Unidas y por otro se elaboraba la elaboración de los Derechos Humanos, paralelamente se decidió revisar y completar los Convenios de Ginebra, fue la labor de la Conferencia Diplomática de 1949. La Conferencia Diplomática de 1949 tiene capital importancia por más de una razón, de hecho, además de revisar los convenios anteriores, cuyos textos quedan así, armonizados y reforzados, permite elaborar el cuarto "Convenio sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra".

---

29 CICR "Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949". Publicación CICR, Ginebra 1998

30 Jean Pictet Desarrollo y principios del Derecho Internacional Humanitario.. Instituto Henry Dunant. Ginebra 1986

Estos Convenios, con sus dos protocolos adicionales de 1977 que contienen unos 600 artículos, son un verdadero “monumento” jurídico, que han salvado desde hace más de cincuenta años, la vida de innumerables víctimas de conflictos armados. Los Convenios de 1949 fueron firmados por 61 Estados, y a partir de entonces se han universalizado por la vía de adhesión, siendo en la actualidad 191 los Estados que son Partes en estos.<sup>31</sup>

### **1. Convenio I de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña**

Surgió a raíz de la poca o ninguna ayuda que recibían los heridos en tiempo de conflicto armado en tierra, debido esto en gran parte a que los combatientes del bando contrario no atendían e incluso llegaban a matar a los heridos que encontraban a su paso, lo cual no debe suceder.

Su primera versión consta de 10 artículos, es firmada el 22 de agosto de 1864 bajo el nombre de “Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña” siendo su primera obligación respetar al militar herido, es decir no atacarlo, salvaguardar al adversario fuera de combate. La segunda obligación es tomar medidas concretas para protegerlo: buscar, socorrer, asistir sin distinción de nacionalidad, Los dos criterios fundamentales son la no-discriminación y la urgencia. Así se prestará ayuda al enemigo gravemente herido antes que al amigo levemente herido.

Este primer Convenio de Ginebra fue una verdadera revolución en el campo del Derecho Internacional, ya que por la primera vez los estados aceptaron de limitar

---

31 Anexo N°2, Cuadro de los Estados partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales de 1977 y comentarios (Junio 2003)



una parte de su soberanía a una idea moral, por la primera vez, la guerra cedía el paso al derecho.

La primera revisión consta de 33 artículos, pero sin modificación en la esencia de su primera versión, fue firmada el 6 de julio de 1906, bajo el nombre de “Convenio para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos y enfermos en los ejércitos en campaña”. En su segunda adaptación la conferencia diplomática de 1929 reconoció a los países musulmanes de servirse de la media luna roja en lugar de la cruz roja, también se incluyó la aviación sanitaria y se suprimió la cláusula “si omnes”.

Durante la Segunda Guerra Mundial los beligerantes haciendo uso de la facultad que se le ofrecía, retuvieron nuevamente en los campamentos a los médicos y enfermeros para prestar asistencia a los cautivos; En ausencia de toda reglamentación se tendió a tratar como prisioneros de guerra a los miembros de este personal retenidos. En consecuencia se introdujo en el Convenio I de 1949 lo que Henry Dunant llamaba la neutralidad, de aquí en adelante los médicos y enfermeros ya no serían considerados como combatientes y quedarían exentos de captura. Se reconoció la neutralidad de ambulancias y hospitales militares.

La asistencia incluye los cuidados médicos, pero también la asistencia espiritual. Por ello en los Convenios se prevé que el “personal religioso” (sacerdotes, ministros del culto), sea protegido de la misma manera que el personal sanitario.

## **2. Convenio II de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar**

La batalla naval de Lissa, especie de “Solferino marítimo” en 1866, demostró trágicamente la falta de normas humanitarias válidas para la guerra en el mar y es hasta los Convenios de la Haya que se empieza a regular. El conflicto de las Islas

Falkland-Malvinas<sup>32</sup> es el primer caso de aplicación de este Convenio tras su aprobación en 1949.

Amplía la protección del Convenio I, ya que además de los heridos y enfermos, habla también de los náufragos. Se entiende por náufragos a las personas sean militares o civiles que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que les afecte y que se abstengan de todo acto de hostilidad. No se puede atacar contra su vida ni se los puede perjudicar de ninguna manera. Serán recogidos y tratados humanamente y recibirán en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve la asistencia médica que exija su estado. No se hará con ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos. Cada adversario debe atenderlos como si fueran los propios heridos. El nombre y las características del buque deben comunicarse a la parte adversa diez días antes de su utilización, según el artículo 22 del Convenio II. Las características que deberán figurar en la notificación comprenderán el tonelaje bruto registrado, la longitud de popa a proa y el número de mástiles y chimeneas. Las medidas de señalamiento estipuladas en el artículo 43 del Convenio II se tomaron a fin de poder identificar los buques hospitales; debe ser de color blanco todas las superficies exteriores y se deben de pintar cruces de color rojo oscuro a cada lado del casco y en las superficies horizontales. En el palo mayor deberá izarse, lo más alto posible, un pabellón con la cruz roja.

Pero los métodos clásicos de señalamiento resultaron insuficientes en cuanto a las técnicas modernas de la guerra naval y a las condiciones climáticas, ya que de noche no son muy visibles las cruces rojas aunque el buque esté completamente iluminado y aun de día es difícil identificarlas, sobre todo si hace mal tiempo. Especialistas estudiaron esta cuestión y se aprobó un reglamento relativo a la identificación como un anexo técnico al Protocolo Adicional I. En ese reglamento se estipula la utilización de una señal luminosa: una luz azul con destellos de gran

---

32 Conflicto entre Inglaterra y Argentina por la disputa de las Islas Malvinas en 1984

visibilidad debido a la frecuencia de los destellos. La utilización de esta luz se prevé también en el Código Internacional de Señales publicado por la Organización Marítima Internacional, pero actualmente no es todavía muy utilizada. Es interesante destacar que el Reino Unido hizo una prueba de utilización de la luz azul improvisada (modelo automóvil de policía), durante el conflicto ya referido, se pudo identificar un buque a 7 millas marinas con anteojos prismáticos cuando la visibilidad normal era de una milla marina.

### **3. Convenio III de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra**

Henry Dunant, había propuesto, de entrada, determinar, mediante un Convenio internacional, el trato a los prisioneros de guerra, al mismo tiempo que el trato debido a los heridos.

En 1863, cuando se fundó la Cruz Roja, los Estados Unidos, empeñados en la tan sangrienta guerra de Secesión, habían adoptado las “Instrucciones para los ejércitos en campaña”, el Código de Lieber, de un muy elevado nivel humanitario y realizado por un jurista norteamericano de origen prusiano. Estas “Leyes de Lieber”, como se las ha llamado, y que se inspiran en el pensamiento de los filósofos del siglo XVIII, se fundan en la idea de que la guerra sólo es lícita cuando se conduce según ciertas reglas.

Pronto se perfiló un movimiento para elaborar un estatuto de los prisioneros de guerra. En 1874, la Conferencia de Bruselas trabajó sobre este tema, así como el Instituto de Derecho Internacional, que publicó, en 1880, el “Manual de Oxford”, cuyo autor principal fue Gustave Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja.

Tras toda esta labor, se pudo redactar el famoso Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1899, sobre las leyes y costumbres de la guerra en tierra, revisado

en 1907. En este Reglamento no hay más que 17 artículos acerca de los prisioneros de guerra, en los que se sienta el principio de que los prisioneros están en poder del Gobierno enemigo, pero no en poder de los individuos que los han capturado; este Gobierno puede internarlos para impedir que reanuden la lucha, pero debe tratarlos humanamente y mantenerlos como a las propias tropas; puede obligarles a realizar ciertos trabajos, pero no relacionados con las operaciones militares.

De 1914 a 1918, estas reglas rigieron la suerte que corrían 7 millones de seres humanos. Pero, por importantes que fueran estas garantías, el régimen de los prisioneros siguió siendo con frecuencia penoso en el transcurso del primer conflicto mundial. Todo esto proporcionaba los materiales del futuro “Código de los prisioneros de guerra” que, firmado en Ginebra el año 1929, reglamentaría el cautiverio en toda su amplitud. A falta de argumentos jurídicos, o pseudo jurídicos, se rehusó que ciertas categorías de prisioneros se beneficiaran, de manera más o menos completa, de este Convenio, así pues, uno de los objetivos principales de la revisión efectuada en 1949 era ampliar el círculo de personas que, en caso de captura, tendrían derecho al estatuto de prisioneros de guerra. Tal es la finalidad del largo artículo 4, verdadera clave del Convenio III de Ginebra.

La Conferencia Diplomática de 1949 hizo suya la famosa disposición del Reglamento de La Haya en la que constan las cuatro condiciones que deben reunir los combatientes para beneficiarse del Derecho Internacional Humanitario:

- Tener un jefe responsable, ostentar un signo distintivo fijo, llevar las armas a la vista y conformarse a las leyes y costumbres de la guerra.

Después, equiparó los guerrilleros a las milicias y los cuerpos de voluntarios, admitidos junto al ejército regular, a condición de que «pertenezcan» a una parte en el conflicto.

Por último, innovando con respecto a La Haya, se previó que las formaciones podrían actuar también en territorio ocupado. En dicho Convenio está estipulado que los prisioneros de guerra tienen derecho a un trato humano; no se podrá ejercer ningún tipo de tortura sobre ellos no se podrá atentar contra su vida; tienen derecho a un alojamiento adecuado, alimentación y asistencia médica; se autoriza que reciban correspondencia y paquetes de sus familiares, se prevé que ciertas agencias neutrales tales como el CICR, visiten los campamentos de los prisioneros. Los combatientes heridos, enfermos y náufragos capturados tienen el estatuto de prisioneros de guerra. Hasta que se hayan curado o hayan desembarcado.

Uno de los más importantes elementos relacionados con el estatuto de prisionero de guerra es el hecho de que no puede ser juzgado o condenado por haber tomado las armas: por lo que en cierto modo, desempeña “su función”. Se le puede castigar por haberlo hecho mal, es decir, por haber infringido el derecho humanitario, pero no por haber tomado las armas. No es el caso de las situaciones de conflicto armado interno en las que, si son capturados los miembros de la posición armada se benefician de garantías de trato humano y judiciales, pero pueden ser condenados por haber tomado las armas, ya que jurídicamente no tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra.

Los Estados que detienen a prisioneros de guerra, deben asumir la correspondiente responsabilidad. Tiene la obligación de garantizarles condiciones de vida decentes, de transmitir al país de origen de los prisioneros las listas con los nombres de éstos y las informaciones que puedan tranquilizar a los respectivos familiares por lo que atañe a la suerte que corren; deben ser puestos en libertad y ser repatriados sin demora, al cese de las hostilidades.

Hay una sección destinada a las relaciones de los prisioneros con las autoridades. Los prisioneros tienen derecho a elegir entre ellos a “un hombre de confianza” encargado de representarlos ante las autoridades de la potencia detenedora y de los

organismos de asistencia. Así mismo tiene derecho a formular queja ante los representantes de los órganos de control, ya sea la Potencia Protectora o el CICR. En el artículo 126 de este Convenio se atribuye al CICR una función de control que se efectúa mediante visitas a los prisioneros de guerra:

“Los representantes o delegados de las potencias protectoras quedarán autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de trabajo, tendrán acceso a todos los locales ocupados por prisioneros, Quedarán igualmente autorizados a presentarse en todos los puntos de partida, de paso o de llegada de prisioneros trasladados. Podrán conversar sin testigos con los prisioneros”.

“Los Delegados del CICR, se beneficiarán de las mismas prerrogativas. La designación de estos Delegados estará sometida a la aprobación de la Potencia en cuyo poder se encuentren los cautivos que hayan de ser visitados”.

Se menciona también que el castigo disciplinario más grave es de 30 días de arresto. En este convenio se prevé también que con ciertas condiciones, los prisioneros de guerra trabajen durante el período de detención. Habida cuenta de las circunstancias y de las condiciones geográficas y meteorológicas. El artículo 52 menciona que “A menos que sea por su propia voluntad, ningún prisionero podrá ser empleado en faenas de carácter malsano o peligroso”, La recogida de minas u otros artefactos análogos será considerada como trabajo peligroso.

Cuando dos países se encuentran en estado de guerra por ejemplo en el caso de Irán e Irak, o Argentina y Gran Bretaña a causa de las Islas Malvinas, tienen el deber de permitir que el CICR visite sus campamentos de internamiento. Sin embargo en la actualidad muchos de los prisioneros que el CICR visita, son prisioneros políticos que no están protegidos por los convenios de Ginebra.

En este caso el CICR tiene que negociar con las autoridades para que sus delegados puedan visitar las prisiones. Para llevar a cabo su misión se base sobre su estricta neutralidad, sin favorecer a ninguna de las partes.

Otro punto sobre el cual la versión de 1949 aportó un neto progreso es la repatriación de los prisioneros de guerra tras haber finalizado el conflicto. En el texto revisado el año 1949 se estipula que se efectuará la repatriación sin demora después de finalizadas las hostilidades activas. Se podía pensar que la cuestión estaba resuelta. Pero, terminada la guerra de Corea, surgió una controversia cuando numerosos prisioneros en poder de las fuerzas aliadas rehusaron ser devueltos a su país de origen. ¿Había que repatriarlos contra su voluntad? Las Naciones Unidas respondieron negativamente a esta pregunta, y a nadie se le obligó a partir. En el futuro, y sin dejar de tener en cuenta consideraciones de humanidad en casos individuales, habrá que velar cuidadosamente por no menoscabar el principio fundamental de la repatriación; de lo contrario, se corre el riesgo de que finalmente, por diversos pretextos, ya nadie sea repatriado.

Señalemos todavía que los Convenios de Ginebra de 1949 han sido universalmente ratificados, en particular el que determina el trato debido a los prisioneros de guerra, lo cual es un progreso considerable con respecto a su versión de 1929, pues ya hemos visto que esta falta de universalidad fue entonces un obstáculo y la causa de grandes dramas que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial.

#### **4. Convenio IV de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra**

En los tiempos modernos ha triunfado, tras siglos de oprobio, el principio según el cual las operaciones militares deben limitarse a las fuerzas armadas y los no combatientes quedan fuera de la lucha. Se tratará aquí la cuestión desde el punto de

vista de la protección de las personas civiles contra la arbitrariedad o los abusos de poder del enemigo.

En tiempo de paz, se determina el estatuto de los extranjeros mediante tratados, y tanto sus personas como sus bienes están protegidos por los órganos diplomáticos y consulares de su país de origen. Pero, en cuanto surge un conflicto armado, se derrumba todo este edificio de derecho contractual. Todavía no hace mucho tiempo, estas numerosas personas civiles, establecidas a veces desde hacía decenios, incluso desde hacía varias generaciones, en la región, se veían privadas de toda protección jurídica y estaban a la merced de las autoridades del país de residencia. En 1914-1918, se vio lo que ocurría realmente. Ya el primer día de la movilización, la mayoría de los Estados cerraron sus fronteras y retuvieron a las personas de nacionalidad enemiga, que fueron casi todas internadas.

Después del conflicto, el CICR redactó el proyecto de Tokio, aprobado en 1934 durante la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Por lo que atañe a las personas civiles en territorio enemigo, en el Proyecto se limitaba el internamiento a las personas movilizables o sospechosas; se permitía volver a su patria a quienes lo desearan; se prohibían las evacuaciones forzosas y las deportaciones en masa; se preveía un régimen de libertad para quienes se quedaran, a reserva de las necesarias medidas de control y de seguridad; Por último, se aplicaría a las personas civiles internadas un trato por lo menos igual a los debido a los prisioneros de guerra.

Estaban prohibidas, en los territorios ocupados, las deportaciones de población y las ejecuciones de rehenes, y se garantizaba a las personas civiles el derecho a recibir y enviar correspondencia, así como a recibir socorros. La Conferencia de la Cruz Roja encargó al CICR prever, de acuerdo con el Gobierno suizo, la reunión



de la Conferencia Diplomática que confiriera vigor al “Proyecto de Tokio”<sup>33</sup>. Solamente en 1939 se fijó la fecha de la Conferencia Diplomática para comienzos de 1940. Pero era demasiado tarde: el desencadenamiento de las hostilidades imposibilitó su reunión, así las disposiciones del Proyecto de Tokio no pudieron ser aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Ya los primeros días de la guerra, el CICR propuso a los Estados beligerantes poner en vigor el Proyecto de Tokio. Ante la poca diligencia demostrada, surgió después una solución subsidiaria en favor de las personas civiles que se encontraban en territorio enemigo al comienzo de las hostilidades, es decir, aplicar a quienes fueran internados las pertinentes disposiciones del Convenio sobre los prisioneros de guerra. Esta solución reducida fue aceptada por las Potencias, entre las cuales se concertó una especie de acuerdo por medicación del CICR. El resultado fue que unas 160.000 personas civiles disfrutaron de un estatuto jurídico y de garantías análogas a las de los prisioneros de guerra. Pero nada se había previsto en favor de las personas civiles de los países ocupados, siendo así que el Proyecto de Tokio, si hubiera sido aprobado, habría salvaguardado también a esta categoría de personas. Ahora bien, la ocupación de la mayor parte de Europa por los Estados del Eje hizo que millones de personas civiles cayeran bajo la dependencia de un solo beligerante. Como se había roto el equilibrio y la reciprocidad ya no ejercía su influencia moderadora, estas personas civiles se vieron cada vez más sometidas a la arbitrariedad: millones de ellas estaban expuestas a deportaciones, a tomas de rehenes, a internamiento en los campos de concentración, a las peores crueldades y a la muerte. Todos conocen este gran drama de los tiempos modernos.

Así pues, los trabajos de la postguerra tendentes al desarrollo del derecho humanitario estuvieron dominados por la imperiosa necesidad de disponer, finalmente, de un instrumento diplomático eficaz que aportara a las personas

---

33 Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Tokio, 1934

civiles garantías, Por ello, el Convenio IV de Ginebra es una gran conquista de la Conferencia Diplomática de 1949. Contiene, en primer lugar, la enunciación de los grandes principios que garantizan en todas las circunstancias, el respeto a la persona humana; así, se prohíben la coacción, la tortura, los castigos colectivos y las represalias, la toma de rehenes, las deportaciones. El progreso capital es que todas las personas civiles privadas de libertad, por la razón que fuere, disfrutarán, en adelante, de un trato detalladamente reglamentado equivalente, *mutatis mutandis*, a los debido a los prisioneros de guerra.

**5. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional**<sup>34</sup>

a. Comentario al artículo 3 común<sup>35</sup>

Un punto de gran reflexión de la Conferencia Diplomática de 1949, fue, lograr que las normas que protegen a la persona humana en las guerras internacionales, o por lo menos sus principios esenciales, puedan aplicarse en los conflictos internos. Durante la Guerra de Secesión<sup>36</sup>, a pesar de su índole mortífera, no fue descartado el derecho, gracias a Abraham Lincoln y a su asesor jurídico Francis Lieber, que dedicó al conflicto interno toda una sección de las famosas “Instrucciones para los ejércitos en campaña” y afirmó el deber que las dos partes tienen de respetar las leyes de la guerra.

En 1936, estalló la guerra civil en España, que ensangrentó durante tres años la Península Ibérica, finalizada la segunda conflagración mundial, se vio muy pronto que habría cada vez menos guerras internacionales y cada vez más guerras civiles:

---

34 Anexo N°3 Artículo 3 común de los Convenios de 1949

35 Comentario al protocolo 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Plaza y Janes editores. Colombia SA, 1998

36 Entre 1861-1862 se da la Guerra de Secesión en los EE.UU. entre el Norte y el Sur de ese país

no cabe duda de que la subversión ha llegado a ser el arma favorita. Y fue así como el CICR tuvo la idea de introducir en el derecho positivo una disposición, el famoso artículo 3 común, que trataría nada menos que someter al derecho internacional un fenómeno nacional.

Este fue el problema que hubo de resolver la Conferencia Diplomática de 1949 tras los más largos y apasionados debates. La solución resultante es nueva, atrevida, paradójica; es una etapa decisiva en la evolución del derecho moderno, que tiende a limitar la soberanía del Estado en beneficio del individuo.

El sistema consistió en distinguir entre los principios fundamentales de los Convenios —reglas de humanidad que tienen valor absoluto— cuya observancia se impone en todas las circunstancias, y las demás disposiciones, que las Partes deberán hacer lo posible por poner, total o parcialmente, en vigor, mediante acuerdos especiales. Dado que estos principios no estaban bien definidos en 1949, la Conferencia reprodujo, con esta finalidad, en el cuerpo del artículo 3, una fórmula general sobre el respeto a la persona. Sin embargo, la finalidad del artículo 3 no es impedir que las personas que hayan tomado las armas contra el Gobierno establecido sean condenadas por este acto en virtud de la ley nacional. No se dio el gran paso que habría consistido en conceder a los rebeldes capturados el mismo trato que a los prisioneros de guerra.

Este artículo, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, marca una nueva etapa en el incesante desarrollo de la idea en que se basa la Cruz Roja y en la transcripción de ésta en compromisos internacionales. Tiene, por último, la ventaja de formular, en cada uno de los cuatro Convenios, la norma común que los rige.

- Conflictos no internacionales

De manera general, hay que admitir que los conflictos a los que se refiere el artículo 3 son conflictos armados caracterizados por hostilidades en las que se enfrentan fuerzas armadas. En suma, nos encontramos ante un conflicto que presenta muchos de los aspectos de una guerra internacional, pero que se libra en el interior de un mismo Estado. En muchos casos, cada una de las dos partes está en posesión de una parte del territorio nacional y, a menudo, existe alguna forma de frente.

- Obligaciones de las Partes

Las palabras “cada una de las Partes” marcan toda la evolución que el derecho internacional ha experimentado en algunos años. Todavía no hace mucho se consideraba como jurídicamente irrealizable la idea de obligar mediante un Convenio internacional a una parte no signataria y, lo que es más, a una parte aún no existente, de la que ni siquiera se exige que represente a una entidad jurídica capaz de comprometerse internacionalmente.

La obligación para cada una de las partes es incondicional. Fue a propósito que se omitió la cláusula de reciprocidad, que figuraba para el Convenio IV en el proyecto de Estocolmo. Esto representa un progreso importante, aunque es cierto que está compensado por el hecho de que ya no es el conjunto del Convenio lo que es aplicable, sino únicamente el contenido del artículo 3 mismo.

El artículo 3 tiene cuidado de puntualizar que las disposiciones aplicables representan un mínimo obligatorio. Las palabras como mínimo deben entenderse en ese sentido, a la vez que constituyen un estímulo para superar ese mínimo. El valor de esta disposición sobrepasa el marco del simple artículo 3. Si representa el mínimo que debe aplicarse en el más indeterminado de los conflictos, con mayor razón debe respetarse en los conflictos internacionales propiamente dichos, que

implican la aplicación internacional del Convenio, pues podría decirse que “quien está obligado a lo más, está obligado a lo menos”.

- Un trato humano

Es el fundamento mismo de los cuatro Convenios de Ginebra. Esta definición no es, como veremos, muy precisa. En cambio, es más fácil enumerar lo que es incompatible con un trato humano. Es la vía que sigue el Convenio, enunciando cuatro prohibiciones absolutas. La fórmula no puede ser más clara:

“A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar (...)”.<sup>37</sup>

No hay escapatoria, ni excusa, ni circunstancia atenuante posible.

- Asistencia a los heridos y los enfermos

El artículo 3 reafirma aquí, generalizándolo, el principio que está en la base del Convenio I de Ginebra de 1864 es un imperativo categórico que no admite restricciones ni siquiera interpretaciones.

- Derecho de iniciativa humanitaria

Con la aprobación del artículo 3, la situación cambia. El ofrecimiento de servicios de una institución humanitaria imparcial está legitimado. Las partes en conflicto pueden, sin duda, declinar tal ofrecimiento si no necesitan esos servicios. Pero ya no podrán ver en él un acto inamistoso, ni reprochar al autor del ofrecimiento que intente socorrer a las víctimas del conflicto.

Es evidente que la ayuda exterior no puede ni debe ser más que supletoria. Es a las partes en conflicto a quienes les corresponde aplicar el artículo 3 y procurar que se observen todas sus disposiciones. Para que los ofrecimientos de servicio sean legítimos, y puedan ser aceptados, deben emanar de un organismo humanitario e

---

<sup>37</sup> Jean Pictet "Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional"

imparcial. Y es necesario que los servicios ofrecidos y prestados tengan este mismo carácter de humanidad e imparcialidad.

- Acuerdos Especiales

Las partes en conflicto sólo están, pues, obligadas legalmente a observar el artículo 3, y pueden hacer caso omiso de todos los demás. Esta disposición no sólo brinda una posibilidad práctica, sino que hace, además, una exhortación acuciante, señala un deber: "las Partes en conflicto harán lo posible por (...)". Aunque las partes, cada una por lo que le atañe, no tienen el deber de observar unilateralmente otra norma que el artículo 3, están obligadas a procurar una aplicación más amplia, mediante un acuerdo bilateral.

- Ausencia de efecto sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto

Esta disposición es esencial. Sin ella nunca se habría votado el artículo 3, ni ningún otro en su lugar. Responde siempre al mismo temor de que, en caso de guerra civil, la aplicación del Convenio, incluso muy restringida, entrabase al Gobierno legal en su represión legítima de la rebelión o confiriese al bando adverso el estatuto de beligerante, acrecentando así su autoridad y poder. Puntualiza, con la mayor claridad, que el objetivo del Convenio es exclusivamente humanitario; que no afecta en nada a los asuntos internos del Estado; que sólo garantiza el respeto del mínimo de normas humanitarias que todos los pueblos civilizados consideran como válidas en todas partes y en todas las circunstancias, por estar por encima y fuera incluso de la guerra. Así pues, el hecho de aplicar el artículo 3 no constituye en sí mismo, por parte de un Gobierno legal, ningún reconocimiento de poder alguno a la parte adversa; no limita de ningún modo su derecho "que le confiere su propia ley" a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada a su derecho a perseguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de conformidad con la propia ley.

De igual manera, para el bando adverso, sea cual fuere, así como la calificación que él se dé o que pretenda, el hecho de aplicar este artículo no le confiere ningún derecho a una protección especial, ni ninguna inmunidad.

El artículo 3 “como todo el Convenio, por lo demás” sólo tiene por objeto el individuo y el trato físico debido a su condición de ser humano, independientemente de las otras calidades de la que está revestido, pero carece de efecto sobre el trato jurídico o político que puede acarrearle su comportamiento.

## **6. Protocolos adicionales a los cuatro convenios de 1949**<sup>38</sup>

Los Convenios de Ginebra de 1949 constituyeron un importante progreso en el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. No obstante, tras la descolonización, resultaba difícil a los nuevos Estados obligarse mediante un conjunto de normas en cuya elaboración no habían participado. Además, las normas convencionales sobre la conducción de las hostilidades no habían evolucionado desde los tratados de La Haya de 1907.

Pero, revisar esos Convenios habría conllevado el riesgo de poner en tela de juicio algunos logros de 1949. De ahí la idea de mejorar la protección de las víctimas de los conflictos armados mediante la adopción de nuevos textos en forma de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Las condiciones para que se puedan aplicar los Protocolos Adicionales es que estén ratificados y depositados ante el Consejo Federal Suizo y que hayan transcurrido 6 meses, pero si el Estado todavía está implicado en conflicto, la denuncia no surtirá efectos hasta en tanto se terminen las operaciones de liberación y de repatriación de las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

---

38 Normas Fundamentales de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. CIRC, Ginebra, 1983

Los dos Protocolos adicionales con los 102 artículos del Protocolo I, (relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales) y los 28 artículos del Protocolo II, (relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales) se aprobaron el 8 de junio de 1977, terminando la Conferencia Diplomática dos días más tarde con la firma solemne del Acta Final, suscrita por casi todas las delegaciones. En la actualidad 161 Estados son Partes del Protocolo adicional I y 156 Partes del Protocolo adicional II.<sup>39</sup>

Con más de 600 artículos, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977 son los principales instrumentos del derecho internacional humanitario (DIH)

a. Protocolo I (conflictos armados internacionales)

- Proteger a las personas civiles contra los efectos de las hostilidades

La aprobación de normas para proteger a la población civil contra los efectos de la guerra es un logro considerable en el derecho humanitario. Un título entero del Protocolo I versa sobre esta cuestión. En lo sucesivo, esas normas deberán evitar a la población civil grandes sufrimientos y dramas, como los registrados durante la Segunda Guerra Mundial.

Para proteger a las personas civiles contra los efectos de las armas había hasta 1977, solamente textos incompletos: el Convenio de La Haya relativo a la conducción de las hostilidades data de 1907, época en la que no existía la aviación y cuando la artillería sólo alcanzaba objetivos a una distancia relativamente corta; por su parte, el Convenio IV de Ginebra de 1949, excepto en algunas normas generales, únicamente protege a las personas civiles contra los abusos de poder de

---

<sup>39</sup> Anexo N°2, Cuadro de los Estados partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales de 1977 y comentarios (Junio 2003)



la autoridad enemiga u ocupante; no contiene ninguna disposición relativa al empleo de las armas, a sus efectos y, en especial, a los bombardeos masivos.

Por lo demás, en los treinta últimos años han surgido nuevos tipos de conflictos, y armas cada vez más perfeccionadas y destructoras, por consiguiente, la población civil, a menudo involuntariamente entremezclada con los combatientes, es cada vez más vulnerable. Por lo que era importante prever, en este ámbito, normas jurídicas de protección.

El título IV, del Protocolo I, protege tanto a las personas como los bienes civiles, definidos éstos por oposición a los objetivos militares. Se indica expresamente que está prohibido atacar a la población civil como tal —y los bienes civiles— así como que sólo pueden dirigirse ataques contra los objetivos militares. Los bombardeos masivos, como los que en la Segunda Guerra Mundial causaron millones de muertes, están en adelante prohibidos, lo mismo que los ataques por represalias. Se prohíben los ataques indiscriminados, es decir, los que pueden dañar indistintamente objetivos militares, personas, o bienes civiles, así mismo, está prohibido atacar localidades o zonas no defendidas y desmilitarizadas. Por último, las fuerzas armadas deben tomar medidas de precaución para preservar al máximo durante las operaciones militares a la población y los bienes civiles.

Se dedican cuatro artículos a los socorros, en favor de la población civil, ámbito que interesa sobre manera a la Cruz Roja. De conformidad con esas disposiciones, las partes en conflicto deben proporcionar los socorros necesarios a la población civil o, si no pueden hacerlo ellas mismas, deben permitir que pasen libremente los artículos indispensables para su supervivencia. Esta norma se aplica en toda circunstancia, incluso si se trata de una población enemiga o que vive en territorio ocupado. Las modalidades de acción comportan facilidades para los organismos de socorro, así como la protección del personal especializado.

Esos artículos completan las disposiciones del Protocolo I referentes a los bienes civiles, que prohíben utilizar el hambre como método de guerra. Además, en lo sucesivo están protegidos los bienes indispensables para la supervivencia (zonas agrícolas, ganado, reservas de agua potable, cosechas, obras de riego, etc.), así como las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (centrales eléctricas y nucleares, diques, embalses, etc.), los bienes culturales y los lugares de culto. Por último, deben conducirse las operaciones militares de modo que el medio ambiente natural resulte protegido contra daños duraderos, extensos y graves.

Para garantizar una eficaz protección de las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, la Conferencia adoptó un signo de protección internacional: tres círculos de color anaranjado vivo.

El capítulo VI, artículo 64, se refiere a los organismos de protección civil, en adelante estos organismos están protegidos y tienen derecho a facilidades de acción, incluso en territorios ocupados. Se pone de relieve la necesidad de identificar esos organismos y se les asigna un emblema específico: un triángulo azul sobre fondo anaranjado.

- Trato debido a las personas en poder de una parte en conflicto

La protección que en los Convenios III y IV de Ginebra se estipula para las personas en poder de una parte en conflicto se amplía y se refuerza en el Protocolo I, pues se introducen garantías fundamentales de respeto a la persona, que incluyen una enumeración de los actos prohibidos, tales como asesinato, tortura, castigos corporales, mutilaciones, atentados contra la dignidad humana, toma de rehenes, castigos colectivos y la amenaza de cometer tales actos. Se prevén garantías judiciales en caso de que se detenga a una persona por un delito relacionado con el conflicto: el sospechoso tiene derecho a ser informado, en un idioma que comprenda, de los hechos que se le imputan. Si hay sentencia, debe dictarla un tribunal imparcial que se atenga al procedimiento judicial regular.

Las personas acusadas de crímenes de guerra deben comparecer ante la justicia de conformidad con las reglas del derecho internacional aplicable y gozan de las garantías mínimas de trato humano, en caso de que no puedan beneficiarse, en virtud de los Convenios o del Protocolo, de un trato más favorable. Para las mujeres y los niños, se estipula una protección especial y se puntualiza que las partes en conflicto evitarán la pena de muerte contra mujeres y niños. Si ya está dictada, no la ejecutarán en caso de mujeres encintas o que tengan hijos de corta edad, o en caso de menores de 18 años.

En el Protocolo I, la protección del Convenio IV de Ginebra en favor de las personas civiles en poder de una parte en conflicto se extiende a ciertas categorías que hasta entonces no estaban protegidas. Así, se protegerá sin discriminación y en toda circunstancia, a los apátridas y a los refugiados, considerados como tales antes del inicio de las hostilidades. Además, se prevé en el Protocolo I que se facilite la reagrupación de las familias dispersas, especialmente en colaboración con las organizaciones humanitarias especializadas. En el capítulo II, artículo 78, constan normas prácticas para la evacuación de niños a un país extranjero, a fin de evitar situaciones dramáticas en el futuro (por ejemplo, niños evacuados sin documentos de identidad y de cuya familia no se puedan encontrar indicios, una vez terminadas las hostilidades) Además, ese artículo será una valiosa ayuda para el trabajo de la Agencia Central de Búsquedas del CICR y de los servicios de búsquedas de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que con ella colaboran.

Por último, mencionemos, de ese mismo capítulo, una disposición cuya finalidad es garantizar una mejor protección a los periodistas en misión peligrosa (no acreditados ante las fuerzas armadas) En adelante, éstos podrán obtener, de sus autoridades y de las autoridades del territorio en que trabajan, una tarjeta especial

de identidad en la que conste que el portador tiene derecho a ser tratado como una persona civil en el sentido de los Convenios de Ginebra.

- Protección del personal y de las unidades sanitarias civiles

Otro muy importante resultado concreto es la mejora de la protección del personal y de las unidades sanitarias civiles. En ese ámbito tradicional, punto de partida de la Cruz Roja y del primer Convenio de Ginebra hace más de un siglo, el éxito es completo.

En los Convenios de Ginebra de 1949 se estipula la inmunidad para el personal y para los establecimientos sanitarios militares, así como para los hospitales civiles reconocidos como tales y señalados con el emblema de la cruz roja o de la media luna roja. El personal sanitario militar y el de los hospitales civiles deben ser respetados y protegidos. No obstante, para garantizar rápida y eficaz asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, esa protección debía extenderse a todo el personal de sanidad civil, así como a las instalaciones sanitarias civiles, fijas o móviles. En el Protocolo I ya se remedia esa deficiencia y se otorga al personal y a los establecimientos sanitarios civiles, en tiempo de guerra, una protección similar a la reconocida para el personal y para las formaciones sanitarias militares. Para evitar abusos, se prevé, sin embargo, que de tal protección sólo se beneficiarán los elementos reconocidos por las autoridades de las partes en conflicto. Por lo demás, el Protocolo I protege al personal religioso civil por las mismas razones que al personal sanitario.

- Protección de la misión médica

También se puntualiza la protección debida a las personas víctimas de atentados, en nombre de la medicina, contra la integridad física y mental: se prohíbe utilizar a personas como proveedoras de carne humana o como cobayas, realizar experimentos pseudo médicos o extraer injustificadamente órganos para transplantes, como lamentablemente ha ocurrido en ciertos conflictos.

Por lo que respecta a la misión médica misma, también está mejor protegida, a pesar de que no se llegase, en ese ámbito, a un acuerdo en todos los puntos porque, aunque se aceptó que nadie será castigado por haber ejercido actividades de índole médica (siempre que se avengan con la deontología), en cambio, la cuestión del secreto médico queda sometida a la legislación nacional de la parte en conflicto a la que pertenezca el médico concernido.

- De los transportes sanitarios

Por lo que atañe a los transportes sanitarios terrestres, marítimos y aéreos, era igualmente urgente que se adaptasen las normas de protección y, también a este respecto, fue fructífera la labor de la Conferencia Diplomática. En primer lugar, era menester garantizar, para los medios de transporte sanitarios civiles, una protección idéntica a la estipulada para los medios de transporte sanitarios militares. Además, para la aviación sanitaria, inmovilizada en tierra desde hacía decenios por falta de protección jurídica y por el desarrollo de los medios de defensa antiaérea, también se enuncian normas precisas que deberían permitir nuevamente la utilización de las aeronaves sanitarias en tiempo de guerra. En varios artículos se puntualizan las normas de navegación aérea que deben observar las misiones sanitarias (acuerdos previos con las diversas autoridades, notificaciones de las rutas y de los planes de vuelo, etc.) Además, para señalar eficazmente las aeronaves sanitarias, se reservan, en tiempo de guerra, medios electrónicos como el radar secundario y la señal de radio, para uso exclusivo de los medios de transporte sanitarios terrestres, marítimos y aéreos. Esas disposiciones son particularmente importantes si se tiene en cuenta que hoy están tan perfeccionados los medios de detección que hacen casi nula la protección que da el signo de la cruz roja pintado en el fuselaje de un avión (o en el flanco de un buque), ya que los disparos pueden alcanzar los blancos incluso antes de que sean visibles.

Una subcomisión técnica celebró sesiones durante dos períodos de la Conferencia Diplomática y elaboró normas precisas que constan en un Anexo Técnico al Protocolo I. De conformidad con esas disposiciones, todos los medios de transporte sanitarios se benefician, en tiempo de guerra, de la señal óptica (la luz azul con destellos) ya en uso para las ambulancias civiles y militares. Además, se reservan una señal de radio, precedida por una sintonía de prioridad, y una señal de radar secundario para los medios de transporte sanitarios marítimos y aéreos. Estas normas internacionales son importantes, pues deberían permitir que, en el futuro, no se ataque, por error, como sucedió en el pasado, a aeronaves o a buques sanitarios.

Dada la rápida evolución de la tecnología, se ha previsto que reuniones de expertos, convocados bajo los auspicios del CICR, actualicen periódicamente el reglamento relativo a la identificación.

En 1979, los trabajos de la Conferencia Diplomática recibieron una confirmación suplementaria en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). De hecho, se aprobaron dos resoluciones que corroboran la necesidad de que la Cruz Roja disponga, en todo tiempo, de una red de radiocomunicaciones de urgencia. Se añadieron, además, dos disposiciones al Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones, referentes a los medios de transporte sanitarios terrestres, marítimos y aéreos, que refuerzan, de esa manera, la protección de los mismos en tiempo de guerra.

- Personas desaparecidas y fallecidas

Todo conflicto origina dramas humanos: familias dispersas, parientes muertos, deportados o desaparecidos. Buscar a un miembro de la familia del que no se tienen noticias o solicitar detalles acerca del lugar donde está inhumado son deseos legítimos. Pero, muy a menudo, las circunstancias han dificultado la obtención de

tales informaciones. A fin de evitar esos problemas en el futuro, se prevén, en el Protocolo I, normas para facilitar la búsqueda de desaparecidos, la identificación de los muertos, la protección y la conservación de las sepulturas. En un artículo se determinan las circunstancias en que se pueden exhumar o repatriar los restos de personas fallecidas.

- Métodos y medios de combate en la guerra contemporánea

Tras la Segunda Guerra Mundial, se ha modificado la forma de hacer la guerra. Pero, si hoy ya no se combate del mismo modo que ayer, ello no significa que estén permitidos todos los medios para atacar o vencer al enemigo. También los Protocolos contienen, al lado de las disposiciones para la protección de la población civil, normas que recuerdan los principios que deben observarse en el combate. A este respecto, en el Protocolo I se prohíbe recurrir a la perfidia (por ejemplo, fingir la rendición para atacar al adversario), mientras que se autorizan las estratagemas (falsa información, camuflajes, etc.) Se prohíbe ordenar que no haya supervivientes tras un ataque (cuartel) Se prohíbe, asimismo, el uso abusivo de emblemas reconocidos (signo de la cruz roja o de la media luna roja, signo de nacionalidad, bandera de las Naciones Unidas, etc.)

Por lo que atañe al empleo de ciertos medios de combate, se recuerda el principio según el cual los beligerantes no deben utilizar armas que puedan causar males superfluos a las víctimas (por ejemplo, ciertas balas que provocan heridas incurables), o armas que dañan sin discriminación (armas que, por su imprecisión, o sus efectos, alcanzan indistintamente a personas civiles y a combatientes)

- Limitar el uso de ciertas armas clásicas

La cuestión de las armas, sobre todo de sus efectos y de los sufrimientos que originan ha sido, desde hace mucho tiempo, una preocupación del CICR. En varias ocasiones, él ha comunicado a la comunidad internacional sus reflexiones sobre el particular. Paralelamente a su labor para desarrollar el Derecho Internacional

Humanitario, ha llamado la atención de los expertos acerca de esta cuestión considerando que la Cruz Roja podría examinar, sin desear que haya interferencias con los organismos que se ocupan del desarme, principios de alcance general relativos al empleo de las armas, dada su evidente relación con la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades.

En las conferencias de expertos gubernamentales que precedieron a la Conferencia Diplomática, se deliberó acerca de la oportunidad de tal debate y se decidió que no se abordaría el estudio de las armas de destrucción masiva (armas atómicas, biológicas y químicas), pero que se podría tratar el tema de las armas particularmente crueles, en ninguna otra parte examinado.

El proyecto de Protocolo I presentado por el CICR no contenía normas específicas acerca del uso de las armas clásicas; por esa razón, el CICR organizó dos reuniones de expertos militares y médicos, los años 1974 y 1976 (en Lucerna y Lugano, respectivamente), que permitieron hacer una lista de las armas que debían estudiarse. Sin embargo, no se introdujo en los Protocolos adicionales norma alguna sobre armas determinadas y, en una resolución de la Conferencia Diplomática, se remite la cuestión a la Organización de las Naciones Unidas, que convocó en 1979, luego en 1980, una conferencia cuyos trabajos finalizaron con la aprobación de una Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas clásicas.

En ese texto se prohíbe o se restringe el uso de las armas siguientes:

- . Aquellas cuyos fragmentos no son localizables en el cuerpo humano, lo que impide la curación de las heridas;
- . Las minas, las trampas y otros dispositivos (que han causado muchísimas víctimas entre la población civil, a menudo mucho tiempo después de finalizadas las hostilidades)



. Las armas incendiarias (que han originado grandes sufrimientos a la humanidad y enormes daños al medio ambiente)

Conviene señalar que la Conferencia de las Naciones Unidas no pudo llegar a un resultado por lo que respecta a los proyectiles de pequeño calibre (balas que voltean inmediatamente después del impacto en el cuerpo de las víctimas, causando heridas muy crueles) Sin embargo, sobre este punto, prosiguen actualmente la investigación y las deliberaciones.

Aunque la Convención de las Naciones Unidas sea incompleta, no sólo con respecto a las categorías de armas reglamentadas, sino también porque solo ofrece a los combatientes una protección reducida contra esas armas, es un valioso complemento de las disposiciones del Protocolo I relativas a la población civil.

- Nueva definición del prisionero de guerra <sup>40</sup>

En el Protocolo I, se amplía la definición del prisionero de guerra con respecto a la que consta en el Convenio III de Ginebra de 1949. De hecho, hasta entonces, se consideraba que eran prisioneros de guerra los miembros de las fuerzas armadas regulares y los partisanos pertenecientes a una parte en conflicto, así como ciertas personas que acompañan a las fuerzas armadas sin formar parte directamente de las mismas (por ejemplo, corresponsales de guerra, miembros civiles de la tripulación de aviones militares)

En el Protocolo I, la definición de prisionero de guerra incluye, en adelante, a todos los miembros de las fuerzas armadas, a las unidades y los grupos armados que estén bajo un mando responsable. Los guerrilleros sin uniforme, aunque se trate de entidades no reconocidas por la parte adversa, se benefician también de esas disposiciones. Se puntualiza que todos los miembros de las fuerzas armadas deben respetar las normas del derecho humanitario, pero que no es ésa una

---

40 Anexo N°4 Protocolo I. Título III, Sección II, art. 43 - 47

condición para que se otorgue el estatuto de prisionero de guerra en caso de captura. En cambio, los miembros de las fuerzas armadas tienen la obligación de distinguirse de la población civil, al menos llevando las armas a la vista cuando tiene lugar el combate. La inobservancia de esta norma puede entrañar la privación del estatuto de prisionero de guerra.

Los espías y los mercenarios, si son capturados, en ningún caso tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra ya que su estatuto no corresponde al estatuto de combatiente tal como está definido en el Protocolo I.<sup>41</sup>

No obstante, se benefician de las garantías mínimas de trato humano.<sup>42</sup>

Esta misma cláusula de salvaguardia beneficia, en tiempo de guerra, a toda persona que caiga en poder de la parte adversa, lo que supone un gran progreso en lo humanitario pues, gracias a esas disposiciones, ya nadie debería estar privado, en ninguna circunstancia, de las garantías elementales de respeto y de salvaguardia.

#### - Aplicación del derecho

El Protocolo I contiene medidas de aplicación para los Estados Partes; con objeto de facilitarla, especialmente sobre el terreno, se prevé que, en las fuerzas armadas, se asigne, para esa tarea, a consejeros jurídicos, formados ya en tiempo de paz. Asimismo, los Estados se comprometen a garantizar que, en todo momento, se dé ampliamente a conocer el Derecho Internacional Humanitario tanto a las autoridades civiles y militares como a la población.

En caso de guerra, se deben dar todas las facilidades al Comité Internacional de la Cruz Roja para que pueda asumir las tareas que se le asignan en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo; igualmente, las organizaciones respectivas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como su federación, la Liga, deben poder

---

41 Anexo N°4 Protocolo I. Título III, Sección II, art. 43 a 47

42 Anexo N°4 Protocolo I. Título III, Sección II, art. 45

realizar su labor, sin impedimentos, en beneficio de las víctimas. Esas facilidades deben concederse también a los otros organismos humanitarios que las partes en conflicto hayan autorizado a desplegar actividades en las mismas circunstancias. Se mejora, en el Protocolo I, otro punto de aplicación del derecho, por lo que respecta al mecanismo previsto en los Convenios; se trata de la designación de las potencias protectoras<sup>43</sup>. Pues, desde 1949, por razones esencialmente políticas (sobre todo por temor de que parezca que esa intervención suponga un reconocimiento de un estatuto jurídico al enemigo), poco han funcionado las potencias protectoras. El Protocolo I remedia esa deficiencia introduciendo un sistema reforzado de designación de potencias protectoras (o de su sustituto), en el que se menciona explícitamente que la aplicación de los Convenios y del Protocolo no alterará el estatuto jurídico de las partes en conflicto, ni el de territorio alguno (incluso un territorio ocupado)

- Sanciones en caso de violaciones del derecho

La cuestión de la represión de las infracciones contra los Convenios de Ginebra y contra el Protocolo I es objeto de varias disposiciones, que incluyen una lista de infracciones graves consideradas crímenes de guerra, y artículos sobre la noción de responsabilidad. Atacar a la población civil o afectarla gravemente por razón del ataque a un objetivo militar, lanzar una operación militar contra instalaciones protegidas o localidades no defendidas, utilizar con perfidia el emblema de la cruz roja se considera que son infracciones graves contra el Protocolo, así como el traslado, por una potencia ocupante, de una parte de su población al territorio ocupado, la deportación de la población de un territorio ocupado y los juicios sumarios contra personas protegidas. Se considera que los superiores son responsables de las violaciones que cometan los subordinados, en caso de que no hayan tomado las medidas necesarias para impedir que se cometan tales actos o para reprimirlos. Por último, se prevé una colaboración judicial, en materia penal, entre las partes contratantes.

---

43 Estados neutrales encargados de reproducir los intereses de un beligerante ante un adversario

Cuando sea necesaria una investigación sobre los hechos, puede intervenir, con el asenso de las partes concernidas, una comisión internacional, integrada por 15 miembros de elevada moralidad y reconocida imparcialidad. Además de investigar acerca de las alegaciones de violaciones que específicamente le hayan sido sometidas, la Comisión puede prestar sus buenos oficios para facilitar el retorno a una aplicación y una observancia estrictas del Derecho Internacional Humanitario.

-       Ámbito de aplicación del Protocolo I

El Protocolo I, relativo a los conflictos armados internacionales, extiende el ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 y el suyo propio a las luchas contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas, en el sentido de la Carta de las Naciones Unidas.

Se prevé, además, que una autoridad representante de un pueblo en lucha puede comprometerse, según los criterios indicados más arriba, a aplicar los Convenios y el Protocolo mediante una declaración de intención dirigida al Gobierno suizo, depositario de los Convenios y de los Protocolos.

En la Conferencia Diplomática de 1949, encargada de revisar los Convenios de Ginebra, el CICR presentó una propuesta para equiparar las guerras coloniales a los conflictos internacionales, pero los Estados la rechazaron. Por ello, en los decenios siguientes, no se pudo socorrer a millones de víctimas. Así pues, se ha progresado notablemente gracias al primer Protocolo adicional.

b.       Protocolo II relativo a los conflictos armados no internacionales

Se aprobó por consenso, al final de la Conferencia Diplomática, un sucinto Protocolo II (28 artículos, en vez de los 49 que contenía el proyecto inicial)

En el Protocolo II, se completa y se desarrolla de manera sustancial el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, única disposición aplicable,

hasta entonces, a los conflictos armados no internacionales (por lo demás, ese artículo sigue siendo vigente) De conformidad con el artículo I, el Protocolo II es aplicable en conflictos armados... “ que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

Reglas sucintas, pero importantes:

A pesar de un restringido ámbito de aplicación, ya que las situaciones mencionadas se caracterizan por un relativamente elevado nivel de intensidad de los enfrentamientos, las normas que contiene el Protocolo II son muy importantes para la protección de las víctimas. Se refuerzan y completan las garantías fundamentales de respeto a la persona humana. De hecho, en las disposiciones relativas al trato humano, se repiten, por lo general, las del Protocolo I: respeto a los no combatientes, no-discriminación en el trato a las personas, prohibición de ordenar que no haya supervivientes, prohibición de atentar contra la vida, la salud y el bienestar físico y mental de las personas, prohibición de la tortura, de las mutilaciones y de la toma de rehenes, etc.; protección especial para los niños, protección para las personas privadas de libertad y correspondientes garantías judiciales, obligación de buscar a los heridos, a los enfermos, a los náufragos y a los muertos. Conviene señalar que, en el Protocolo II, no se incluye a categorías especiales de personas protegidas, tales como los prisioneros de guerra: todas las personas que no participan (o ya no participan) en las hostilidades se benefician de las mismas garantías.

A semejanza de las situaciones a que se refiere el Protocolo I, deben ser respetados y protegidos el personal sanitario y religioso, las unidades y los medios de transporte sanitarios, así como la misión médica como tal. En el Protocolo II se refrenda también el principio general de la protección debida a la población civil.

Sin embargo, por lo que atañe a los bienes civiles, no fue posible la adopción de un principio general de protección, como el aceptado por los Gobiernos en el Protocolo I. No obstante, está prevista en tres casos específicos la protección de los bienes civiles: los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (en especial, prohibición de utilizar el arma del hambre); las obras de arte y las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas; los bienes culturales y los lugares de culto.

Se prohíben los desplazamientos forzados de población,<sup>44</sup> salvo los requeridos por la seguridad de las personas o por imperiosas razones militares. Esa disposición es importante y debería evitar, en el futuro, el dramático vagabundeo de poblaciones enteras, como durante la Segunda Guerra Mundial.

Por lo que respecta a los socorros, las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja podrán ofrecer sus servicios para llevar a cabo sus tareas tradicionales y, con el consentimiento de la parte contratante concernida, se podrán emprender acciones asistenciales de índole exclusivamente humanitaria e imparcial cuando la población civil padezca, por falta de abastecimientos esenciales para su supervivencia, excesivas privaciones.

Es cierto que el Protocolo II sólo se refiere a situaciones de conflictos armados no internacionales de cierta intensidad y de cierta duración, lo que restringe su ámbito de aplicación. No obstante, en sus disposiciones se reitera la voluntad de la comunidad internacional de limitar los sufrimientos humanos causados por las luchas más crueles, es decir, las guerras internas. Así, se da ya un gran paso para la protección de las víctimas.

En conclusión la aprobación, el 8 de junio de 1977, de dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 era la culminación de diez años de esfuerzos

---

<sup>44</sup> Protocolo II. Título IV, art. 17

para el CICR, iniciador de los trabajos. Los textos aprobados son un real progreso y podrán prestar grandes servicios para la protección de las víctimas de los conflictos armados. La Conferencia Diplomática reunió, durante cuatro años, a delegados plenipotenciarios de casi todos los Estados del mundo. Esa universalidad, junto con el hecho de que se aprobó por consenso la mayoría de los artículos, es la mejor garantía para el respeto futuro de esta “carta de la humanidad”. Por supuesto, quedan esfuerzos por hacer: obtener rápidamente la más amplia posible participación en los Protocolos y difundir su contenido a todos los niveles.

## **7. Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado**

Los bienes culturales han sufrido graves daños como consecuencia de conflictos armados. Estos daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial, por lo tanto conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional. Esta protección está basada en los principios proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Roerich del 15 de abril de 1935 en Washington.<sup>45</sup> y retomada en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.<sup>46</sup>

Para que esta protección sea eficaz se deben identificar estos bienes culturales en tiempo de paz. Se consideran bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:

---

<sup>45</sup> Convenciones de La Haya de 1899, Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de La Haya de 1907, Sección II, Capítulo I, art.27 y Pacto de Roerich del 15 de abril de 1935. Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996

<sup>46</sup> Protocolo I, Título IV, Capítulo III, art. 53

- los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;
- los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado estos bienes culturales.

El emblema de la Convención consiste en un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno de cuyos vértices ocupa la parte inferior del escudo, y un triángulo también azul ultramar en la parte superior; en los flancos se hallan sendos triángulos blancos limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo).

Ilustración # 1



Emblema protector para los bienes culturales

Es de suma importancia la estrecha cooperación entre la UNESCO, depositaria del Convenio de La Haya y de sus dos Protocolos y órgano de vigilancia de esos instrumentos, y el CICR, que vela por la aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra y sus Protocolos adicionales de 1977, con miras a promover y aplicar los instrumentos jurídicos relativos a la protección del patrimonio cultural durante las hostilidades.



## **II. EL CICR Y LA ONU EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**

### **A. El cometido del CICR**

Su cometido le permite, mediante el establecimiento de delegaciones y el envío de delegados, dialogar con los Estados y las partes en un conflicto. El diálogo que mantiene con las autoridades que ejercen un control sobre las víctimas de la guerra no modifica el estatuto de esas autoridades ni puede interpretarse como reconocimiento alguno por su parte.

La índole internacional del CICR se confirma en los acuerdos de sede que ha concertado con más de 50 Estados. En dichos acuerdos, que incumben al derecho internacional, se especifica el estatuto jurídico del CICR en el territorio de los Estados donde realiza su acción humanitaria. Se reconoce la personalidad jurídica internacional de la Institución y se le confieren las inmunidades y los privilegios de los que normalmente se benefician las organizaciones intergubernamentales. En tales acuerdos se prevén, en particular la inmunidad de jurisdicción, por la que se protege al CICR contra procedimientos administrativos y judiciales, así como la inviolabilidad de sus locales, archivos y documentos. Sus delegados se benefician de un estatuto análogo al de los funcionarios de una organización intergubernamental.

### **1. El Derecho de asistencia**

En los instrumentos pertinentes del Derecho Internacional Humanitario se hace varias veces referencia al CICR, que se funda, pues, en textos suscritos por los Estados. El CICR tiene un derecho de iniciativa que le permite ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto, particularmente en materia de asistencia a las víctimas de éste. Su ofrecimiento de servicios, socorros u otras actividades no

constituye, pues, una injerencia en los asuntos internos del Estado, dado que está prevista en el derecho humanitario.

a. Las bases jurídicas de la acción del CICR

Estas bases jurídicas son de dos tipos<sup>47</sup>:

1) Las bases convencionales

- En caso de conflicto armado internacional, que opone a Estados, el CICR fundamenta su acción en los cuatro Convenios de Ginebra y su Protocolo adicional I, en los cuales se tratan ampliamente los problemas humanitarios relacionados con este tipo de conflicto. El conjunto de normas relativas a los prisioneros de guerra, su estatuto y el trato debido a éstos, se basa en la guerra entre Estados (Convenio III). En el Convenio IV se enuncian, especialmente, los derechos y las obligaciones de una Potencia ocupante, es decir, del Estado cuyas fuerzas armadas controlan, parcial o totalmente, el territorio de otro Estado. El Protocolo I tan sólo cubre los conflictos armados internacionales.

En estos tratados se reconoce al CICR, en efecto, el derecho a desplegar ciertas actividades, tales como, socorrer a los militares heridos, a los enfermos y a los náufragos, visitar a los prisioneros de guerra, intervenir en favor de la población civil y velar por que las personas protegidas sean tratadas de conformidad con el derecho.

Según el Protocolo I de 8 de junio de 1977, las guerras de liberación nacional también han de ser consideradas como conflictos de carácter internacional. Una guerra de liberación nacional es un conflicto en el que un pueblo en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación lucha contra una potencia colonial. Hoy en día, la comunidad internacional acepta plenamente el concepto de derecho a la

---

<sup>47</sup> Jean Pictet. Desarrollo y principios del DIH, curso impartido en 1982 en la Universidad de Estrasburgo

autodeterminación. No obstante, las conclusiones que se pueden extraer para las necesidades del derecho humanitario siguen suscitando controversia en especial, en su aplicación a determinadas situaciones de conflicto.

Los conflictos entre Estados son, hoy en día, más bien una excepción que la regla. La mayoría de los conflictos armados se desarrollan en el territorio de un único Estado: se trata de conflictos de carácter no internacional. Uno de los denominadores comunes de numerosos conflictos internos es la intervención de las fuerzas armadas de otro Estado, que acuden en apoyo del Gobierno o de los insurgentes.

- En caso de conflicto armado no internacional (interno), cuando se enfrentan en el territorio de un Estado, las fuerzas armadas regulares a grupos armados identificables o grupos armados entre ellos, el CICR fundamenta su acción en el artículo 3 común a los cuatro Convenios y en el Protocolo II.

Estas normas esenciales del derecho humanitario aplicables a los conflictos armados no internacionales son mucho más sencillas que las que rigen los conflictos internacionales. Tienen como fuente principal el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. En el mencionado artículo se insta a las Partes implicadas en un conflicto interno a respetar algunos principios fundamentales del comportamiento humanitario antes comentado.

Es interesante destacar en este punto que el artículo 3 común a los Convenios es de obligado cumplimiento tanto para los Gobiernos como para los insurgentes, mas sin conferir a estos últimos un estatuto especial. El Protocolo adicional II de 1977 completa el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra por cuanto contiene algunas disposiciones más específicas. Contribuye, por tanto, a reforzar la protección humanitaria en situaciones de conflicto armado interno. El Protocolo II tiene, no obstante, un ámbito de aplicación más restringido que el artículo 3

común, ya que es aplicable tan sólo si los insurgentes controlan una parte del territorio nacional.

Por esta base jurídica se reconoce al CICR el derecho de formular propuestas ofreciendo, por ejemplo, sus servicios a las partes en conflicto para:

- Empezar una acción de socorro;
- Visitar a las personas detenidas en relación con el conflicto armado.

## 2) Las bases estatutarias

En otras situaciones de violencia que no alcanzan la intensidad de un conflicto armado, particularmente, en caso de disturbios, cuando el Estado recurre a la fuerza armada para restablecer y mantener el orden, el CICR fundamenta su acción en los Estatutos del Movimiento, en los que se le reconoce un derecho de iniciativa humanitaria.

De hecho, puede ofrecer sus servicios en toda situación que se requiera la presencia de un intermediario específicamente neutral e independiente. El conjunto de estos derechos constituye el cometido permanente asignado al CICR por la comunidad internacional. Estos derechos son la confirmación de las iniciativas tomadas por el CICR a lo largo de toda su historia, a fin de acudir en auxilio de las víctimas de las situaciones de guerra o de disturbios, así como de la aceptación de esas iniciativas por la comunidad internacional.

### b. Las víctimas

Las actividades del CICR tienen una doble finalidad: prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos. Aunque estas dos nociones pueden disociarse desde un punto de vista analítico, no están disociadas en la práctica. De hecho en numerosos casos el gesto humanitario comporta, a la vez, la protección y

la asistencia. El objetivo de la protección es esencialmente el respeto de los derechos de las víctimas, mientras que el de la asistencia es más precisamente la ayuda material que se les presta. Así las acciones de socorro se fundamentan en las acciones jurídicas; inversamente en muchas situaciones, dichas acciones de socorro son un medio para hacer valer los derechos de las víctimas y proteger su vida y su salud.

En el marco de su cometido, el CICR puede verse inducido a prestar protección y asistencia a:

- los militares heridos, los enfermos y los náufragos;
- los prisioneros de guerra; los internados civiles; los detenidos “de seguridad” o “políticos” incluso, en ciertos casos, de derecho común.

En todas las situaciones de conflicto armado o de disturbio, hay personas arrestadas o capturadas y después detenidas. A merced de un poder que les es hostil, estas personas tienen, sin embargo, derecho al respeto de su vida y de su dignidad. Cada día, estos hombres y mujeres corren riesgos: humillaciones, golpes, tortura, aislamiento, incertidumbre con respecto al futuro, pérdida de contacto con sus familiares, condiciones de vida inhumanas, tratos degradantes, ejecuciones sumarias o desapariciones. Los delegados del CICR visitan a esas personas en el lugar donde están detenidas y se entrevistan, sin testigos, con ellas. Esas visitas repetidas tienen dos objetivos, proteger (evitar las desapariciones, luchar contra la tortura y los malos tratos) y mejorar las condiciones de detención (gestiones ante las autoridades, eventualmente asistencia material). Para garantizar condiciones de vida aceptables a las personas detenidas, el CICR mantiene con las autoridades detenedoras un diálogo constructivo que complementa con informes confidenciales.

En caso de conflicto armado internacional, en los Convenios de Ginebra se reconoce a los delegados del CICR el derecho a visitar a los prisioneros de guerra

y a los internados civiles. Impedirle que cumpla su misión equivale a transgredir el derecho humanitario.

En caso de conflicto no internacional, en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra se autoriza al CICR a ofrecer sus servicios para visitar a los detenidos. En situaciones de disturbios interiores, puede proponer visitar a los detenidos fundándose en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como en la práctica a ese respecto reconocida por numerosos Estados.

Previamente y sea cual fuere la base jurídica que prevalezca, el CICR presenta a las autoridades condiciones de visita idénticas, es decir:

- ver a todas las personas detenidas que se inscriben en el marco de su cometido y tener acceso a todos los lugares de detención donde se encuentren;
- entrevistarse, sin testigos, con los detenidos de su elección;
- hacer durante la visita, la lista de los detenidos de su incumbencia o recibir de las autoridades una lista que podrá verificar y, llegado el caso, completar;
- repetir sus visitas a los detenidos de su elección y según una periodicidad que determina en función de las necesidades.

El CICR procura también restablecer los contactos entre la persona detenida y sus familiares.

- las personas civiles en el territorio de las partes en conflicto o en los territorios ocupados;

Por lo que atañe a las actividades de protección debida a la población civil, el CICR aplica una doble estrategia. En primer lugar, recoge información sobre el terreno e informa a las autoridades militares y a la población civil, o a los líderes de la oposición, acerca de los actos ilegales cometidos contra la población local; de este modo, el CICR procura lograr que cesen estas prácticas y se tomen medidas correctivas adecuadas. Los delegados del CICR actúan directamente sobre el terreno (en el marco de las operaciones de socorro) y redactan informes

confidenciales en un período determinado; formulan recomendaciones sobre temas que van desde la manera de conducir las hostilidades por parte de las unidades militares a fin de atenuar los efectos para la población civil hasta la prevención de ejecuciones sumarias de personas sospechosas de colaboración, llevadas a cabo por las fuerzas rebeldes. En dichos informes se ponen de relieve las normas de comportamiento que deben ser respetadas para que siga habiendo un mínimo de humanidad en medio de la violencia. Entre esas normas está el respeto de los derechos fundamentales como son: derecho a la vida, seguridad y dignidad de la persona humana, abolición de la tortura y de los malos tratos, prohibición de actos de terrorismo y de violencia ciega, respeto de la misión médica y de los heridos, protección especial en favor de los niños y limitación de los medios empleados para mantener el orden.

En segundo lugar, en una situación de urgencia y cuando se hayan agotado todas las otras posibilidades, el CICR puede tomar la iniciativa de evacuar a las personas más vulnerables de una zona peligrosa, de reunir a los miembros de las familias dispersas, de organizar intercambios de mensajes familiares y de proporcionar material médico, medicamentos y víveres a las comunidades afectadas por el hambre. El CICR también mantiene con regularidad una presencia en las zonas donde personas o comunidades enteras corren el riesgo de ser atacadas. Sus delegados siguen en estrecho contacto con todos los demás actores potenciales de actos de violencia: personal del ejército, unidades de combate rebeldes, fuerzas de seguridad o de la policía.

- las personas desplazadas y los refugiados.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ver Capítulo II, El Cometido del CICR, 4. Refugiados y Desplazados

## 2. Elaboración y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario

Como promotor del Convenio de Ginebra de 1864, primer tratado constitutivo del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo, el CICR contribuye al desarrollo de esta rama del derecho internacional público. Con tal finalidad, su cometido es seguir la evolución de los conflictos, organizar consultas, con miras a cerciorarse de las posibilidades de llegar a un acuerdo por lo que atañe a nuevas normas, elaborar proyectos y preparar los trabajos de las Conferencias Diplomáticas habilitadas para aprobar nuevos textos. En cada etapa de la codificación del derecho humanitario, el CICR, traza proyectos en los que se fundamentan los textos aceptados por los Estados. Así se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y posteriormente, en 1977 sus dos Protocolos adicionales.

Guardián del Derecho Internacional Humanitario<sup>49</sup>, el CICR desempeña la tarea asignada por la comunidad internacional de velar para que las partes en conflicto apliquen ese derecho. Es lo que hace por mediación de sus delegados sobre el terreno. En caso de violación de esas normas, el CICR recuerda a los beligerantes sus obligaciones convencionales.

Como guardián del Derecho Internacional Humanitario, insta también a los Estados, en tiempo de paz, a que tomen medidas prácticas para que las normas del Derecho Internacional Humanitario sean aplicadas en tiempo de guerra, por ejemplo:

- Traducción de los textos de los Convenios
- Aprobación de disposiciones para sancionar a los criminales de guerra
- Legislación para proteger el emblema.

---

<sup>49</sup> Paul Berman, "Servicio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional humanitario: el reto de la aplicación nacional". Revista Internacional de la Cruz Roja No 135, mayo-junio de 1996, pp. 365-374



El CICR recuerda asimismo a los Estados su obligación de dar a conocer el Derecho Internacional Humanitario y apoya sus gestiones en ese sentido. Por último, el CICR hace también lo posible por dar a conocer ese derecho, particularmente a las fuerzas armadas. Con tal finalidad, organiza numerosos seminarios sobre el tema. La aplicación del Derecho Internacional Humanitario será desarrollada más adelante en el Capítulo IV.

### 3. El emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja<sup>50</sup>

Ilustración # 2



En los Convenios de Ginebra de 1949 se mencionan tres emblemas: la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos. Pero únicamente los dos primeros son actualmente utilizados por el Movimiento como emblemas de las Sociedades Nacionales. Varios artículos de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales versan sobre el emblema. Se determina, entre otras cosas, el uso, el tamaño, la finalidad, los soportes del emblema, las personas y bienes protegidos, sus usuarios, su respeto y la represión del abuso por lo que atañe al signo.

---

50 François Bugnion, "El emblema de la cruz roja y el de la media luna roja" Revista Internacional de la Cruz Roja No 95, septiembre-octubre de 1989, pp. 430-441.

a. Origen del emblema

- 1859 Henry Dunant es testigo de la batalla de Solferino: miles de heridos carecen de asistencia, los cadáveres yacen a la merced de los pillajes y de los animales salvajes. Los servicios sanitarios de las fuerzas armadas son inoperantes, sobre todo por no ostentar un emblema uniforme, neutral y protector, es decir, reconocible por todas las partes en conflicto.
- 1863 Una Conferencia Internacional, celebrada en Ginebra para estudiar la manera de suplir las insuficiencias de los servicios sanitarios de los ejércitos en campaña, aprueba la cruz roja sobre fondo blanco como signo distintivo de las Sociedades de Socorro a los militares heridos (las futuras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja)
- 1864 Se aprueba el Primer Convenio de Ginebra; se reconoce la cruz roja sobre fondo blanco como signo distintivo de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas.
- 1876 Durante la Guerra de Oriente, que asola los Balcanes, el Imperio Otomano decide utilizar la media luna roja sobre fondo blanco en vez de la cruz roja. Egipto adoptará después el mismo emblema; el Imperio Persa escogerá el león y sol rojos sobre fondo blanco. Esos Estados harán reservas a los Convenios y, por último, esos signos de excepción serán reconocidos en los Convenios de 1929.
- 1949 El artículo 38 del Convenio I de Ginebra de 1949 confirma los emblemas de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco como signos protectores de los servicios sanitarios de los ejércitos. Excluye, pues, la utilización de otros signos de excepción que no sean la media luna roja y el león y sol rojos.

- 1980 La República Islámica de Irán renuncia a utilizar el león y sol rojos para adoptar la media luna roja.
- 1982 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprueba como emblema la cruz roja y la media luna roja sobre fondo blanco.

b. Un emblema, dos símbolos, dos usos

1) Símbolo de protección, uso protector

Esta es su significación esencial: en tiempo de conflicto, el emblema es la manifestación visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra. Señala a los combatientes, que el personal (voluntarios de las Sociedades Nacionales, servicio sanitario, delegados del CICR, etc.), las unidades (hospitales, puestos de socorro, etc.) o los medios de transporte sanitarios (por vía terrestre, acuática o aérea) están protegidos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.

El emblema usado a título protector debe provocar en los combatientes, un reflejo de abstención, de respeto. Por ello, debe ser de grandes dimensiones.

2) Símbolo de pertenencia al movimiento, uso indicativo

El emblema sirve, en este caso, para indicar, principalmente en tiempo de paz, que una persona o un objeto tiene un vínculo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sea concretamente con una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, sea con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sea con el Comité

Internacional de la Cruz Roja. El emblema usado a título indicativo recuerda también que esas instituciones trabajan de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento; así pues, es también un símbolo de: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad. Sus dimensiones deben ser entonces más pequeñas.

### 3) Uso indicativo y uso protector del emblema en tiempo de paz

#### Ilustración # 3



Uso protector



Uso indicativo

#### - Uso indicativo en tiempo de paz

Las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja están autorizadas a utilizar el emblema de conformidad con las legislaciones nacionales que determinan las reglas para el uso indicativo del emblema, así como con el reglamento de 1991 sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales aprobado por el Movimiento. Al utilizar el emblema, las Sociedades Nacionales se

comprometen a realizar únicamente actividades conformes con los Principios Fundamentales, es decir, a prestar asistencia benévola e imparcial a personas que sufren.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, también pueden utilizar el emblema para sus celebraciones o sus campañas de colectas de fondos, según las condiciones que se definen en el artículo 23, párrafos 1 y 2 del Reglamento sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales. Pueden asociarse a estos actos o campañas, otras entidades (empresas comerciales, otras organizaciones), pero con condiciones bastantes restrictivas (Art. 23, Párr.3, Art. 24 y 25 del Reglamento sobre el uso del emblema)

Las ambulancias y puestos de socorro administrados por terceros también pueden ostentar el emblema a título indicativo en tiempo de paz únicamente, a condición de que esto uso se avenga con la legislación nacional, si la Sociedad Nacional lo ha autorizado expresamente y si esos puestos de socorro están exclusivamente reservados a la asistencia gratuita.

- Uso protector en tiempo de paz

Las unidades sanitarias (hospitales, puestos de primeros auxilios, etc.) y los medios de transporte de Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, (por vía terrestre, acuática o aérea), cuyo empleo sanitario en caso de conflicto armado ya está determinado, pueden ser señalados con el emblema protector, y ello ya en tiempo de paz, si las autoridades dan su asenso.

- 4) Uso indicativo y uso protector del emblema en tiempo de conflicto

- Uso indicativo en tiempo de conflicto.

Únicamente Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja están autorizadas a su uso, pero, a fin de evitar toda confusión con el emblema utilizado a título protector, este emblema no podrá colocarse ni en un brazal, ni en un tejado.

- Uso protector en tiempo de conflicto

Están autorizados:

- El servicio sanitario de las Fuerzas Armadas

Ilustración # 4



Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas

- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno a auxiliar a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas.
- Los hospitales civiles reconocidos como tales por el Estado están autorizados a ostentar el emblema con fines de protección.
- Todas las unidades sanitarias civiles (hospitales, puestos de primeros auxilios, etc.) reconocidas y autorizadas por las autoridades competentes (solamente por los Estados Partes en el Protocolo I.

- Otras Sociedades de Socorro Voluntarias, con las mismas condiciones que las Sociedades Nacionales (reconocimiento y autorización del Gobierno, únicamente el personal y el material destinados exclusivamente a los servicios sanitarios, sumisión a las leyes y reglamentos militares)

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna pueden utilizar el emblema en todas las circunstancias, tanto de paz como de guerra, y sin restricciones.

c. Los usos abusivos del emblema

Todo Estado Parte en los Convenios de Ginebra tienen la obligación de tomar medidas para impedir y reprimir en todo tiempo los usos abusivos del emblema. Han de promulgar, en particular, una ley sobre la protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.<sup>51</sup> Se considera uso abusivo del emblema todo uso que no esté expresamente autorizado por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Por ejemplo:

1) Las imitaciones

Se trata de la utilización y de cualquier signo que pueda confundirse con el emblema de la cruz roja o de la media luna roja, como son, por ejemplo, las imitaciones del color y de la forma.

Ilustración # 5



Ejemplos de imitación:

---

<sup>51</sup> Anexo N°4 Ley 418

## 2) Las usurpaciones

- La utilización del emblema de la cruz roja o de la media luna roja por entidades o personas que no tienen derecho a hacerlo (empresas comerciales, organizaciones no gubernamentales, particulares, médicos privados, farmacéuticos, etc.); no está autorizada la utilización del emblema con fines comerciales.

Ilustración # 6



Ejemplo de usurpación

- Por personas que tienen normalmente derecho a usarlo, pero que no lo utilizan de conformidad con las normas de los Convenios, de los Protocolos y de los Principios Fundamentales del Movimiento (una persona autorizada a llevar el emblema, pero que lo utilice para pasar, por ejemplo, más fácilmente las fronteras durante su tiempo libre, etc.)

Para fortalecer la identidad de La Cruz Roja, se debe evitar el uso del Emblema asociado con logotipo de entidades ajenas a la Cruz Roja.

## 3) Los abusos graves (la perfidia)

Se trata de la utilización, en tiempo de conflicto, del emblema de la cruz roja o de la media luna roja para proteger a combatientes armados o material de guerra (usar, por ejemplo, una ambulancia o un helicóptero que lleven el emblema para transportar a combatientes armados; ocultar un depósito de municiones con una bandera de la cruz roja, etc.) El uso perverso del emblema es una "infracción grave" del Derecho Internacional Humanitario y son considerados como crímenes de guerra.



El abuso por lo que atañe al emblema como signo protector en tiempo de guerra pone en peligro el sistema de protección instaurado en el Derecho Internacional Humanitario.

Ilustración # 7



Ejemplo de abuso grave

El abuso por lo que atañe al emblema como signo distintivo empaña su imagen en la mente del público y reduce, por ende, su capacidad de protección en tiempo de guerra.

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se han comprometido a adoptar las disposiciones penales que permitan impedir y reprimir el abuso por lo que atañe al emblema, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

#### **4. Refugiados y Desplazados**

##### **a. Distinción entre refugiados y desplazados internos**

Cabe distinguir dos categorías de personas forzadas a huir de su hogar:

- los refugiados, que han salido de su patria para encontrar asilo en el extranjero.
- las personas desplazadas que permanecen en el interior de su país.

El término “refugiado” se aplicará a toda persona que “(...) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y que no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.<sup>52</sup>

En la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y en la Declaración de Cartagena se amplía la definición para incluir a las personas que huyen a causa de los acontecimientos que perturban gravemente el orden público, como son los conflictos armados o los disturbios.

#### b. Protección jurídica de los refugiados

Aunque los refugiados y los desplazados son personas desarraigadas, por lo general, a causa de la violencia desatada por la guerra y comparten la misma suerte, los instrumentos jurídicos que los amparan son diferentes.

Los refugiados están protegidos por los instrumentos pertinentes del Derecho de los refugiados

El Derecho de los refugiados se basa, particularmente, en los textos siguientes: la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados ; el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los refugiados ; la Convención de la

---

<sup>52</sup> Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, art N°1

Organización de la Unidad Africana (OUA) de 1969 por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África ; la Declaración de Cartagena de 1984 sobre los refugiados; y las Resoluciones aprobadas en particular, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario cuando son víctimas de un conflicto armado, cuando se encuentran en poder de la parte adversaria o se vean afectados por las hostilidades en el país de acogida. En el Convenio IV de Ginebra y en el Protocolo I se confiere una protección especial a los refugiados, en particular a los que se hallen en territorios ocupados. En el Convenio IV se estipula, asimismo, el principio de no rechazo, base del derecho de los refugiados.

c. Protección y asistencia a los refugiados

Incumbe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) prestar protección y asistencia a los refugiados, de los que el CICR se ocupa de manera subsidiaria, en particular cuando están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario o cuando se requiere la presencia del CICR como intermediario específicamente neutral e independiente (por ejemplo, en caso de ataques contra campamentos de refugiados)

d. Protección jurídica de los desplazados

En un conflicto armado, las personas desplazadas en el interior de su propio país están protegidas en virtud de las normas del Derecho Internacional Humanitario, puesto que forman parte de la población civil. Por consiguiente, deberán ser tratadas con humanidad y se prohíbe todo acto de violencia contra ellas. La finalidad de dichas normas es, en particular, proteger a las personas civiles contra los efectos de las hostilidades; por ejemplo, está prohibido atacarlas, aterrorizarlas,

utilizar contra ellas el hambre como método de combate, así como destruir los bienes indispensables para su supervivencia.

En un conflicto interno, las personas desplazadas están protegidas en virtud del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y del Protocolo II. En el derecho humanitario se prohíben los desplazamientos forzados de la población; son posibles, únicamente si son indispensables para garantizar la seguridad de la población, o por imperiosas razones militares. Además, la protección general que en el Derecho Internacional Humanitario se garantiza a la población civil debería poder limitar los desplazamientos. Desgraciadamente, esas normas han sido frecuentemente conculcadas en los conflictos recientes. Por ello, es más importante garantizar un mejor respeto de las disposiciones vigentes que elaborar nuevas disposiciones.

e. Protección y asistencia a los desplazados

Las personas desplazadas en el territorio del propio país son de la incumbencia del CICR como víctimas de los conflictos armados o de disturbios. Como personas civiles, esos desplazados se benefician, pues, de sus actividades de protección y de asistencia (protección de personas civiles, visitas a detenidos, asistencia médica o alimentaria, restablecimiento de las relaciones familiares entre las personas separadas a causa de la guerra, etc.)

Actualmente, el CICR presta protección y asistencia a más de cinco millones de desplazados internos en casi 50 contextos: Angola, República Democrática del Congo, Sri Lanka y Colombia, por nombrar sólo algunos. En Afganistán, durante las recientes hostilidades, los 1.000 empleados contratados localmente por el CICR siguieron realizando las actividades fundamentales de asistencia médica y de urgencia en favor de las personas civiles, muchas de las cuales eran personas desplazadas en el interior del país. Además de su acción operacional en favor de

los refugiados y de las personas desplazadas, el CICR procura velar por el respeto del Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto, interviene a título preventivo para evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos forzados.

## **B. La Organización de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario<sup>53</sup>**

El Derecho Internacional Humanitario es aplicable cuando los miembros de unidades militares que intervienen bajo el mando de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o con su autorización, emplean la fuerza “o pueden emplearla” contra fuerzas armadas organizadas.

### **1. Operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas por la ONU o bajo sus auspicios**

En el acuerdo sobre las operaciones de mantenimiento de la paz que las Naciones Unidas conciertan con cada Estado miembro que tiene que proporcionar contingentes se estipula que se han de observar los "principios y el espíritu" de los Convenios internacionales aplicables a la conducta del personal militar y al Derecho Internacional Humanitario.<sup>54</sup>

Los Estados que proporcionan tropas para dichas operaciones han de cerciorarse de que los militares que pertenecen a sus contingentes conocen esos Convenios. La legislación nacional y las instrucciones de aplicación de esos tratados también son aplicables.

La finalidad de las operaciones de mantenimiento de la paz, que dimanar del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, es hacer respetar el alto al fuego y

---

<sup>53</sup> El Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. Revista de la ONU N°13

<sup>54</sup> Ver Capítulo I, A. Definición “Principios y Normas fundamentales del DIH”

las líneas de demarcación, o concertar acuerdos de retirada de las tropas. Estos últimos años, se han añadido otras tareas, como son supervisión de elecciones, envío de socorros humanitarios y asistencia en el proceso de reconciliación nacional. El uso de la fuerza sólo está autorizado en caso de legítima defensa. Dichas operaciones se llevan a cabo con el consentimiento de las partes contendientes.

## **2. Operaciones de restablecimiento de la paz desplegadas por la ONU o bajo sus auspicios**

Las operaciones de restablecimiento de la paz, que dimanarían del capítulo VII de la Carta, corren a cargo de fuerzas de la ONU o de Estados, grupos de Estados u organizaciones nacionales, sobre la base de la invitación del Estado concernido, o de la autorización del Consejo de Seguridad. Se asigna una misión de combate a esas fuerzas, que pueden recurrir a medidas coercitivas para desempeñar su cometido. No necesariamente se requiere el consentimiento de las partes. Estos últimos años, ha llegado a ser muy variable la distinción entre los dos tipos de operaciones.

## **3. El CICR, la ONU y el Derecho Internacional Humanitario<sup>55</sup>**

De conformidad con su cometido de "trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo del mismo", el CICR ha analizado la cuestión de la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario, a las fuerzas de mantenimiento o de restablecimiento de la paz. Resultaba indispensable aclarar ciertos aspectos de esta cuestión, dado que dichas tropas intervienen cada vez con mayor frecuencia en contextos de extrema violencia en los que podrían verse obligadas a recurrir a la fuerza armada.

---

<sup>55</sup> Internet <http://www.icrc.org.spa/dih>

Con tal finalidad, el CICR ha organizado reuniones de expertos en derecho internacional para determinar la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario a las fuerzas de la ONU, que se hallan bajo el mando y el control de la ONU, y que, en situaciones de conflicto armado, actúan activamente como fuerzas combatientes. Por su parte, la ONU mantiene que sólo los “principios y el espíritu” del Derecho Internacional Humanitario son aplicables a dichas fuerzas.

En cuanto a los expertos, han trazado un proyecto de líneas de conducta en las que se define el contenido de esos “principios” y del “espíritu” que la ONU se ha comprometido a respetar en el marco de las operaciones de mantenimiento o de restablecimiento de la paz, cuando el uso de la fuerza está autorizado por razones de legítima defensa, o para desempeñar un cometido específico del Consejo de Seguridad.

Dado que la ONU, como tal, no es Parte en los Convenios, el CICR estima que cada Estado sigue siendo individualmente responsable de la aplicación de esos Convenios cuando proporciona un contingente a las Naciones Unidas y que, en consecuencia, deberá hacer lo necesario, en forma especialmente de instrucciones, antes de que dichas tropas partan en misión. Se recuerda asimismo que, en virtud del artículo primero común a los cuatro Convenios, por el que las Altas Partes Contratantes se comprometen igualmente a “hacer respetar” los Convenios

Cabe destacar que los cascos azules están obligados, en virtud de su legislación nacional, a respetar los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario por los que está obligado el respectivo país de origen. En consecuencia, si violan el derecho, podrán ser enjuiciados por sus tribunales nacionales.

#### **4. Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU**

##### **a. Posición del CICR**

La posición del CICR sobre la aplicabilidad del DIH a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz (FMP) de la ONU y su respeto por estas fuerzas, destaca:

- Que los Principios Fundamentales y las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario son aplicables y deben ser respetadas.
- Que, para conseguirlo, los Estados que ponen contingentes a disposición tienen la obligación de darles las instrucciones adecuadas, por una parte, y que las Naciones Unidas tienen la misma obligación por lo que respecta al mando unificado, por otra.
- Que las eventuales infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario han de ser reprimidas por las autoridades nacionales del contingente que las cometa y
- Que, debido a una cierta complementariedad entre los objetivos finales de sus respectivos cometidos, las FMP deberían cooperar con el CICR, pero no deberían, en ningún caso, obstaculizar sus actividades ni poner en tela de juicio su competencia.

##### **b. Posición de la ONU**

A nivel jurídico, la reflexión interna de las Naciones Unidas sobre la adhesión de la organización a los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario llegó a la conclusión de que, en primer lugar, ciertas disposiciones de los Convenios no



podían aplicarse a la ONU o ser aplicadas por ésta, por ejemplo, las relativas a la ocupación (artículos 27-28 del Convenio IV), a la represión de las infracciones graves (artículos 49/50/129/146, comunes a los cuatro Convenios, artículo 85 (1), Protocolo I), etc.)

En segundo lugar, a falta de definición e incluso de mención de las “fuerzas para el mantenimiento de la paz” en los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario, éstas podrían ser confundidas con “combatientes”.

Convendría asimismo determinar si la ONU puede o no ser considerada como “Potencia” para adherirse a los Convenios. Por último, se plantearía un problema en caso de que una misma fuerza comprendiera tropas de Estados Partes en el Protocolo I y de Estados no Partes. A nivel político, una solicitud de adhesión de la ONU a los tratados del Derecho Internacional Humanitario, e incluso una tentativa de obtener una declaración general de aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario a las FMP (por ejemplo, en forma de resolución de la Asamblea General) correría el peligro de iniciar un delicado debate sobre los Protocolos; por otro lado, solicitar la adhesión sólo a los Convenios sería perjudicial para la promoción del Derecho Internacional Humanitario en su conjunto.

Por último, cabe destacar que, incluso si los soldados que componen las fuerzas de las Naciones Unidas están obligados por los compromisos contraídos por su Estado de origen, la ONU siempre ha insistido en que, durante el cumplimiento de su cometido, esas tropas sólo dependen de la propia Organización y no de sus Estados de origen.

En resumen, la posición de la ONU sobre la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario a las FMP no es enteramente satisfactoria. Es verdad que ha habido declaraciones al respecto en el pasado, pero éstas eran, por una parte, ocasionales y sólo contenían un compromiso de respetar los principios y el

espíritu de las normas del Derecho Internacional Humanitario, por otra. La ONU podría, pues, estudiar los medios más apropiados para verificar también la aplicabilidad a sus fuerzas de las normas pertinentes del Derecho Internacional Humanitario, que deberían comprender, entre otras, las relativas a los métodos y medios de guerra, a las distintas categorías de personas protegidas, al respeto de los signos distintivos (en particular, la cruz roja y la media luna roja), al personal y al transporte sanitarios.

Respecto de estas posiciones, podemos decir que:

- El Derecho Internacional Humanitario es efectivamente aplicable a las FMP;
- La ONU ha reconocido, en ocasiones anteriores, la aplicabilidad, al menos, de los principios y del espíritu de las normas de ese derecho
- Un compromiso de la ONU con miras a reforzar la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario a sus fuerzas representaría una excelente contribución para la promoción de la aplicabilidad y del respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados que proporcionan contingentes, del Estado en cuyo territorio tiene lugar la operación y de todas las partes en conflicto.
- No obstante, queda todavía mucho por hacer para reforzar la aplicación y el respeto del Derecho Internacional Humanitario por las FMP, en particular a nivel formal, pero también a nivel operacional, con miras a las operaciones en curso y a las venideras. El CICR está estudiando actualmente los medios más adecuados para ello y cuenta con la ayuda en la materia de los Estados y de las Naciones Unidas.

Haciendo alusión a este último punto, el secretario de esta organización en varias ocasiones a declarado estar dispuesto a ayudar contribuyendo a la difusión del Derecho Internacional Humanitario en las FMP, en la medida de sus posibilidades, proporcionando en particular un plan-tipo de formación en Derecho Internacional Humanitario, que podría adaptarse a las necesidades específicas de cada FMP.

El CICR por su parte, puede emprender diversas acciones de difusión en colaboración con los Estados concernidos y la ONU. Una acción importante sería que la delegación zonal del CICR se encargara de difundir el Derecho Internacional Humanitario en los contingentes antes de que éstos partan en misión. Sería igualmente útil prever que la delegación del CICR en Nueva York se ocupara de informar a los jefes de los contingentes a su paso por la sede de la ONU.

Así mismo, sería sumamente importante garantizar una difusión en el país de destino, tarea que llevarían a cabo los delegados activos en ese país o especialistas del CICR de la difusión en las fuerzas armadas.

### **III. APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO<sup>56</sup>**

El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto universal de normas, cuyos principales instrumentos han sido aprobados por casi todos los Estados del mundo. La aplicación del Derecho Internacional Humanitario, abarca todas las medidas que se han de tomar para garantizar el pleno respeto de esas normas. Así pues, no sólo es preciso aplicar dichas normas una vez iniciado el combate, sino que hay que adoptar algunas medidas, en tiempo de paz y en tiempo de guerra, para garantizar que:

- Todas las personas, tanto civiles como militares, conozcan las normas del Derecho Internacional Humanitario,
- Existan las necesarias estructuras, las disposiciones administrativas y el personal para poder aplicar el Derecho Internacional Humanitario,
- Se prevengan las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y cuando proceda, se sancionen.

Dichas medidas son esenciales para garantizar la eficaz aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

#### **A. Procedimientos de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario**

En el ámbito del Derecho Internacional Humanitario se pueden distinguir cuatro categorías de mecanismos de aplicación:

##### **1. Medidas de Aplicación Nacional**

Se trata de medidas nacionales que todos los Estados Partes están obligados a adoptar luego de ratificar un tratado internacional; Ejemplo de ello son las medidas legislativas.

---

<sup>56</sup> La aplicación Nacional del Derecho Internacional Humanitario y de las Convenciones Interamericanas Relacionadas, memoria de la conferencia de expertos gubernamentales, San José, Costa Rica, del 6 al 8 de marzo de 2001, Publicación CICR/OEA 2002.

## **2. Medidas Preventivas**

Comprenden la adopción de mecanismos que establecen las condiciones adecuadas para prevenir las violaciones de las normas humanitarias.

La difusión de las normas humanitarias, es la principal medida preventiva que debe estar dirigida a todos los órganos destinatarios y a todos los beneficiarios. La obligación de difusión, tanto en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, implica la promoción del estudio de los tratados de Ginebra en los programas de instrucción militar y el fomento del conocimiento del contenido de estos tratados en la población civil.

## **3. Medidas de Supervisión y Control**

Estos mecanismos tienen la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas humanitarias. Entre estos mecanismos se encuentran: las potencias protectoras, la investigación de hechos que constituirían infracciones graves a las Convenciones de Ginebra, que está a cargo de la Comisión Internacional de Encuesta.

### **a. Potencias Protectoras**

En el ámbito del derecho consuetudinario, se conoce desde mucho tiempo atrás la institución de la potencia protectora, país neutral en el conflicto, al que una de las partes le confiere el encargo de velar por sus intereses en el territorio de la otra. La institución de potencia protectora, se encuentra regulada en el artículo 54 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 (mandato de Viena.) Además, las potencias protectoras están encargadas de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de los Convenios de Ginebra I, II, III y 9 del Convenio IV (mandato de Ginebra) La designación de la potencia protectora está condicionada a la aceptación del Estado en cuyo territorio va a cumplir su misión.

La existencia de una potencia protectora no impide el desarrollo de las actividades humanitarias del CICR, dado que sus miembros tienen derechos a ingresar a todos los lugares donde se encuentren personas protegidas por el sistema de los Convenios de Ginebra.

b. Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas<sup>57</sup>

Con el fin de mejorar los mecanismos de control del Derecho Internacional Humanitario en caso de conflicto armado surge dentro de este esquema la Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas (CIHE). Formada en 1991 a partir de que 20 Estados aceptaron su competencia, tomando como base el artículo 90 del Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, la Comisión entra en funciones como un órgano permanente, con dos funciones básicas; en primer lugar investigar y establecer las violaciones graves -no infracciones menores- a los Convenios de Ginebra y el Protocolo I adicional de 1977, y en segundo lugar promover el respeto hacia los mismos a través de sus servicios de facilitador e intermediador. Está integrada por quince personas de reconocida reputación e imparcialidad, elegidas por los Estados. Aunque se busca una representación geográfica equitativa, todos los integrantes actúan a título personal y no en nombre de país alguno. Para llegar a la creación de este organismo se tuvo que pasar por una serie de controversias, enmiendas y contrapropuestas, siendo las más graves objeciones aquellas fundamentadas en la soberanía de los Estados y la no injerencia de los asuntos internos. En respuesta a dichas reservas, la Comisión puede llevar a cabo una investigación, sólo si se tiene el consentimiento de las partes interesadas. La firma o ratificación del Protocolo I por los Estados no implica que éstos reconozcan la competencia de la Comisión. Para que haya reconocimiento, cada Estado debe asentir por separado, también se puede dar el caso de que algún Estado requiera de los servicios de la CIHE en forma ad hoc, para algún litigio determinado, en cuyo caso también es permitido.

---

57 Anexo N°5 Artículo 90 del Protocolo Adicional I

El procedimiento de investigación no puede ser impuesto a ningún país, a no ser que el país que lo solicite haya -con anterioridad- reconocido por su parte la autoridad de la Comisión.

Solamente los Estados o las partes en un conflicto pueden solicitar la intervención de la CIHE con el fin de que inicie una investigación. Cuando entra en funciones, la Comisión designa siete miembros, cinco de ellos integrantes de este organismo, y otros dos ad hoc. Ningún elemento puede ser nacional de las partes en litigio.

Los gastos administrativos de la Comisión se sufragan con las contribuciones de los Estados que han ratificado su competencia y mediante aportes voluntarios. Los costos de la investigación son sufragados por las partes en conflicto. Los criterios aplicados a la financiación de los litigios son bastante flexibles, y es posible llegar a acuerdos y negociaciones con respecto a este forzoso tema.

Hasta el momento son 65 Estados los que han aceptado la competencia de la Comisión.<sup>58</sup> Hoy en día -buscando la representatividad- se encuentra integrada por 9 miembros europeos, 2 de América del Sur, 1 de África y 1 de Asia-Oceanía. Hay dos vacantes por llenar, por causa de una renuncia y un deceso.

Desde el punto de vista de la comunidad internacional, la CIHE es un importante apoyo puesto a disposición de los Estados para que sirva como un medio de arreglar divergencias y alegatos relacionados a violaciones del Derecho Internacional Humanitario, y para lograr el cumplimiento de los objetivos hacia el respeto del mismo. El evidente desarrollo de su marco de influencia a través de los años indica el poder operacional que en el futuro tendrá, como un brazo cada vez más fuerte del Derecho Internacional Humanitario.

---

<sup>58</sup> Anexo N°2, Cuadro de los Estados partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales de 1977 y comentarios (Junio 2003)

1) Las Funciones de la CIHE previstas explícitamente en el artículo 90 del Protocolo I

Según el artículo 90 del Protocolo I, la metodología básica de la investigación consiste en invitar a cada una de las partes a comparecer ante la Sala y presentar pruebas, o impugnar las que presente la parte adversaria, como en un juicio. Además la Sala es competente para llevar a cabo sus propias indagaciones. Posteriormente las pruebas se dan a conocer a las partes interesadas, quienes a su vez pueden formular sus propias observaciones con respecto a las mismas. Al terminar esta fase, toca presentar a los involucrados el informe de la Comisión, en forma absolutamente confidencial, basado en las conclusiones que la Sala pudo sacar con respecto a los hechos que pudo comprobar, adjunto a las recomendaciones que se consideren oportunas.

En resumen sus principales funciones son primeramente, proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracción grave tal como se define en los Convenios o el Protocolo I o como cualquier otra violación grave de los Convenios o del presente Protocolo, en segundo lugar, la CIHE debe facilitar, mediante sus buenos oficios, “el retorno a una actitud de respeto de los Convenios o del presente Protocolo”

De este texto, se pueden deducir dos implicaciones importantes relativas a la identificación de la extensión de sus competencias:

La primera atañe a la reiterada referencia al Protocolo I de 1977 solamente y no al Protocolo II. Esto significa, evidentemente, que la Comisión no ha sido llamada a ocuparse de las violaciones de este último tratado, (el cual, es relativo a los conflictos armados sin carácter internacional), Esa es una limitación severa, dado que los conflictos internos son, hoy, cosa corriente, mientras que los conflictos entre Estados han pasado a ser raros. Sin embargo, la flexibilidad es una cualidad que no le falta a este organismo, ya que si bien fue conceptualizado para ocuparse



de los casos de conflicto armado internacional, los miembros que la integran han manifestado su buena disponibilidad para intervenir también en casos de conflicto armado interno si las partes beligerantes así lo desean.

La segunda implicación es que la competencia de la Comisión no cubre solamente las “infracciones graves” del Derecho de Ginebra, es decir los crímenes de guerra tal como están incluidos en las listas pertinentes que resultan de una disposición común a los cuatro Convenios de 1949<sup>59</sup>, y del artículo 85 del Protocolo I.

De esta manera, todo comportamiento que pueda ser calificado de “violación grave” de los principios humanitarios, puede igualmente ser objeto de una encuesta por parte de la Comisión.

## 2) Medios que permiten iniciar el funcionamiento de la CIHE

Esta, no pudiendo actuar evidentemente ex officio, corresponde a los Estados acudir a ella. Se puede someter un caso a ésta unilateralmente, si tanto el Estado acusado como el Estado acusador, han reconocido previamente “ipso facto y sin acuerdo especial” la competencia de la Comisión.<sup>60</sup> Por el contrario, por lo que respecta a lo que en el artículo 90 se califica como “otros casos”<sup>61</sup> un acuerdo ad hoc (que podrá ser informal) es indispensable para que la Comisión inicie una encuesta.

## 4. Medidas de Represión

Comprende las medidas punitivas de las infracciones y violaciones de las normas humanitarias.

El primer tipo de infracciones que los Estados están obligados a sancionar son los actos contrarios a las disposiciones de los cuatro Convenios de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977. El sistema creado por los tratados de Ginebra

---

<sup>59</sup> Artículo 50, 51, 130 y 147 de I, II, III, y IV Convenio, respectivamente.

<sup>60</sup> Artículo 90, párrafo 2 a)

<sup>61</sup> Artículo 90, párrafo 2 d)

distingue a las infracciones graves y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

a. **Infracciones Graves**

Muchas de las normas relativas a los conflictos armados internacionales figuran en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicional I de 1977. Los Estados tienen la obligación de hacer cesar todas las violaciones contra estos instrumentos, pero hay obligaciones específicas por lo que respecta a algunas violaciones graves llamadas “infracciones graves”

Se consideran infracciones graves algunas de las violaciones más graves del Derecho Internacional Humanitario. Son actos concretos enumerados en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo I y que incluyen el homicidio intencional, la tortura o el trato inhumano, así como causar deliberadamente grandes daños. Las infracciones graves son consideradas crímenes de guerra.

## **5. La Corte Penal Internacional**

a. **Antecedentes históricos**<sup>62</sup>

El 1 de julio de 2002 entró en vigor la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, luego de haber sido ratificado por más de 60 países el Estatuto aprobado el 17 de julio de 1998 en Roma.

Fueron especialmente los aberrantes e inhumanos crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial los que indujeron a la comunidad internacional a ir adoptando numerosas convenciones y tratados como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), la Convención sobre la Esclavitud (1926 y 1956), la Convención contra la Tortura (1984), etc., orientados

---

62 [www.iccn.ow.org/espanol/](http://www.iccn.ow.org/espanol/)

a promover el respeto a los derechos humanos en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, los valiosos principios establecidos en los tratados internacionales son a menudo violados por los mismos gobiernos que los han proclamado. Millones de personas han seguido siendo víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra sin que los responsables de estos actos hayan debido rendir cuentas ante la justicia. Producto del convencimiento de que es precisamente esta situación de impunidad la que favorece la repetición de los hechos, la comunidad internacional consideró necesario el establecimiento de una instancia internacional encargada de asumir aquellos casos en que la justicia nacional se muestre incapaz o no dispuesta a hacerlo.

El proceso que culminó con la creación de la CPI se remonta a fines de la Segunda Guerra Mundial, en que se constituyeron los Tribunales de Nüremberg y de Tokio para procesar a los criminales de guerra nazis y japoneses. Los principios universales que allí se asentaron alentaron la idea de una justicia penal internacional permanente.

Es así como en diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) estudiar la implementación de una corte penal internacional. Entre 1949 y 1954 la CDI se abocó a la elaboración de sus estatutos, pero la oposición de las potencias de ambos lados de la guerra fría pusieron obstáculos y condujeron a que la Asamblea General abandonara el respaldo a la iniciativa.

Recién a partir de la nueva situación internacional creada con la caída del Muro de Berlín en 1989, Naciones Unidas retomó la propuesta y pidió a la CDI la preparación de un proyecto de estatuto. Las claras violaciones a los Convenios de Ginebra cometidos durante la guerra en Bosnia Herzegovina llevaron en 1993 a la creación de un tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, lo que reforzó la discusión sobre la necesidad de una corte permanente. En 1994, tras el genocidio en Ruanda,

el Consejo de Seguridad estableció un segundo tribunal especial. Ese mismo año, la Asamblea General formó un comité ad hoc para revisar el proyecto de estatuto de la CPI remitido por la CDI y en diciembre de 1995 designó un comité preparatorio (PREPCOM) con la misión de completar su elaboración.

Ese mismo año, el 10 de febrero de 1995, algunas organizaciones no gubernamentales de larga trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos como Amnistía Internacional, crearon la Coalición Internacional de ONG por una Corte Penal Internacional, para trabajar en apoyo a la creación de un tribunal que sea justo, eficaz e independiente.

Muy pronto se fueron sumando a esta Coalición innumerables ONG de todas las regiones del mundo y de muchos sectores de la sociedad civil, especialmente los relacionados con los Derechos Humanos, los Derechos de las mujeres y los niños, la paz, el Derecho internacional, los Derechos de las víctimas y las creencias religiosas, la asistencia humanitaria. De su seno surgieron importantes aportes para el contenido de los estatutos elaborados por el PREPCOM.

Después de un largo proceso de discusión, se realizó finalmente en junio de 1998 en Roma una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios, convocada por la Asamblea General de la ONU para aprobar el Estatuto definitivo de constitución de una Corte Penal Internacional, participaron 160 Estados, organizaciones intergubernamentales como la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de los Estados Árabes, la Organización de Policía Criminal Internacional (INTERPOL), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cerca de 200 ONG de todo el mundo, agrupadas en la Coalición.

Finalmente, el 17 de julio de 1998, 120 países aprobaron con su voto favorable los Estatutos de un Tribunal Penal Internacional y sólo 7 votaron en contra, en tanto que 21 se abstuvieron. La aprobación del Estatuto de Roma sin duda constituyó un

hito importante en la lucha contra la impunidad y en pro del respeto a los derechos fundamentales.

El martes 12 marzo 2003, en La Haya, juraron sus cargos los 18 jueces de la CPI (entre ellos tres latinoamericanos y un caribeño), los jueces nombraron al canadiense Philippe Kirsh como primer presidente de este órgano de la justicia internacional.<sup>63</sup>

#### b. Jurisdicción

La Corte tendrá jurisdicción sobre los siguientes delitos:<sup>64</sup>

- Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión (este último aún no tipificado)

#### c. Principio de Responsabilidad Personal

El Derecho Internacional Humanitario consagra el principio de responsabilidad personal con relación a los crímenes de guerra; Este principio, excluye la exoneración de responsabilidad de una persona por el hecho de haber actuado en calidad de representante de un Estado, cumpliendo con órdenes superiores a fin de sustraerse de su culpabilidad personal. Se considera que los superiores son responsables de las violaciones que cometan los subordinados, en caso de que no hayan tomado las medidas necesarias para impedir que se cometan tales actos o para reprimirlos. Es por eso que las Normas del Derecho Penal Internacional vinculan directamente a los Estados y ciudadanos de todos los países del mundo, su violación acarrea la responsabilidad penal individual, así como responsabilidad internacional para los Estados. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo establece así en el artículo 25:

---

<sup>63</sup> ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Valladolid 511 y Madrid, casilla 17 - 03 – 4639.

<sup>64</sup> Estatuto de Roma de la CPI, Parte II, arts 5, 6,7,8

“Responsabilidad penal individual”

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:
  - a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;
  - b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
  - c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
  - d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:
    - i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o
    - ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;
  - e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;
  - f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de conformidad

con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.

#### d. Complementariedad

De acuerdo al principio de complementariedad, la Corte sólo actuará cuando los tribunales nacionales no tengan la capacidad o la voluntad de hacerlo.<sup>65</sup>

#### e. Competencia

La Corte tendrá competencia para iniciar enjuiciamientos si los crímenes se han cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto; si el autor de los crímenes es ciudadano de uno de estos países; si un Estado que no ha ratificado el Estatuto hace una declaración de aceptación de la competencia de la Corte sobre un determinado crimen o si el caso ha sido remitido a la Corte por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La CPI no juzgará a Estados sino que establecerá la responsabilidad penal individual incluyendo, cuando así corresponda, la de jefes de Estado. Su competencia se limita a aquellos crímenes cometidos después de su entrada en vigor, es decir, a partir del 1 de julio de 2002.

#### f. Presentación de Denuncias

El Fiscal de la Corte puede iniciar una investigación basándose en información de cualquier fuente fidedigna, incluidas la víctima, su familia o una ONG, vale decir,

---

<sup>65</sup> Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 17, a)

no es necesario el consentimiento de los gobiernos nacionales o del Consejo de Seguridad para poner determinados asuntos en conocimiento de la Corte.

g. Garantías de Juicio Justo

El Estatuto de la CPI garantiza que el acusado tenga derecho a una vista pública, justa e imparcial. Se estipula expresamente que, de conformidad con la presunción de inocencia, será en el Fiscal en quien recaiga la carga de la prueba a lo largo del juicio.

La CPI no podrá imponer la pena de muerte y la pena máxima será de cadena perpetua, aplicable cuando la gravedad del crimen lo amerite.

h. Protección y Reparación a las Víctimas

El Estatuto reconoce que, en bien de la credibilidad y la legitimidad de la Corte, será esencial adoptar medidas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos y sus familias.

Además de juzgar al autor del crimen, lo que es por sí sólo una forma de reparación de importancia decisiva, la Corte debe establecer medidas que incluyan restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y cualquier otra forma de reparación que se considere apropiada en cada caso.



i. Deficiencias

Uno de los puntos que creó más polémicos, lo constituyó el hecho que la CPI no haya sido erigida sobre el principio de jurisdicción universal sobre los casos que envuelven graves violaciones a los Derechos Humanos.

Es así como ésta no podrá intervenir en aquellos casos donde las conductas alegadas involucren al territorio o los ciudadanos de un Estado que no ha ratificado el Estatuto y tampoco se ocupará de los crímenes de lesa humanidad ni de los crímenes de guerra cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, pese a que ambos fueron declarados imprescriptibles por una Convención aprobada por la propia ONU en 1968.

En segundo lugar, el hecho que el Consejo de Seguridad de la ONU puede solicitar la suspensión de la investigación o del enjuiciamiento por un plazo de 12 meses (renovables aparentemente de manera indefinida), si considera que afectan a la paz y a la seguridad internacional. En la práctica, eso significa que el Consejo de Seguridad tendrá la facultad de poner en movimiento o paralizar la Corte, de acuerdo a la apreciación política del Consejo, es decir, la voluntad política de las grandes potencias.

Otra concesión grave es el establecimiento de una cláusula que autoriza a los países a optar por no aceptar la competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra por un período de siete años a partir de su integración al Tratado, eso supone la posibilidad de que los Estados, aún habiendo aceptado la competencia de la Corte, se den una moratoria para no juzgar los crímenes de guerra durante siete años después de su adhesión.

Tras la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en julio de 1998 en Roma, surgió una polémica sobre el alcance del artículo 31, párrafo 1, apartado c) del Estatuto, en particular con respecto a la amenaza que esta disposición puede

representar para las conquistas del derecho internacional humanitario. En el mencionado artículo se establece que las infracciones sancionadas por el Estatuto, la agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, se podrían justificar en circunstancias que puedan constituir causas eximentes de la responsabilidad penal: defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar, uso inminente e ilícito de la fuerza.

Otro artículo que es tema de discusión es el artículo 98 en el cual parece existir en el párrafo 1, la posibilidad de amparo a través la inmunidad y en el párrafo 2, la posibilidad de amparo a través acuerdos internacionales concertados con otros países.

#### j. Responsabilidad de los Estados

Una importante función de la CPI debiera ser la de estimular a los Estados Partes a adaptar la legislación nacional al derecho internacional, especialmente en lo concerniente a la tipificación de todos y cada uno de los crímenes contenidos en el Estatuto de la CPI. Los Estados tienen preeminencia para la realización de procesos por casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus ciudadanos, pero eso presupone la existencia de una efectiva legislación al respecto. Su implementación, no sólo facilitará que los gobiernos se acojan a esta opción, sino que además fortalecerá los esfuerzos por promover el Estado de derecho y contribuirá a la estabilidad y el orden público.

#### k. Situación de los Países Latinoamericanos

En América Latina hasta julio de 2002 eran 12 los países que habían ratificado el Estatuto de Roma: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 6 países han firmado el tratado pero aún no lo han ratificado: Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, y República Dominicana. Sin embargo, un problema central detectado en la mayoría de ellos, es la falta de penalización doméstica de las conductas prohibidas en el Estatuto de la CPI y en otros convenios internacionales.<sup>66</sup>

#### 6. Nicaragua y la Corte Penal Internacional

En la actualidad 139 países han firmado los Estatutos de Roma y 91 han ratificado o se han adherido. Nicaragua no firmó ni ratificó, no se aprecia aún prioridad al tema de la CPI, en la agenda gubernamental. En Nicaragua “están divididos” los criterios sobre la adhesión.<sup>67</sup>

#### B. Responsables de la Aplicación<sup>68</sup>

Todos los Estados tienen la clara obligación de tomar y aplicar medidas de aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Es posible que la adopción de dichas medidas incumba a uno o varios ministerios gubernamentales, al cuerpo legislativo, a los tribunales, a las fuerzas armadas o a otros órganos estatales.

Asimismo, las instituciones profesionales y educativas, las organizaciones voluntarias y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden desempeñar un papel al respecto.

---

<sup>66</sup> Hugo Adrián Relva, “La necesidad de implementación: el caso latinoamericano”. En El Monitor de la CPI, publicación trimestral de la Coalición de ONG por la CPI

<sup>67</sup>Arto 90, Protocolo I, 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949

<sup>68</sup> Arto 6, Protocolo I, Art. I común a los Convenios de Ginebra

También se han tomado medidas a escala internacional. Se ha establecido una Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, y se alienta a los Estados a utilizar sus servicios. Se han creado tribunales para que juzguen las infracciones cometidas durante los conflictos de Ruanda y de ex Yugoslavia. Una Corte Penal Internacional<sup>69</sup> ha sido creada por el Estatuto de Roma de 1998.

No obstante, los Estados siguen siendo los principales responsables de garantizar la plena aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y los primeros que han de tomar medidas en el ámbito nacional.

### **C. Medidas para la Aplicación<sup>70</sup>**

En los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario se estipula una serie de medidas que los Estados han de tomar. En virtud de los Convenios de Ginebra de 1949, de sus Protocolos adicionales de 1977, del Convenio de La Haya de 1954 sobre los bienes culturales y de su segundo Protocolo de 1999. Las principales son:

- Preparar traducciones nacionales de los mencionados Convenios y Protocolos; Los depositarios facilitan asimismo estas traducciones a todos los Estados Partes.<sup>71</sup>
- Dar a conocer su contenido tan ampliamente como sea posible, tanto a las fuerzas armadas como al público en general, los combatientes deben ser instruidos en el Derecho Internacional Humanitario de manera que se comporten en consonancia con sus normas. Para que observen debidamente el Derecho Internacional Humanitario, todos los interesados han de estar familiarizados con él. Los funcionarios y los cargos públicos, los estudiantes y los profesores, el personal

---

69 Corte Penal Internacional, recientemente establecida mediante un Tratado Internacional, sesión inaugural 11 de marzo 2003

70 Publicación CICR, América Latina: Derecho Internacional Humanitario, medidas nacionales de aplicación, 6 diciembre 2002

71 Art. 48/I, 49/II, 128/III, 145/IV, Convenios de Ginebra

médico y los profesionales de los medios informativos deben conocer, en particular, sus principios.<sup>72</sup>

- Reprimir todas las violaciones previstas en los Convenios y en los Protocolos y, en particular, adaptar la legislación penal para que se prohíban y se sancionen los crímenes de guerra; El Derecho Internacional Humanitario estipula normas detalladas para proteger a las víctimas de los conflictos armados y limitar los medios y métodos de hacer la guerra, así como mecanismos para garantizar que se respeten estas normas.

Establece, en particular, la responsabilidad individual de quienes infrinjan sus normas, u ordenen a otros que las infrinjan, y exige que se enjuicie a los responsables de violaciones graves y que se les castigue como criminales, puesto que tales delitos están considerados como crímenes de guerra. El Derecho Internacional Humanitario insta a los Estados a que busquen y castiguen a todos los que cometan infracciones graves, sin tener en cuenta su nacionalidad o el lugar en que se haya perpetrado el crimen.

Este principio, llamado de jurisdicción universal, es un factor clave para garantizar la efectiva represión de los crímenes de guerra. Así pues, los Estados han de velar por que su derecho penal impida y sancione:

- Las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I;
- Las violaciones de la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales;

---

<sup>72</sup> Art. 47/I, 48/II, 127/III, 144/IV de los Convenios de Ginebra, así mismo los artículos 82 y 83 del Protocolo I

- El homicidio intencional o las lesiones graves de civiles como consecuencia de la violación del Protocolo II enmendado (relativo a las minas terrestres) de la Convención de 1980 sobre el Empleo de Ciertas Armas Convencionales;
- Las violaciones de las disposiciones de la Convención de Ottawa, por la que se prohíbe el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal, y se dispone su destrucción;
- Los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional;

Así mismo derecho penal debe:

- Garantizar que las personas, los bienes culturales, las instalaciones para la protección civil y las obras que contienen fuerzas peligrosas sean correctamente identificados, señalados y protegidos mediante los signos especiales previstos en el Derecho Internacional Humanitario proporcionar tarjetas de identidad, que protejan a sus portadores, al personal médico y religioso, a los periodistas y al personal asignado a tareas especiales;
- Tomar medidas para prevenir, reprimir y castigar el uso indebido de los emblemas y las denominaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el signo de la protección civil y las señales electrónicas que se mencionan en los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario;
- Promulgar normas nacionales para definir e identificar los emblemas reconocidos y protegidos, así como designar a la autoridad nacional encargada de supervisar las cuestiones relacionadas con los emblemas, tales como quiénes están autorizados a usarlos y para qué;
- Conceder las garantías fundamentales y judiciales a las personas protegidas durante los conflictos armados;

- Prever la designación y la formación de personal calificado en Derecho Internacional Humanitario, incluidos asesores jurídicos en las fuerzas armadas para auxiliar a los mandos militares en la aplicación de este derecho y en la formación adecuada de las fuerzas armadas;
- Prever la creación y/o el reglamento de:
  - . Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de otras sociedades de asistencia voluntarias;
  - . Organizaciones para la protección civil;
  - . Oficinas nacionales de información;
- Tener presente el Derecho Internacional Humanitario para la ubicación de emplazamientos militares, así como para el desarrollo de armas y la adopción de tácticas militares; los objetivos militares no deben situarse dentro o cerca de zonas densamente pobladas; las nuevas armas y métodos de hacer la guerra deben adecuarse a las normas del Derecho Internacional Humanitario;
- Prever, cuando sea necesario, la creación de zonas sanitarias, de zonas de seguridad, de zonas neutrales y de zonas desmilitarizadas;
- Identificar los bienes culturales en el marco de la Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales y sus Protocolos (el Protocolo II se ratificó en junio de 2001)

Algunas de esas medidas requieren la aprobación de disposiciones legislativas o de reglamentos. Otras requieren la elaboración de programas educativos, el reclutamiento y/o la formación de personal, la preparación de tarjetas de identidad y demás documentos, el establecimiento de estructuras y la introducción de procedimientos de planificación y administrativos.

Todas las medidas son esenciales para garantizar la eficaz aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

#### **D. Promoción de las medidas nacionales de aplicación y las Comisiones Nacionales<sup>73</sup>**

La aplicación eficiente del Derecho Internacional Humanitario en el ámbito nacional exige un esfuerzo sostenido del que alguien se ha de ocupar.

Muchos Estados han creado comisiones nacionales de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, u órganos similares, integrados por representantes de ministerios, de organizaciones nacionales, de órganos profesionales, etc., responsables o con experiencia en materia de aplicación. Estas comisiones actúan como órganos consultivos de las autoridades gubernamentales en la tarea de integrar, desarrollar y difundir el Derecho Internacional Humanitario. Ellas se encargan de establecer calendarios y fijar prioridades a fin de que la labor sea sostenida y coherente. Al 1 de enero de 2002, se habían establecido unas 60 comisiones nacionales. En Nicaragua, por decreto ejecutivo # 54 – 99, se creó la Comisión Nacional de Aplicación de Derecho Internacional Humanitario en fecha 23 de abril de 1999<sup>74</sup>.

En algunos países, también las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden prestar asistencia por lo que atañe a aplicación. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por mediación de su Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, está a disposición de los Gobiernos para asesorar y proporcionar documentación en materia de aplicación de medidas nacionales.

---

<sup>73</sup> Paul Berman, Servicio de asesoramiento del CICR en Derecho Internacional Humanitario: el reto de la aplicación nacional, revista internacional de la Cruz Roja # 121.

<sup>74</sup> Ver anexo N°6 Gaceta N°81



## **1. El objetivo de las Comisiones Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario**

Su objetivo es asesorar y ayudar a los gobiernos en su labor de aplicación y difusión del Derecho Internacional Humanitario, la creación de estas comisiones se considera como importante etapa con miras a conseguir una aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario.

## **2. Las funciones de las Comisiones Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario**

El establecimiento de una Comisión Nacional puede constituir un importante y decisivo medio para garantizar la cabal aplicación del Derecho Internacional Humanitario. La creación de esta Comisión demuestra un compromiso real por preservar las garantías esenciales otorgadas a las víctimas de los conflictos armados, además evidencia la voluntad del estado de cumplir las obligaciones fundamentales de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Ni los Convenios de Ginebra, ni sus protocolos adicionales prescriben la constitución de una Comisión Nacional, por lo tanto el estado que la crea debe reglamentar también las cuestiones referentes a su formación, su funcionamiento y su composición. Es importante insistir en que la aplicación plena del Derecho Internacional Humanitario es un proceso continuo, que no se limita únicamente a la aprobación de leyes y ordenanzas, la plena aplicación implica así mismo velar por el cumplimiento y la difusión del Derecho Internacional Humanitario, mantenerse al corriente de su desarrollo y contribuir a él. A la luz de estas consideraciones se recomienda que la Comisión Nacional de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario sea un órgano permanente, y no una mera Comisión Ad – Hoc.

Las Comisiones Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario no requieren una estructura determinada, cada estado deberá definir la organización y los objetivos de la Comisión cuando esta se constituya, ahora bien dado que la finalidad de este organismo es promover la aplicación y la difusión del Derecho Internacional Humanitario en el plano nacional, debería tener las siguientes características:

- Poder evaluar la legislación nacional existente en relación con las obligaciones que imponen los Convenios, los Protocolos y otros instrumentos del Derecho Internacional Humanitario;
- Estar en condiciones de formular recomendaciones para promover la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, así como de vigilar y velar por su aplicación, para ello puede proponer nuevas leyes o enmiendas a la legislación en vigor, coordinar la adopción y el tenor de reglamentos administrativos, así como dar orientaciones sobre la interpretación y la aplicación de las normas humanitarias;
- Poder desempeñar un importante papel en la tarea de impulsar la difusión del Derecho Internacional Humanitario, la Comisión debería tener las competencias necesarias para efectuar estudios, proponer actividades y prestar ayuda en materia de difusión del Derecho Internacional Humanitario en todos los sectores de la población, por ello habría que asociarla a la labor de formación de las fuerzas armadas en Derecho Internacional Humanitario, a la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario en los distintos niveles del sistema educativo y a la divulgación de las nociones fundamentales de Derecho Internacional Humanitario entre la población en general.

### **3. Composición de la Comisión**

Teniendo en cuenta estos cometidos, resulta evidente que una Comisión Nacional de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario necesita ampliar atribuciones.

Deberán formar parte de la Comisión representantes de los Ministerios concernidos por la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, como son los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, del Interior, de Justicia, de Salud, de Hacienda y de Educación, entre otros; Además representantes de las diversas comisiones parlamentarias y del poder judicial podrían aportar una valiosa contribución, es así mismo importante que formen parte de tales Comisiones otras “personas calificadas”, puede tratarse de particulares no relacionados con el gobierno, designados por su competencia en los ámbitos jurídico, educativo, de la comunicación u otros.

Las Comisiones deberían prever pues, la ayuda de especialistas con conocimientos de Derecho Internacional Humanitario, provenientes de las universidades, en especial de las facultades de derecho, de organizaciones humanitarias, y eventualmente, de los medios de comunicación electrónicos y de la prensa escrita.

### **4. Las Comisiones Nacionales de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Centroamérica.**

A mayo del 2000 la región de América Central y el Caribe hispanohablante contaba con cinco Comisiones Nacionales: el Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (CIDIH-ES), la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario de Panamá (CPDIH); la Comisión Nacional para la Aplicación de Derecho Internacional Humanitario de Nicaragua; la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario de República Dominicana; la Comisión

Guatemalteca para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (COGUADIH).

Las Comisiones Nacionales de la región y el CICR han trabajado en forma muy satisfactoria en la promoción de medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que hacen efectivas las disposiciones del derecho humanitario. Dentro de las medidas legislativas adoptadas y promovidas entre 1999 y el año 2000 se encuentran, entre otros, la adhesión de El Salvador de la Convención de 1980 y de sus IV Protocolos, la ratificación del Tratado de Ottawa por El Salvador y Panamá, la adhesión de Nicaragua a los Protocolos adicionales de 1977, la aceptación de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta por parte de Panamá. Por otra parte, las Comisiones en cumplimiento de su mandato han desarrollado actividades de capacitación y difusión de las normas de Derecho Internacional Humanitario a diferentes sectores de la población.

En conclusión, las Comisiones Nacionales han desempeñado hasta ahora un importante papel en la promoción de los instrumentos de derecho humanitario y en la adopción de medidas que harán día a día del derecho humanitario un derecho real y efectivo en la lucha por la protección del ser humano en tiempo de conflicto armado.

## **5. El papel de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja<sup>75</sup>**

La aplicación del Derecho Internacional Humanitario es un objetivo clave del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En los estatutos del movimiento se reconoce el papel que desempeñan, en colaboración con los gobiernos, para garantizar el respeto del Derecho Internacional

---

<sup>75</sup> Publicación CICR, Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la aplicación del DIH, algunos principios rectores, enero, 2003.

Humanitario y para proteger los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Las relaciones de las sociedades Nacionales con las autoridades nacionales y otras entidades concernidas, así como los propios conocimientos y experiencia en Derecho nacional e internacional les confieren un papel clave en este ámbito, por lo tanto pueden contribuir al logro de los objetivos de la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Habida cuenta de la posición y la experiencia de las Sociedades Nacionales, es importante que representantes de estas figuren entre los miembros de las Comisiones Nacionales.

Las sociedades Nacionales pueden tomar entre otras, las medidas siguientes para garantizar el logro de estos objetivos:

Participación a los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario:

- Debatir con las autoridades nacionales el contenido y la finalidad de tales instrumentos y promover el apoyo a dichos instrumentos.

Adaptación de la legislación nacional:

- Concienciar a las autoridades nacionales acerca de la necesidad de adaptar la legislación nacional para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, elaborar proyectos de ley y/o comentar acerca de los proyectos de ley de las autoridades nacionales, fomentar la introducción y la adopción de leyes de aplicación del Derecho Internacional Humanitario y explicar a los miembros del poder legislativo y al público en general la necesidad de adaptar la legislación nacional para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

### **E. Estructura Constitucional y Posición del Derecho Internacional Humanitario en las Leyes Nicaragüenses**

A través de la historia Nicaragua ha sido un país asolado por conflictos armados, lo que ha provocado violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, por tal razón organismos internacionales humanitarios como el CICR, los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, UNICEF, entre otros, se han establecido de manera prolongada en nuestro país. El CICR instaló una delegación en Nicaragua en el año 1979 firmando un convenio de sede con el Gobierno, a partir de ahí, su actividad ha tenido como finalidad primordial proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados, tanto a los que participan directamente en estos, como a los que no participan.

En el transcurso del tiempo en Nicaragua se han sucedido, hechos históricos como sangrientos, disturbios internos, genocidios y una revolución, en todos estos episodios el CICR, ha formado parte de nuestra historia, visitando cárceles, (cuando le fue posible), difundiendo el Derecho Internacional Humanitario, tratando en la medida de lo posible que se respetaran las mínimas normas de respeto a la vida y la integridad humana.

En algunas etapas fue más fácil que otras, o mejor dicho en algunas etapas fue más difícil que fácil. Actualmente Nicaragua es un país donde se puede decir que se respetan las normas del Derecho Internacional Humanitario, prueba de ello es que es a nivel de América Latina uno de los pocos países que ha cumplido a cabalidad con el tratado de Ottawa, otro índice importante es la Creación de la Comisión Nacional del Derecho Internacional Humanitario, así mismo hay fallas que se tienen que superar, por ejemplo debemos ratificar los tratados que aún no han sido

ratificados a este nivel. En la actualidad Nicaragua es parte de los siguientes convenios<sup>76</sup>:

- Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.
- La Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales y sus Protocolos (el Protocolo II se ratificó en junio de 2001)
- La Convención de 1972 sobre Armas Biológicas.
- La Convención de 1993 sobre Armas Químicas.
- La Convención de 1980 sobre el Empleo de Ciertas Armas Convencionales y sus Cuatro Protocolos, incluido el Protocolo II enmendado (ratificado en diciembre de 2000)
- La Convención de Ottawa de 1997.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados.
- Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD)

La Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó la ratificación de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 con la resolución # 17, del 9 de julio de 1952; la ratificación siguió el 17 de diciembre de 1953. El texto de los Convenios fue publicado en la Gaceta, diario oficial, entre el 22 de octubre de 1952 y el 14 de marzo de 1953.

La ratificación de los dos Protocolos Adicionales fue aprobada por el Decreto Legislativo # 20- 10 del 10 de septiembre de 1998, y ordenada por el Decreto Presidencial # 25 – 99 del 10 de marzo de 1999.

---

<sup>76</sup> Entrevista con la doctora Ligia Margarita Guevara, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional para la Aplicación del DIH.

En el Código Penal se establecen penas para los delitos de guerra<sup>77</sup> —cometidos en situaciones de conflictos armados, nacionales o internacionales— y el crimen de genocidio, en aplicación del principio de la jurisdicción universal.

“Comete delito contra el Orden Internacional, el que durante una guerra internacional o civil cometiere actos graves violatorios de los convenios internacionales sobre el empleo de armas bélicas, tratamiento de prisioneros y demás normas sobre la guerra y será penado con presidio de 10 a 20 años. Si los actos no tuvieren consecuencias graves en las personas o poblaciones afectadas, la pena será de 2 a 10 años de prisión.”<sup>78</sup>

“El que maltrate gravemente de hecho o de palabras a un prisionero de guerra se hará acreedor a la pena de privación de libertad de seis meses a tres años. En igual pena incurrirá el que desatendiere el cumplimiento de las obligaciones que le fueren asignadas para el cuidado y curación de un prisionero de guerra herido o enfermo.”<sup>79</sup>

# **1. Los Delitos Internacionales en el Proyecto de Código Penal de Nicaragua.**<sup>80</sup>

En lo que concierne al Derecho Nicaragüense, el Código Penal vigente en su título XIV, lleva la rúbrica de delitos de carácter internacional. Contiene un capítulo único y cuatro artículos. El 549 y 550 que definen el delito de genocidio y establece penas de 15 a 20 años de presidio para el que lo cometa. El artículo 551 define el delito contra el orden internacional y establece penas de presidio que van de 10 a 20 años y si los actos no tuvieren consecuencias graves en las personas o poblaciones afectadas, la pena que se aplicará será de 2 a 10 años de prisión y el artículo 552 define la trata de blancas o de niños destinados a la prostitución o comercio carnal por lo que sufrirá la pena de presidio de 3 a 5 años.

<sup>77</sup> Código Penal, libro II, título I, “Delitos de carácter internacional”, Arto. 549 y 550.

<sup>78</sup> Artículo 551 del código penal de Nicaragua.

<sup>79</sup> Ley provisional de los delitos militares, decreto # 600, extractos, capítulo XIII, sección Segunda, maltrato a prisioneros de Guerra, artículo 80.

<sup>80</sup> “Encuentro”, Revista de la Universidad Centroamericana, año XXXII. , # 54/2000.



Existen otros delitos transnacionales que están distribuidos en otros capítulos, como la definición de la piratería en el capítulo V con pena de 2 a 10 años de presidio.

En cambio, el Proyecto de Código Penal de Nicaragua, en el título XXI, lleva la rúbrica de delitos contra el orden internacional, contiene un capítulo único y 32 artículos que van desde el artículo 444 al 476; Dichos artículos definen los delitos contra el orden internacional y establecen las penas respectivas. Se trata en todos los casos, del cumplimiento de obligaciones internacionales mediante la imposición de penas a delitos tipificados en tratados o en los que es parte Nicaragua.

Los artículos comprendidos entre los artículo 444 y 4463 están influenciados por los Convenios de Ginebra de 1949, el artículo 3 común a los mismos y los Protocolos Adicionales.

a. Propuesta de Modificaciones al Proyecto de Código Penal en Nicaragua

La Ley Provisional de los Delitos Militares<sup>81</sup>, que funciona como *lex specialis* respecto del Código Penal, establece penas para determinadas infracciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas por personal militar.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional preparó un proyecto de enmienda al capítulo del Código Penal relativo a los crímenes contra el derecho internacional, en el que se establece la represión de los crímenes de guerra y otras infracciones del Derecho Internacional Humanitario, con vistas a su adaptación a los requisitos de esta rama del derecho. La parte general del proyecto de Código Penal se aprobó en 2001.

---

81 Decreto # 600 de la ley provisional de los delitos militares.

## **F. La Aplicación de la Convención de Ottawa en Nicaragua.<sup>82</sup>**

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (también conocida como “Tratado de Ottawa”) ha sido un paso decisivo a fin de resolver la crisis de índole humanitaria originada por estas armas, este tratado se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999.

Por decreto ejecutivo # 84-98, el gobierno de Nicaragua creó la “Comisión Nacional de Desminado”, que tendrá como misión, coadyuvar e impulsar acciones destinadas a apoyar el programa de Desminado de Nicaragua que dirige el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Nicaragua.<sup>83</sup> El gobierno de Nicaragua fue el país anfitrión de la tercera reunión de los Estados partes en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su destrucción; Esta se celebró en Managua, del 18 al 21 de septiembre del año 2001.

Nicaragua no solo ha sufrido la plaga de las minas terrestres, sino que también ha tenido la amarga experiencia de tener un revés en sus esfuerzos de desminado, cuando el huracán Mitch arrasó el país en octubre de 1998. Al tiempo que continúan las operaciones de desminado, Nicaragua termina el proceso de destrucción de sus existencias de minas antipersonal.

---

82 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, aprobada en Oslo el 18 de septiembre de 1977

83 Anexo N°7 La Gaceta N° 236

## **1. Obligaciones básicas**

El Tratado de Ottawa prohíbe las minas antipersonal. Lo que se pretende, en definitiva, es eliminar estas minas y ayudar a las víctimas y a las comunidades afectadas.

Los Estados que se adhieran a este tratado no deben, en ninguna circunstancia, emplear, desarrollar, producir, almacenar o transferir minas antipersonal ni ayudar a terceros a que lo hagan.<sup>84</sup>

Las minas antipersonal han sido concebidas para ser colocadas en el suelo o cerca de éste y que explodan por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona.

Los Estados se comprometen a destruir o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal, y de las minas almacenadas, en un plazo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención<sup>85</sup>, y de las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención.<sup>86</sup>

No sólo se prohíbe a los Estados Partes el empleo de minas antipersonal, sino que se exhorta a los países que puedan a que presten ayuda para remover las minas, efectuar campañas de sensibilización a este peligro y proporcionar cuidado y rehabilitación a las víctimas. Los Estados afectados por las minas tienen derecho a solicitar y recibir esa ayuda directamente de otros Estados Partes en el tratado, así como de las Naciones Unidas, las organizaciones zonales o nacionales, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales.

---

<sup>84</sup> Tratado de Ottawa, artículo 1, Párrafo. 1, a, b, y c

<sup>85</sup> Artículo 4 del mismo tratado

<sup>86</sup> Artículo 5, párrafo 1

Los Estados Partes han de garantizar, en particular, que sus leyes:

- Establezcan la responsabilidad penal individual de los autores de cualquiera de los actos que se prohíben en el artículo 1 de la Convención, incluido ayudar, alentar o inducir a cualquiera a participar en tales actos;
- Eximen de responsabilidad penal la retención o la transferencia de una cantidad mínima absolutamente necesaria de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, remoción o destrucción de minas y el adiestramiento en ellas;
- Impongan sanciones penales acordes con la naturaleza y la gravedad del delito y en consonancia con el régimen sancionador aplicable a otros delitos;

## **2. Destrucción de las minas antipersonal almacenadas**

Según lo previsto en el artículo 4 del tratado de Ottawa, se exige a cada Estado Parte que destruya cuanto antes todas las existencias que tenga de minas antipersonal (minas almacenadas), a más tardar en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del tratado para el Estado en cuestión.

El tratado entra en vigor transcurridos 180 días desde la fecha de depósito del instrumento de ratificación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

- a. Resumen estadístico del Desminado Nacional hasta el 31 de Marzo 2003<sup>87</sup>
- Objetivos a desminar:  
Planificados desde 1989: 991  
Concluidos hasta marzo 2003: 794  
Falta: 197  
Avance: 80.12 %
  - Kilómetros a desminar:  
Planificados desde 1989: 409 Km  
Concluidos hasta marzo 2003: 273.5 Km  
Falta: 1135.95  
Avance: 66.87%
  - Frontera Norte:  
Planificados desde 1989: 313 Km  
Concluidos hasta marzo 2003: 178.05 Km  
Falta: 134.95  
Avance: 56.53%
  - Frontera Sur:  
Planificados desde 1989: 96 Km  
Concluidos hasta marzo 2003: 96 Km  
Falta: 0  
Avance: 100%
  - Cantidad de minas en arsenal destruidas:  
Planificadas desde 1989: 133, 435  
Concluidas hasta marzo 2003: 133.435

---

87 Revista, Nicaragua Desminado Humanitario, Edición N°1, 2003

Falta: 0

Avance: 100%

- Cantidad de minas instaladas, destruidas y certificadas:  
Planificadas desde 1989: 135, 643  
Concluidas hasta marzo 2003: 89,191  
Falta: 46,452  
Avance: 65.75%
- Objetos metálicos detectados, desde 1989, hasta marzo 2003: 527, 339.

### **3. Informes Anuales**

En el artículo 7 del tratado de Ottawa se estipula que los Estados Partes remitirán informes al Secretario General de las Naciones Unidas.

Se presentará un primer informe 180 días después, como máximo, de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado. La información contenida en este informe inicial se actualizará anualmente para dar cuenta del año natural precedente y se presentará al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año.

Estos informes deben facilitar información sobre diversas cuestiones, como son las medidas nacionales de incorporación del Derecho Internacional Humanitario adoptadas; las existencias totales de minas antipersonal almacenadas; la ubicación de todas las zonas minadas; el número de minas retenidas para fines de formación; el desarrollo de los programas de destrucción; y las medidas tomadas para alertar a la población sobre todas las zonas minadas.

Nicaragua es el único país en el Hemisferio que ha cumplido con las labores de educación, prevención y reinserción, tal vez en menor escala a lo planificado, pero no deja de ser el único país y así lo ha reconocido la Comunidad Internacional.

Por ejemplo, en la labor de educación y prevención disponemos de cuñas radiales que suenan en emisoras nacionales y locales, gracias a la cooperación danesa, además, se colocan afiches en zonas minadas y los mismos contingentes de señalización hacen labor de sensibilización y prevención en los lugares donde están trabajando.

En el aspecto de reinserción, dos instituciones internacionales, en conjunto con el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), están capacitando a 40 víctimas de minas para reinsertarlos a la vida productiva del país. Ellos están en una capacitación de ocho a nueve meses, se les provee de 100 dólares mensuales para que no deserten y asegurar su participación en los distintos cursos.

Un trabajo pendiente de hacer es la sensibilización a la empresa privada, para que una vez que sean capacitadas, puedan trabajar en diferentes empresas, o bien sean beneficiados de fondos revolventes para que echen andar una pequeña empresa.

Aunque el Tratado de Ottawa es un gran logro, aún queda mucho por hacer para enfrentarse con éxito a la epidemia mundial de las minas terrestres.

Muchos gobiernos han refrendado el tratado, pero la firma refleja tan solo el compromiso político que asume el estado signatario de estar obligado por él en el futuro. Cada uno de esos estados debe tomar medidas a nivel nacional, a fin de que el texto le sea jurídicamente obligatorio. El tratado no surtirá efectos mientras no hayan tomado tales medidas 40 estados y solamente entonces les será aplicable.<sup>88</sup> Además con el objeto de reducir los riesgos que conllevan las minas antipersonal

---

88 Revista internacional de la cruz roja # 143, Pág. 599 616, 30 de septiembre, 1997

para las personas civiles, los Estados deben garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones previstas en el Tratado.

Poner término a la plaga de las minas terrestres es un proceso que requerirá una acción concertada y a largo plazo.

#### **4. Resumen de labores de la Comisión Nacional de Desminado en el año 2002<sup>89</sup>**

Desde finales del año 2000, la Comisión Nacional de Desminado, intensificó y reorientó sus esfuerzos para cumplir con los compromisos emanados de su mandato y de aquellos contenidos en la Convención de Ottawa, con este propósito se asumió un papel más activo y coherente en la acción contra las minas, con el objetivo de que el Programa Nacional de Desminado se ejecute como una política de Estado y no en el marco de un programa de gobierno.

Las acciones más relevantes desarrolladas durante el año 2002, fueron las siguientes:

Avances Institucionales:

- Incorporación de la Primera Dama, Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, como Presidenta Honoraria de la Comisión Nacional de Desminado.
- Inauguración de las oficinas y mobiliario de la Comisión Nacional de Desminado.
- Página Web de la Comisión Nacional de Desminado con toda la información actualizada sobre los diferentes componentes del Programa Nacional de Desminado.

---

<sup>89</sup> Revista de la Comisión Nacional de Desminado, “Nicaragua Desminado Humanitario”, edición N°1- 2003.



#### Educación y Prevención:

- Puesta en vigencia a partir de enero de 2002, de la Guía Nacional de Prevención para la elaboración de material educativo.
- Desarrollo de campañas de divulgación a través de los medios de comunicación.

#### Atención a Víctimas:

- Gestionar la inclusión de programas sociales de rehabilitación y reinserción de las víctimas de minas antipersonal, mediante la consecución de donaciones o gestión de proyectos, así se cuenta con un fondo para cubrir la atención médica inmediata de la persona que sufra accidente por minas antipersonal, incluyendo además la rehabilitación física y psicológica, así como el suministro de la respectiva prótesis, todo esto de manera gratuita.
- Se está participando en la ejecución de un proyecto de capacitación técnica a víctimas de minas, a quienes una vez graduados se les apoya con herramientas básicas, así como un fondo revolviente.

#### Ámbito Internacional:

- Presencia activa y participación a nivel de foros internacionales celebrados en torno al tema de desminado.
- Se organizó la Conferencia “Los Avances del Desminado en las Américas”, con la participación de delegados de toda Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos de América, la OEA y la Junta Interamericana de Defensa.
- Se logró convocar en coordinación con el Secretario General de la OEA, una reunión de donantes para el Desminado Humanitario.

Partiendo de estos logros, este año 2003, la Comisión Nacional de Desminado continuará impulsando con mayor energía iniciativas que impidan que el Programa Nacional de Desminado se interrumpa.

Nicaragua como país tiene una meta y un compromiso con la Comunidad Internacional, como suscriptores de la Convención de Ottawa de concluir el desminado en el año 2005.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al comenzar esta monografía, lo hice con las ansias de reflejar la esencia del Derecho Internacional Humanitario, esencia que conlleva compromisos, derechos, obligaciones, pero sobre todo satisfacción, al desprenderse de este conjunto de reglas grandes beneficios para la humanidad.

Todo lo que he leído y aprendido es muy bonito y esperanzador, definitivamente ha servido a mucho en algunas épocas, pero en la actualidad y en pleno siglo XXI, continúan los crímenes de guerra, de lesa humanidad, los genocidios, y las muertes de inocentes siguen siendo numerosas, entonces hay algo que no tiene coordinación entre todos estos monumentos jurídicos y la realidad, si hay líneas de conducta a seguir, ¿Por qué no hacerlo?, Si hay sanciones ¿Por qué no temerles?, lo más probable es que estas normas y sanciones solo sean para una parte de la población mundial, la otra parte que cuenta con poder, prestigio e innumerables recursos se escuda en otras leyes (dictadas por ellos mismos), el problema real es que el mundo está mal repartido, la gran mayoría son los países sin recursos, ni poder, ni prestigio y entre estos se encuentra Nicaragua, digo esto ya que a través de la historia nuestro país se ha orientado a seguir líneas de conducta en política exterior consecuentes con las grandes potencias.

En el momento actual Nicaragua no firmó, ni ratificó la Corte Penal Internacional y por lo visto no habrá adhesión, esto es inconsistente de nuestra acción exterior no completar el cuadro de compromiso del Estado de Nicaragua con el Derecho Internacional Humanitario, al no adherirnos al Estatuto de Roma, ya Nicaragua es parte ratificante de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos Adicionales de 1977 y también es parte ratificante de la Convención de Ottawa sobre el desminado, de la cual es pionera a nivel regional.

La no adhesión de Nicaragua a la Corte Penal Internacional se debe, según algunos conocedores del caso a que algunos de sus artículos son incompatibles con la constitución nicaragüense, por ejemplo en el caso de extradición, pero la realidad, es que a mi juicio no podemos adherirnos a la Corte por la amenaza que se cierne sobre el gobierno de Nicaragua de quedarnos sin el apoyo de los Estados Unidos de América y más bien con sus represalias.

Las autoridades nicaragüenses deben tomar en cuenta que más allá del compromiso internacional de firmar y ratificar acuerdos internacionales, se tiene el compromiso moral y cristiano de establecer una acción concreta y real para la construcción de un mundo de paz, seguridad y bienestar para la humanidad, por ello es que la Corte Penal Internacional de carácter permanente invoca el compromiso de los gobiernos del mundo a ser parte de ella, ya que investigará y llevará ante la justicia a los individuos responsables de cometer las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario; y evitar sobre todo la impunidad de los autores de esos crímenes, y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.

En Nicaragua se ha constituido una Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario que demuestra el compromiso del Estado en cumplir las obligaciones fundamentales de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Recomiendo que en el marco del funcionamiento de esta Comisión se analice y estudie la conveniencia de que el Estado de Nicaragua se adhiera al Estatuto de la Corte Penal Internacional, compatibilizando el Estatuto con la Constitución de Nicaragua. La adhesión del Estado de Nicaragua al Estatuto de Roma no haría más que fortalecer el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Debido a la ratificación casi universal de los Convenios de Ginebra y al número cada vez mayor de Estados Partes en sus Protocolos adicionales, así como a la trascendencia de los principios humanitarios, todos los Estados tienen el

compromiso, según los términos estrictos del artículo 1 de los Convenios y del Protocolo I, de respetar y de asegurarse de que todos los demás Estados respeten el Derecho Internacional Humanitario, pero habría que encontrar los medios para fortalecer este respeto.

Una excelente forma para que se respete este derecho, sería que los Estados dieran más apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que este organismo es el guardián de los Convenios de Ginebra de 1964 y de sus Protocolos Adicionales de 1977. Su acción es noble pero ardua, sus únicas armas son el diálogo y la discreción, no puede ni debe tomar medidas coercitivas para hacer respetar sus principios. Las gestiones que hacen cada día los delegados en situaciones de conflicto ante los que violan las normas es probablemente la contribución más importante que con frecuencia salva vidas. La obligación colectiva de los Estados de intentar garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario se reitera en el artículo 89 del Protocolo adicional I, en el que se exhorta a los Estados partes a actuar conjuntamente o individualmente, en cooperación con las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas en situación de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

En el aspecto financiero el Comité Internacional de la Cruz Roja, depende en gran medida de las contribuciones voluntarias de los Estados partes en los Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales, sería bueno que hubiese un compromiso de todos estos estados a contribuir financieramente con este organismo, en la medida de las capacidades de cada cual.

Los Estados Partes, como lo es Nicaragua, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977, en la Convención de La Haya de 1954 sobre bienes culturales y en sus dos Protocolos, en la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y en sus cuatro Protocolos, en la Convención de 1993 sobre armas químicas y en la Convención de Ottawa de 1997, deberán examinar qué obligaciones adicionales les imponen estos tratados para prevenir y castigar las

violaciones del derecho. Los gobiernos en tiempo de paz deben tomar medidas preliminares, impulsando la formación de personal calificado y la difusión del Derecho Internacional Humanitario, para que se conozca y se respete mejor esta rama de derecho en tiempo de conflictos armados.

Puede ser que las normas del Derecho Internacional Humanitario no sean perfectas y que tampoco tengan una respuesta clara para todos los nuevos desafíos que plantea el mundo, no obstante, estas normas representan en mi opinión lo mejor de que disponemos para tratar los problemas humanitarios que acompañan actualmente las situaciones de conflicto armado. Por lo tanto, valdría la pena antes de descartarlas, examinar el estado de su aplicación y respeto, lo cual deja todavía mucho que desear.

En la actualidad, el mayor desafío con el que se encuentra el Derecho Internacional Humanitario es su aplicación efectiva y su respeto por las partes en un conflicto armado, por ello es vital actuar para promover tanto la aceptación universal de los instrumentos que conforman este derecho como un mejor conocimiento, comprensión y por ende respeto de los principios que lo fundamentan y de las normas que contienen dichos instrumentos.

Antes de concluir quisiera hacer énfasis en la excelente labor que la “Comisión Nacional de Desminado”, en conjunto con el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Nicaragua han realizado, ya que Nicaragua es el único país en el Hemisferio que ha cumplido con las labores de educación, prevención y reinserción de las víctimas de minas, tal vez en menor escala a lo planificado, pero no deja de ser el único país y así lo ha reconocido la Comunidad Internacional. Nicaragua como país tiene una meta y un compromiso con la Comunidad Internacional, como suscriptores de la Convención de Ottawa de concluir el desminado en el año 2005.

## **ENTREVISTAS**

- Señor Guy Nury, representante Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua.
- Señor Claudio Baranzini, Delegado Adjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja para Centroamérica y el Caribe.
- Doctora Tatiana Flores, Asesora Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja.
- Doctora Ligia Margarita Gurdían, Asesora jurídica de la Comisión Nacional para el Derecho Internacional en Nicaragua.

## **BIBLIOGRAFIA**

- Berman, Paul. "Servicio de Asesoramiento del CICR en Derecho Internacional Humanitario: el reto de la aplicación nacional". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 135, mayo-junio de 1996, pp. 365-374.
- Bolaño Geyer, Enrique. "Palabras del Señor Presidente de la República de Nicaragua". Ingeniero Enrique Bolaño Geyer. En ocasión de voladura de minas antipersonal y declaración del departamento de Chinandega como "Territorio libre de minas". Villanueva-Chinandega, 25 de abril del 2002.

- Bory, Françoise. Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, Artículo 7. Génesis y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. CICR, Ginebra, diciembre 1982.
- Bouvier, Antoine "La protección del medio ambiente en período de conflicto armado", Revista Internacional de la Cruz Roja N° 108, noviembre-diciembre de 1991, pp. 603-616.
- Boutruche, Théo. "El estatuto del agua en el Derecho Internacional Humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 140, pp. 887 - 916.
- Brotóns, Remiro Antonio. "Derecho Internacional". Editorial McGraw Hill/Interamericana de España, S.A. 1977.
- Bugnion, François. El emblema de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 95, septiembre-octubre de 1989, pp. 430-441.
- Bugnion, François "Guerra justa, guerra de agresión y derecho internacional humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre de 2002.
- Bugnion, François. Droit de Genève et Droit de la Haye. Publicación CICR, Suiza. 2001.901 - 922.
- Caldera, Norman. Conferencia "Corte Penal Internacional". Alocución del Ministro de Relaciones Exteriores, Managua, 29 de agosto del 2002.
- CICR "Publicación del Instituto Internacional de Derechos del Hombre". CICR, Ginebra 1995.



- CICR "Ley No. 418 para la Protección y Uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja". Managua, 15 de marzo del año 2002.
- CICR "Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949". Publicación CICR, Ginebra 1998.
- CICR "Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949". CICR, Ginebra 1977, Edición revisada en 1996. Publicación CICR, Ginebra 1998.
- CICR "El emblema dos usos..." Bolsilibro elaborado por la Delegación Regional CICR Guatemala.
- CICR Declaración de San Petersburgo, de 1868, con el objetivo de prohibir el uso de determinados objetivos en tiempo de guerra, tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades. Publicación CICR, 1996.
- CICR "Derecho Internacional Humanitario, repuestas a sus preguntas", página 8. Publicación CICR, 1998.
- CICR. Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Tokio en 1934. Tomado de "Comentario del protocolo del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949". CICR . Plaza y Janes, editores Colombia SA, noviembre de 1998.
- CICR "Normas Fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos Adicionales". Publicación CICR, Ginebra, 1983.
- CICR "Instituto Interamericano de Derechos Humanos", páginas 8, 9 y 10. San José, Costa Rica, 1984.

- CICR "Normas Fundamentales del Derecho Internacional Humanitario Aplicables a los Conflictos Armados". Suiza. 1979.
- CICR "Protocolo III sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias (CCW PIII), Ginebra, 10 de Octubre de 1980".
- CICR "Participación en los tratados de relevancia para el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y su aplicación nacional. Avances registrados y actividades desarrolladas en los países y organizaciones de América en el 2002". Documento preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la información de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, marzo 2003.
- CICR "Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja", aprobados en octubre de 1986 por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra. El texto de estos Estatutos se publicó en la Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero de 1987, N° 79, p. 25 y ss.
- CICR "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 143, pp. 599-616.
- CICR "La Aplicación Nacional del Derecho Internacional Humanitario y de las Convenciones Interamericanas Relacionadas". Memoria de la

Conferencia de Expertos Gubernamentales, San José, Costa Rica, 6 - 8 de marzo de 2001.

- CICR "El agua en los conflictos armados". Publicación CICR, Ginebra 19. Ref. 0591.
- Cockayne, James "El Islam y el derecho internacional humanitario: del choque al diálogo entre civilizaciones". Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre de 2002.
- Código de Lieber, 24 de abril 1863, Instrucciones para la Gobernación de los ejércitos de los Estados Unidos en campaña. Disposición según la cual los tratados eran aplicables solamente cuando todos los beligerantes son partes en los mismos.
- Cuadra Lacayo, Gral. Joaquín "Derecho Internacional Humanitario y Guerra Irregular". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 840, 31 diciembre 2000.
- De Groot (Grocio), Hugo "Prolegómeno De Jure Belli Ac Pacis" (Sobre el Derecho de la Guerra y de la Paz). Indianapolis: Bobs- Merrill, 1975, (1625), página 15.
- Doswald-Beck, Louise y Sylvain Vité "Derecho Internacional Humanitario y Derecho de los Derechos Humanos". Revista Internacional de la Cruz Roja No 116, marzo-abril de 1993, pp. 99-126
- Dufour, Geneviève "¿Existe verdaderamente la defensa de las órdenes superiores?". Revista Internacional de la Cruz Roja, junio de 2001.

- Dunant, Henry. "Un Recuerdo de Solferino", 1ª edición Ginebra 1862. Publicación CICR, Ginebra 1995, páginas 113 y 124.
- Dutli, María Teresa y Cristina Pellandini "El Comité Internacional de la Cruz Roja y la aplicación del sistema de represión de las infracciones de las normas del derecho internacional humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja, mayo-junio de 1994, N° 123, pp. 241-256.
- Forster, Jacques (Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja) "Intervención Humanitaria" y Derecho Internacional Humanitario". Discurso inaugural del Noveno Seminario Anual de DIH para Diplomáticos acreditados en las Naciones Unidas, marzo de 2000.
- Fuentes Destarac, Mario "Estatuto de la Corte Penal Internacional: ¿Por qué adherirse?".
- Gaceta. Decreto No. 84-98 para la Creación de la Comisión Nacional de Desminado. Gaceta N° 236, Managua, sábado 5 de diciembre de 1998.
- Gaceta. Decreto No. 54-99 para la Creación de la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Gaceta N°. 81, Managua, martes 4 de mayo de 1999.
- Gabor Rona, "El privilegio del CICR de no testificar: confidencialidad en la acción". Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo de 2002.
- Galand Renaud y François Delooz, "El artículo 31, párrafo 1, apartado c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional: ¿cuestionamiento de los

logros del derecho internacional humanitario?". Revista Internacional de la Cruz Roja, junio de 2001, N° 842 pp 533 ^ 538.

- Garraway, Charles "Las órdenes superiores y la Corte Penal Internacional: justicia impartida o justicia denegada". Revista Internacional de la Cruz Roja, diciembre de 1999.
- Gasser, Hans-Peter "El Derecho Internacional Humanitario y la protección de las víctimas de la guerra".
- Gasser, Hans-Peter "Actos de terror, "terrorismo" y Derecho Internacional Humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre de 2002.
- Graditzky, Thomas "La responsabilidad penal por violación del Derecho Internacional Humanitario aplicable en situación de conflicto armado no internacional". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 145, marzo de 1998, pp. 31-61.
- Greppi, Eduardo "La evolución de la noción de responsabilidad penal individual en el derecho internacional". Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre de 1999.
- Haug, Hans "La neutralidad como Principio Fundamental de la Cruz Roja". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 138, noviembre-diciembre de 1996, pp. 670-673.
- Jeannet, Stéphane "Testimonio de los delegados del CICR ante la Corte Penal Internacional". Revista Internacional de la Cruz Roja, diciembre de 2000.

- Jeannet, Stéphane y Mermet, Joël "La implicación de los niños en los conflictos armados". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 145, marzo de 1998, pp. 115-136.
- Keith Hall, Christopher "La primera propuesta de creación de un tribunal penal internacional permanente". Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo de 1998.
- Kolb, Robert "Origen de la pareja terminológica jus ad bellum / jus in bello". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 143, pp. 589-598.
- Kolb, Robert "Origen de la pareja terminológica jus ad bellum / jus in bello". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 143, pp. 589-598.
- Lavoyer, Jean-Philippe "Legislación nacional relativa al uso y a la protección del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 136, julio-agosto de 1996, pp. 519-522.
- Moratiel Villa, Sergio "Filosofía del derecho internacional: Suárez, Grocio y epígonos". Revista Internacional de la Cruz Roja No 143, pp. 575-588.
- Moynier, Gustave fundador del CICR. Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, Resolución Artículo 8, Votos c y d.
- Naqvi, Yasmin "Estatuto de prisionero de guerra: "casos de duda ". Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre de 2002.
- ONU "Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles"

(ENMOD) (10 de diciembre de 1976, Asamblea General de la ONU, resolución 31/72).

- ONU "El Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos". Revista informativa de la ONU N° 13.
- ONU "Cinco años después de Río", Declaración escrita del CICR, Asamblea General de las Naciones Unidas, Decimonoveno período extraordinario de sesiones 23-27 de junio de 1997.
- ONU "Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados". Resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de 1968.
- ONU "El Derecho Internacional Humanitario y Los Derechos Humanos". Folleto Informativo N° 13.
- ONU "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 18 de julio de 1998. (incluye las modificaciones aportadas por los Estados y las Naciones Unidas durante los años 1999 y 2000).
- Palwankar, Umesh "Medidas que pueden tomar los Estados para cumplir su obligación de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja No 121, enero-febrero de 1994, pp. 10-27.
- Pellandini, Cristina "La Corte Penal Internacional Posición y cometido del CICR". Revista CICR Región - América Central y Caribe - N° 4.

- Pfanner, Toni "Institución de un tribunal penal internacional permanente. Expectativas del CICR con respecto a la Conferencia Diplomática de Roma". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 145, marzo de 1998, pp. 23-30.
- Pictet, Jean. "Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional". Tomado de "Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios". CICR - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998.
- Pictet, Jean. "Comentario sobre los principios fundamentales de la Cruz Roja , Introducción". Publicación CICR, año 1998.
- Pictet, Jean. "Comentario del Protocolo adicional II - Introducción general al comentario de los Protocolos adicionales I y II". Tomado de "Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios". CICR - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998".



- Pictet, Jean. "Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario, Introducción". Texto tomado de un curso impartido por Jean Pictet, el año 1982, en la Universidad de Estrasburgo, Francia.
- Pictet, Jean. "Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario". Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1986.
- Pictet, Jean. "La formación del derecho internacional humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 846.
- Pictet, Jean: "Los principios fundamentales de la Cruz Roja". Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1979.
- Plattner, Denise "La neutralidad del CICR y la neutralidad de la asistencia humanitaria". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 134, marzo-abril de 1996, pp. 173-193.
- Plattner, Denise "La asistencia a la población civil en el Derecho Internacional Humanitario: evolución y actualidad". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 111, mayo-junio de 1992, pp. 267-282.
- Pustogarov, "Fiódorovich Martens (1845-1909), humanista de los tiempos modernos". Revista Internacional de la Cruz Roja, N° 135, mayo-junio de 1996, pp. 324-339.
- Roberge, Marie-Claude "El nuevo Tribunal Penal Internacional. Evaluación preliminar". Revista Internacional de la Cruz Roja, diciembre de 1998.
- Rousseau, Jean Jacques (1712 -1778), extracto de "El Contrato Social",

1ª edición, libro I, capítulo 4, año 1762.

- Sandoz , Yves, Jefe de la delegación del CICR, Alocución en la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre la creación de una Corte Penal Internacional. Roma, 18 de julio de 1998.
- Sandoz Yves, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann. "Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949". Editado por Comité Internacional de la Cruz Roja, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1986, 1647 pp., p. XXVII.
- Sandoz, Yves . "Derecho o deber de injerencia, derecho de asistencia: ¿de qué hablamos?". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 111, mayo-junio de 1992, pp. 231-244.
- Sandoz, Yves. "¿Existe un «derecho de injerencia» en el ámbito de la información? El derecho a la información desde la perspectiva del derecho internacional humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 148, diciembre de 1998, pp. 679-689.
- Schindler, Dietrich "El Comité Internacional de la Cruz Roja y los derechos humanos ". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 31, enero-febrero de 1979, pp. 3-15.
- Solera, Oscar "Jurisdicción complementaria y justicia penal internacional". Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo de 2002.
- Sommaruga, Cornelio, Presidente del CICR. Alocución. Roma, 16 de junio de 1998.

- Swinarski, Christophe "Principales nociones e institutos del DIH como sistema de protección de la persona humana". Capítulo II.
- Swinarsiki, Christopher, Asesor jurídico del CICR, "Introducción al Derecho Internacional Humanitario".
- Ticehurst, Rupert "La cláusula de Martens y el derecho de los conflictos armados". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 140, pp. 131.
- UNESCO "El Derecho Internacional Humanitario", página 2, Estrasburgo, 28 de junio-28 de julio 1989.
- Varios. Constitución Política de Nicaragua.
- Wijnkoop, Jurg Van "Acciones penales contra presuntos criminales de guerra en Suiza". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 136, julio-agosto de 1996, pp. 533-536.
- Verhaegen, Jacques "La negativa a obedecer órdenes manifiestamente criminales: A favor de un procedimiento accesible para los subordinados". Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo de 2002.
- Westphal, Florian "Treinta millones de minas que nunca matarán o mutilarán a un civil". CICR, Comunicado de prensa, 28 febrero 2003.
- Zemmal, Ameer "Protección del agua en período de conflicto armado". Revista Internacional de la Cruz Roja N° 131, septiembre-octubre de 1995, pp. 600-615.

## **INTERNET**

- <http://www.icrc.org/Spa/dih>.
- <http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/7337/>

# ANEXOS

Anexo N°1: Tratados y textos relativos al DIH  
(Derecho de Ginebra y Derecho de La Haya)

Anexo N°2: Cuadro de Estados Partes  
(Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales)

Anexo N°3: Artículo 3 comun  
(a los cuatro Convenios de Ginebra)

Anexo N°4: Ley N°418

Anexo N°5: Artículo 90 del Protocolo I

Anexo N°6: Gaceta N° 81

Anexo N°7: Gaceta N° 236

## **Anexo N°1: Tratados y textos relativos al DIH (Derecho de Ginebra y Derecho de La Haya)**

- **Resoluciones y votos de la Conferencia Internacional de Ginebra**, 26-29 de octubre de 1863.
- **Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña**. Ginebra, 22 de agosto de 1864.
- **Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra (St. Petersburg)**. San Petersburgo, 11 de diciembre de 1868.
- **Declaración prohibiendo el empleo de las balas que se hinchán o aplastan fácilmente en el cuerpo humano (H.Decl)**. La Haya, 29 de julio de 1899.
- **Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV)** con su Anexo: **Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R)**. La Haya, 18 de octubre de 1907.
- **Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre (H.V)**. La Haya, 18 de octubre de 1907.
- **Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias neutrales en la guerra marítima (H.XIII)**. La Haya, 18 de octubre de 1907.
- **Convención relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto (H.VIII)**. La Haya, 18 de octubre de 1907.
- **Convención relativa a ciertas restricciones en cuanto al ejercicio de derecho de captura en la guerra marítima (H.XI)**. La Haya, 18 de octubre de 1907.
- **Declaración relativa al derecho de la guerra marítima (London Decl.)**. Londres, 26 de febrero de 1909 (no ratificada por ningún signatario).
- **Reglas de la guerra aérea (H.AW)**. La Haya, diciembre de 1922 - febrero de 1923 (no fueron aprobadas con carácter obligatorio).
- **Protocolo sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos (G.BC)**. Ginebra, 17 de junio de 1925.
- **Convención de neutralidad marítima (Havana)**. La Habana, 20 de febrero de 1928.

- **Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los monumentos históricos (Washington)**. (Pacto Roerich). Washington, 15 de abril de 1935.
- **Acta que establece las reglas que deben observar los submarinos en tiempo de guerra respecto a buques mercantes (London PV)**. Londres, 6 de noviembre de 1936.
- **Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Nuremberg**. Resolución 95 (I) del 11 de diciembre de 1946.
- **Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio**. 9 de diciembre de 1948.
- **Convenio de Ginebra (I) para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña**. 12 de agosto de 1949.
- **Convenio de Ginebra (II) para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar**. 12 de agosto de 1949.
- **Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra**. 12 de agosto de 1949.
- **Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra**. 12 de agosto de 1949.
- **Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949** y **Comentario del artículo** (bajo la dirección de Jean Pictet).
- **Resoluciones de la Conferencia Diplomática de Ginebra**. Ginebra, 12 de agosto de 1949.
- **Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg**. 1950.
- **Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (H.CP)**. La Haya, 14 de mayo de 1954.
- **Reglamento para la aplicación de la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (H.CP.R)**. La Haya, 14 de mayo de 1954.
- **Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (H.CP.P)**. La Haya, 14 de mayo de 1954.

- Resoluciones de la Conferencia Intergubernamental sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. La Haya, 14 de mayo de 1954.
- Acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. La Haya, 14 de mayo de 1954.
- Respecto de los derechos humanos en los conflictos armados. Resolución XXIII adoptada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Teherán, 12 de mayo de 1968.
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. 26 de noviembre de 1968.
- Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. Resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de diciembre de 1968.
- Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción. Abierta a la firma en Londres, Washington y Moscú el 10 de abril de 1972.
- Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD). 10 de diciembre de 1976.
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). 8 de junio de 1977.
- Anexo I (Protocolo I): Reglamento relativo a la identificación. 8 de junio de 1977.
- Anexo I (Protocolo I): Reglamento relativo a la identificación (según fue enmendado el 23 de noviembre de 1993).
- Anexo II (Protocolo I): Tarjeta de identidad de periodista en misión peligrosa. 8 de junio de 1977.
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). 8 de junio de 1977.
- Comentario del Protocolo adicional II (por Sylvie-Stoyanka Junod).



- Resoluciones de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados. Ginebra, junio de 1977.
- Acta final de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974-1977 (Pasajes). Ginebra, 10 de junio de 1977.
- Resolución sobre los sistemas de armas de pequeño calibre. Ginebra, 28 de septiembre de 1979.
- Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW). Ginebra, 10 de octubre de 1980.
- Protocolo sobre fragmentos no localizables (Protocolo I) (CCW.P.I). Ginebra, 10 de octubre de 1980.
- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampas y otros artefactos (Protocolo II) (CCW.P.II). Ginebra, 10 de octubre de 1980.
- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III) (CCW.P.III). Ginebra, 10 de octubre de 1980.
- Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Ginebra, 10 de octubre de 1980.
- Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989.
- Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. 4 de diciembre de 1989.
- Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. París, 13 de enero de 1993. Anexo sobre sustancias químicas.
- Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991. 25 de mayo de 1993.
- Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (San Remo Manual). Aprobado el 12 de Junio de 1994.
- Estatuto del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del

derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 8 de noviembre de 1994.

- Protocolo sobre armas láser cegadoras (Protocolo IV) (CCW.P.IV). Viena, 13 de octubre de 1995.
  - Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996. (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996).
  - Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Oslo, 18 de septiembre de 1997.
  - Resolución 1165 (1998) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la enmienda de los artículos 10, 11 y 12 del Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda. 30 de abril de 1998.
  - Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Roma, 17 de julio de 1998.
  - Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. La Haya, 26 de marzo de 1999
  - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. New York, 25 de mayo de 2000
-

## Anexo N°2: Cuadro de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977: ratificaciones, adhesiones y sucesiones y comentarios

La presente lista se basa en las informaciones recibidas por parte del [Departamento Federal de Asuntos Exteriores](#) de la Confederación Suiza, que es depositario de dichos Convenios.

Tomado de pagina Web CICR: [www.icrc.org/spa](http://www.icrc.org/spa)

Ultima modificación : 03.06.2003

	CONVENIOS DE GINEBRA			PROTOCOL O I				PROTOCOL O II		
PAÍS	R/A/S		R/D	R/A/S		R/D	D90	R/A/S		R/D
Afganistán	26.09.1956.	R	-	-	-	-	-	-	-	-
Albania	27.05.1957.	R	X	16.07.1993.	A	-	-	16.07.1993.	A	-
Alemania	03.09.1954.	A	X	14.02.1991.	R	X	14.02.1991.	14.02.1991.	R	X
Andorra	17.09.1993.	A		-	-	-	-	-	-	-
Angola	20.09.1984.	A	X	20.09.1984.	A	X	-	-	-	-
Antigua y Barbuda	06.10.1986.	S	-	06.10.1986.	A	-	-	06.10.1986.	A	-
Arabia Saudita	18.05.1963.	A	-	21.08.1987.	A	X	-	28.11.2001	A	-
Argelia	20.06.1960.;03. 07.1962.	A	-	16.08.1989.	A	X	16.08.1989.	16.08.1989.	A	-
Argentina	18.09.1956.	R	-	26.11.1986.	A	X	11.10.1996.	26.11.1986.	A	X
Armenia	07.06.1993.	A	-	07.06.1993.	A	-	-	07.06.1993.	A	-
Australia	14.10.1958.	R	X	21.06.1991.	R	X	23.09.1992.	21.06.1991.	R	-
Austria	27.08.1953.	R	-	13.08.1982.	R	X	13.08.1982.	13.08.1982.	R	X
Azerbaiyán	01.06.1993.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahamas	11.07.1975.	S	-	10.04.1980.	A	-	-	10.04.1980.	A	-
Bahrein	30.11.1971.	A	-	30.10.1986.	A	-	-	30.10.1986.	A	-
Bangladesh	04.04.1972.	S	X	08.09.1980.	A	-	-	08.09.1980.	A	-
Barbados	10.09.1968.	S	X	19.02.1990.	A	-	-	19.02.1990.	A	-
Belarús	03.08.1954.	R		23.10.1989.	R	-	23.10.1989.	23.10.1989.	R	-
Bélgica	03.09.1952.	R	-	20.05.1986.	R	X	27.03.1987.	20.05.1986.	R	-
Belice	29.06.1984.	A	-	29.06.1984.	A	-	-	29.06.1984.	A	-
Benin	14.12.1961.	S	-	28.05.1986.	A	-	-	28.05.1986.	A	-
Bhután	10.01.1991.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	10.12.1976.	R	-	08.12.1983.	A	-	10.08.1992.	08.12.1983.	A	-
Bosnia-Herzegovina	31.12.1992.	S	-	31.12.1992.	S	-	31.12.1992.	31.12.1992.	S	-
Botswana	29.03.1968.	A	-	23.05.1979.	A	-	-	23.05.1979.	A	-
Brasil	29.06.1957.	R	-	05.05.1992.	A	-	23.11.1993.	05.05.1992.	A	-
Brunei Darussalam	14.10.1991.	A	-	14.10.1991.	A	-	-	14.10.1991.	A	-
Bulgaria	22.07.1954.	R	-	26.09.1989.	R	-	09.05.1994.	26.09.1989.	R	-
Burkina Faso	07.11.1961.	S	-	20.10.1987.	R	-	-	20.10.1987.	R	-
Burundi	27.12.1971.	S	-	10.06.1993.	A	-	-	10.06.1993.	A	-
Cabo Verde	11.05.1984.	A	-	16.03.1995.	A	-	16.03.1995.	16.03.1995.	A	-

Camboya	08.12.1958.	A	-	14.01.1998	A	-	-	14.01.1998	A	-
Camerún	16.09.1963.	S	-	16.03.1984.	A	-	-	16.03.1984.	A	-
Canadá	14.05.1965.	R	-	20.11.1990.	R	X	20.11.1990.	20.11.1990.	R	X
Chad	05.08.1970.	A	-	17.01.1997	A	-	-	17.01.1997	A	-
Chile	12.10.1950.	R	-	24.04.1991.	R	-	24.04.1991.	24.04.1991.	R	-
China	28.12.1956.	R	X	14.09.1983.	A	X	-	14.09.1983.	A	-
Chipre	23.05.1962.	A	-	01.06.1979.	R	-	14.10.2002	18.03.1996.	A	-
Colombia	08.11.1961.	R	-	01.09.1993.	A	-	17.04.1996.	14.08.1995.	A	-
Comoras	21.11.1985.	A	-	21.11.1985.	A	-	-	21.11.1985.	A	-
Congo	04.02.1967.	S	-	10.11.1983.	A	-	-	10.11.1983.	A	-
Congo (Rep. Dem.)	24.02.1961.	S	-	03.06.1982.	A	-	12.12.2002	12.12.2002	A	-
Corea (República de)	16.08.1966.	A	X	15.01.1982.	R	X	-	15.01.1982.	R	-
Corea (Rep.Pop.Dem.)	27.08.1957.	A	X	09.03.1988.	A	-	-	-	-	-
Costa Rica	15.10.1969.	A	-	15.12.1983.	A	-	02.12.1999	15.12.1983.	A	-
Côte d'Ivoire	28.12.1961.	S	-	20.09.1989.	R	-	-	20.09.1989.	R	-
Croacia	11.05.1992.	S	-	11.05.1992.	S	-	11.05.1992.	11.05.1992.	S	-
Cuba	15.04.1954.	R	-	25.11.1982.	A	-	-	23.06.1999	A	-
Dinamarca	27.06.1951.	R	-	17.06.1982.	R	X	17.06.1982.	17.06.1982.	R	-
Djibouti	06.03.1978.	S	-	08.04.1991.	A	-	-	08.04.1991.	A	-
Dominica	28.09.1981.	S	-	25.04.1996.	A	-	-	25.04.1996.	A	-
Ecuador	11.08.1954.	R	-	10.04.1979.	R	-	-	10.04.1979.	R	-

Egipto	10.11.1952.	R	-	09.10.1992.	R	X	-	09.10.1992.	R	X
El Salvador	17.06.1953.	R	-	23.11.1978.	R	-	-	23.11.1978.	R	

Emiratos Arabes Unidos	10.05.1972.	A	-	09.03.1983.	A	X	06.03.1992.	09.03.1983.	A	X
Eritrea	14.08.2000	A								
Eslovenia	26.03.1992.	S	-	26.03.1992.	S	-	26.03.1992.	26.03.1992.	S	-
España	04.08.1952.	R	-	21.04.1989.	R	X	21.04.1989.	21.04.1989.	R	-
Estados Unidos de América	02.08.1955.	R	X	-	-	-	-	-	-	-
Estonia	18.01.1993.	A	-	18.01.1993.	A	-	-	18.01.1993.	A	-
Etiopía	02.10.1969.	R	-	08.04.1994.	A	-	-	08.04.1994.	A	-
Fiji	09.08.1971.	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Filipinas	06.10.1952.	R	-	-	-	-	-	11.12.1986.	A	-
Finlandia	22.02.1955.	R	-	07.08.1980.	R	X	07.08.1980.	07.08.1980.	R	-
Francia	28.06.1951.	R	-	11.04.2001	A	X	-	24.02.1984.	A	X
Gabón	26.02.1965.	S	-	08.04.1980.	A	-	-	08.04.1980.	A	-
Gambia	20.10.1966.	S	-	12.01.1989.	A	-	-	12.01.1989.	A	-
Georgia	14.09.1993.	A	-	14.09.1993.	A	-	-	14.09.1993.	A	-
Ghana	02.08.1958.	A	-	28.02.1978.	R	-	-	28.02.1978.	R	-
Granada	13.04.1981.	S	-	23.09.1998	A	-	-	23.09.1998	A	-
Grecia	05.06.1956.	R	-	31.03.1989.	R	-	04.02.1998	15.02.1993.	A	-
Guatemala	14.05.1952.	R	-	19.10.1987.	R	-	-	19.10.1987.	R	-
Guinea	11.07.1984.	A	-	11.07.1984.	A	-	20.12.1993.	11.07.1984.	A	-
Guinea-Bissau	21.02.1974.	A	X	21.10.1986.	A	-	-	21.10.1986.	A	-

Guinea Ecuatorial	24.07.1986.	A	-	24.07.1986.	A	-	-	24.07.1986.	A	-
Guyana	22.07.1968.	S	-	18.01.1988.	A	-	-	18.01.1988.	A	-
Haití	11.04.1957.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Honduras	31.12.1965.	A	-	16.02.1995.	R	-	-	16.02.1995.	R	-
Hungría	03.08.1954.	R	-	12.04.1989.	R	-	23.09.1991.	12.04.1989.	R	-
India	09.11.1950.	R	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia	30.09.1958.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Irak	14.02.1956.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Irán	20.02.1957.	R	X	-	-	-	-	-	-	-
Irlanda	27.09.1962.	R	-	17.05.1999	R	X	17.05.1999	17.05.1999	R	X

Islandia	10.08.1965.	A	-	10.04.1987.	R	X	10.04.1987.	10.04.1987.	R	-
Islas Cook	11.06.2001	S	-	07.05.2002	A	-	07.05.2002	07.05.2002	A	-
Israel	06.07.1951.	R	X	-	-	-	-	-	-	-
Italia	17.12.1951.	R	-	27.02.1986.	R	X	27.02.1986.	27.02.1986.	R	-
Jamahiriyá Árabe Libia	22.05.1956.	A	-	07.06.1978.	A	-	-	07.06.1978.	A	-
Jamaica	20.07.1964.	S	-	29.07.1986.	A	-	-	29.07.1986.	A	-
Japón	21.04.1953.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Jordania	29.05.1951.	A	-	01.05.1979.	R	-	-	01.05.1979.	R	-
Kazajistán	05.05.1992.	S	-	05.05.1992.	S	-	-	05.05.1992.	S	-
Kenya	20.09.1966.	A	-	23.02.1999	A	-	-	23.02.1999	A	-
Kirguizistán	18.09.1992.	S	-	18.09.1992.	S	-	-	18.09.1992.	S	-
Kiribati	05.01.1989.	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuwait	02.09.1967.	A	X	17.01.1985.	A	-	-	17.01.1985.	A	-
Lao (Rep. Dem. Pop.)	29.10.1956.	A	-	18.11.1980.	R	-	30.01.1998	18.11.1980.	R	-
Lesoto	20.05.1968.	S	-	20.05.1994.	A	-	--	20.05.1994.	A	-
Letonia	24.12.1991.	A	-	24.12.1991.	A	-	-	24.12.1991.	A	-
Líbano	10.04.1951.	R	-	23.07.1997	A	-	-	23.07.1997	A	-
Liberia	29.03.1954.	A	-	30.06.1988.	A	-	-	30.06.1988.	A	-
Liechtenstein	21.09.1950.	R	-	10.08.1989.	R	X	10.08.1989.	10.08.1989.	R	X

Lituania	03.10.1996.	A	-	13.07.2000	A	-	13.07.2000	13.07.2000	A	-
Luxemburgo	01.07.1953.	R	-	29.08.1989.	R	-	12.05.1993.	29.08.1989.	R	-
Macedonia	01.09.1993.	S	X	01.09.1993.	S	X	01.09.1993.	01.09.1993.	S	-
Madagascar	13.07.1963.	S	-	08.05.1992.	R	-	27.07.1993.	08.05.1992.	R	-
Malasia	24.08.1962.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Malawi	05.01.1968.	A	-	07.10.1991.	A	-	-	07.10.1991.	A	-
Maldivas	18.06.1991.	A	-	03.09.1991.	A	-	-	03.09.1991.	A	-
Mali	24.05.1965.	A	-	08.02.1989.	A	-	09.05.2003	08.02.1989.	A	-
Malta	22.08.1968.	S	-	17.04.1989.	A	X	17.04.1989.	17.04.1989.	A	X
Marruecos	26.07.1956.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Mauricio	18.08.1970.	S	-	22.03.1982.	A	-	-	22.03.1982.	A	-
Mauritania	30.10.1962.	S	-	14.03.1980.	A	-	-	14.03.1980.	A	-
México	29.10.1952.	R	-	10.03.1983.	A	-	-	-	-	-
Micronesia	19.09.1995.	A	-	19.09.1995.	A	-	-	19.09.1995.	A	-
Mónaco	05.07.1950.	R	-	07.01.2000	A	-	-	07.01.2000	A	-
Mongolia	20.12.1958.	A	-	06.12.1995.	R	X	06.12.1995.	06.12.1995.	R	-
Mozambique	14.03.1983.	A	-	14.03.1983.	A	-	-	12.11.2002	A	-

Myanmar	25.08.1992.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Namibia	22.08.1991.	S	-	17.06.1994.	A	-	21.07.1994.	17.06.1994.	A	-
Nepal	07.02.1964.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicaragua	17.12.1953.	R	-	19.07.1999	R	-	-	19.07.1999	R	-
Níger	21.04.1964.	S	-	08.06.1979.	R	-	-	08.06.1979.	R	-
Nigeria	09.06.1961.	S	-	10.10.1988.	A	-	-	10.10.1988.	A	-
Noruega	03.08.1951.	R	-	14.12.1981.	R	-	14.12.1981.	14.12.1981.	R	-
Nueva Zelandia	02.05.1959.	R	X	08.02.1988.	R	X	08.02.1988.	08.02.1988.	R	-
Omán	31.01.1974.	A	-	29.03.1984.	A	X	-	29.03.1984.	A	X
Países Bajos	03.08.1954.	R	-	26.06.1987.	R	X	26.06.1987.	26.06.1987.	R	-
Pakistán	12.06.1951.	R	X	-	-	-	-	-	-	-
Palau	25.06.1996.	A	-	25.06.1996.	A	-	-	25.06.1996.	A	-
Panamá	10.02.1956.	A	-	18.09.1995.	R	-	26.10.1999	18.09.1995.	R	-
Papua Nueva Guinea	26.05.1976.	S	-	-	-	-	-	-	-	--
Paraguay	23.10.1961.	R	-	30.11.1990.	A	-	30.01.1998	30.11.1990.	A	-
Perú	15.02.1956.	R	-	14.07.1989.	R	-	-	14.07.1989.	R	-
Polonia	26.11.1954.	R	X	23.10.1991.	R	-	02.10.1992.	23.10.1991.	R	--
Portugal	14.03.1961.	R	X	27.05.1992.	R	-	01.07.1994.	27.05.1992.	R	--
Qatar	15.10.1975.	A	-	05.04.1988.	A	X	24.09.1991	-	-	-
Reino Unido	23.09.1957.	R	X	28.01.1998	R	X	17.05.1999	28.01.1998	R	-
República Árabe Siria	02.11.1953.	R	-	14.11.1983.	A	X	-	-	-	-

República Centroafricana	01.08.1966.	S	-	17.07.1984.	A	-	-	17.07.1984.	A	--
República Checa	05.02.1993.	S	X	05.02.1993.	S	-	02.05.1995.	05.02.1993.	S	
República de Moldova	24.05.1993.	A	-	24.05.1993.	A	-	-	24.05.1993.	A	-
República Dominicana	22.01.1958.	A	-	26.05.1994.	A	-	-	26.05.1994.	A	-

República Eslovaca	02.04.1993.	S	-	02.04.1993.	S	-	13.03.1995.	02.04.1993.	S	-
Rumania	01.06.1954.	R		21.06.1990.	R	-	31.05.1995.	21.06.1990.	R	-
Rusia (Fed. de)	10.05.1954.	R	X	29.09.1989.	R	X	29.09.1989.	29.09.1989.	R	X
Rwanda	05.05.1964.	S	-	19.11.1984.	A	-	08.07.1993.	19.11.1984.	A	-
Saint Kitts y Nevis	14.02.1986.	S	-	14.02.1986.	A	-	-	14.02.1986.	A	-
Salomón (Islas)	06.07.1981.	S	-	19.09.1988.	A	-	-	19.09.1988.	A	-
Samoa	23.08.1984.	S	-	23.08.1984.	A	-	-	23.08.1984.	A	-
San Marino	29.08.1953.	A	-	05.04.1994.	R	-	-	05.04.1994.	R	-
San Vicente Granadinas	01.04.1981.	A	-	08.04.1983.	A	-	-	08.04.1983.	A	-
Santa Lucía	18.09.1981.	S	-	07.10.1982.	A	-	-	07.10.1982.	A	-
Santa Sede	22.02.1951.	R	-	21.11.1985.	R	X	-	21.11.1985.	R	X
Santo Tomé y Príncipe	21.05.1976.	A	-	05.07.1996.	A	-	-	05.07.1996.	A	-
Senegal	18.05.1963.	S	-	07.05.1985.	R	-	-	07.05.1985.	R	-

Seychelles	08.11.1984.	A	-	08.11.1984.	A	-	22.05.1992.	08.11.1984.	A	-
Sierra Leona	10.06.1965.	S	-	21.10.1986.	A	-	-	21.10.1986.	A	-
Singapur	27.04.1973.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Somalia	12.07.1962.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Sri Lanka	28.02.1959.	R	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	31.03.1952.	A	-	21.11.1995.	A	-	-	21.11.1995.	A	-
Sudán	23.09.1957.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	28.12.1953.	R	-	31.08.1979.	R	X	31.08.1979.	31.08.1979.	R	-
Suiza	31.03.1950.	R	-	17.02.1982.	R	X	17.02.1982.	17.02.1982.	R	-
Suriname	13.10.1976.	S	X	16.12.1985.	A	-	-	16.12.1985.	A	-

Swazilandia	28.06.1973.	A	-	02.11.1995.	A	-	-	02.11.1995.	A	-
Tailandia	29.12.1954.	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania (Rep.-Unida)	12.12.1962.	S	-	15.02.1983.	A	-	-	15.02.1983.	A	-

Tayikistán	13.01.1993.	S	-	13.01.1993.	S	-	10.09.1997	13.01.1993.	S	-
------------	-------------	---	---	-------------	---	---	------------	-------------	---	---

Timor Oriental	28.05.2003	A	-							
----------------	------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Togo	06.01.1962.	S		21.06.1984.	R	-	21.11.1991.	21.06.1984.	R	-
Tonga	13.04.1978.	S	-	20.01.2003	A	-	20.01.2003	20.01.2003	A	
Trinidad y Tobago	24.09.1963.	A	-	20.07.2001	A	-	20.07.2001	20.07.2001	A	-
Túnez	04.05.1957.	A	-	09.08.979.	R	-	-	09.08.1979.	R	-
Turkmenistán	10.04.1992.	S	-	10.04.1992.	S	-	-	10.04.1992.	S	-
Turquía	10.02.1954.	R	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuvalu	19.02.1981.	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucrania	03.08.1954.	R	X	25.01.1990.	R	-	25.01.1990.	25.01.1990.	R	-
Uganda	18.05.1964.	A	-	13.03.1991.	A	-	-	13.03.1991.	A	-
Uruguay	05.03.1969.	R	X	13.12.1985.	A	-	17.07.1990.	13.12.1985.	A	-
Uzbekistán	08.10.1993.	A	-	08.10.1993.	A	-	-	08.10.1993.	A	-
Vanuatu	27.10.1982.	A	-	28.02.1985.	A	-	-	28.02.1985.	A	-
Venezuela	13.02.1956.	R	-	23.07.1998	A	-	-	23.07.1998	A	-
Viet Nam	28.06.1957.	A	X	19.10.1981.	R	-	-	-	-	-

Yemen	16.07.1970.	A	X	17.04.1990.	R	-	-	17.04.1990.	R	-
Yugoslavia	16.10.2001	S		16.10.2001	S		16.10.2001	16.10.2001	S	-
Zambia	19.10.1966.	A	-	04.05.1995.	A	-	-	04.05.1995.	A	-
Zimbabwe	07.03.1983.	A	-	19.10.1992.	A	-	-	19.10.1992.	A	-

## COMENTARIOS

### Contenido

#### 1. Abreviaturas y notas

#### 2. Fechas

#### 3. Entrada en vigor

#### 4. Nombres de los Países

#### 5. Modificaciones introducidas desde el 31.12.96

#### 6. Apuntes

#### 7. Totales

#### 8. Lista cronológica de los Estados que han hecho la Declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo

## 1. ABREVIATURAS Y NOTAS

R/A/S = Ratificación : un tratado está generalmente abierto para la firma durante cierto tiempo, después de la conferencia en que se aprueba. Sin embargo, la firma sólo obliga a un Estado tras la ratificación. Finalizados los plazos respectivos, los Convenios y los Protocolos ya no están abiertos para la firma. Los Estados no signatarios pueden siempre llegar a ser Partes por vía de adhesión o, en su caso, de sucesión.

Adhesión : en vez de firmar y ratificar ulteriormente, un Estado puede obligarse por un acto único llamado adhesión.

Sucesión (declaración de) : un nuevo Estado independiente puede declarar que seguirá estando obligado por los tratados que le eran aplicables antes de la independencia. Puede también hacer una declaración de aplicación de los tratados (dapt), por la que se compromete a continuar aplicando dichos tratados durante el tiempo que considere necesario para examinar detalladamente sus textos y decidir a cuáles de ellos adherirse o suceder. Actualmente, esta declaración no concierne a ningún Estado.

R/D = Reserva/Declaración : declaración unilateral, sea cual fuere su texto o su designación, hecha por un Estado en el momento de ratificar, adherirse o suceder a un tratado, para que se excluya o se modifique el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado (siempre que tales reservas no sean incompatibles con el objeto y la finalidad del tratado).

D90 = Declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo I (Aceptación previa de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta).

## 2. FECHAS

Las fechas indicadas son las del día de recepción, por el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, del acta oficial transmitida por el Estado que ratifica, se adhiere, sucede o hace la declaración según el artículo 90 del Protocolo I. No se trata, pues, ni de la fecha de aprobación del acta oficial relativa a la ratificación, adhesión, sucesión o declaración, ni de la fecha del eventual envío.

N.B.: *Las fechas consignadas con respecto a la sucesión a los Convenios de CONGO, JAMAICA, MADAGASCAR, MAURITANIA, NIGER, NIGERIA, RUANDA, SENEGAL, SIERRA LEONA Y ZAIRE, eran las de aprobación del acta oficial pertinente. Se reemplazaron por las fechas de recepción de esas actas por el Depositario.*

## 3. ENTRADA EN VIGOR

Salvo las excepciones que figuran en una nota al pie del cuadro, los Convenios y los Protocolos entran en vigor para cada Estado seis meses después de la fecha en el presente documento; para los Estados que hagan una declaración de sucesión, entran en vigor retroactivamente el día de proclamación de la independencia.

Los Convenios de Ginebra entraron en vigor el 21 de octubre de 1950.  
Los Protocolos adicionales entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978.

## 4. NOMBRES DE LOS PAÍSES

Los nombres de los países que figuran en la lista siguiente pueden, a veces, diferenciarse de la denominación oficial de los Estados.

## 5. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DESDE EL 31.12.96

Ratificaciones, adhesiones y sucesiones a los Convenios

Eritrea : 14.08.2000  
Yugoslavia : 16.10.2001  
Islas Cook : 11.06.2001



Timor Oriental : 08.05.2003

#### Ratificaciones, adhesiones y sucesiones al Protocolo adicional I

Chad : 17.01.1997  
 Libano : 23.07.1997  
 Camboya : 14.01.1998  
 Reino Unido : 28.01.1998  
 Venezuela : 23.07.1998  
 Granada : 23.09.1998  
 Kenya : 23.02.1999  
 Irlanda : 19.05.1999  
 Nicaragua : 19.07.1999  
 Mónaco : 07.01.2000  
 Lituania : 13.07.2000  
 France : 11.04.2001  
 Trinidad y Tobago : 20.07.2001  
 Yugoslavia : 16.10.2001  
 Islas Cook : 07.05.2002  
 Tonga : 20.01.2003

#### Ratificaciones, adhesiones y sucesiones al Protocolo adicional II

Chad : 17.01.1997  
 Libano : 23.07.1997  
 Camboya : 14.01.1998  
 Reino Unido : 28.01.1998  
 Venezuela : 23.07.1998  
 Granada : 23.09.1998  
 Kenya : 23.02.1999  
 Irlanda : 19.05.1999  
 Cuba : 23.06.1999  
 Nicaragua : 19.07.1999  
 Mónaco : 07.01.2000  
 Lituania : 13.07.2000  
 Trinidad y Tobago : 20.07.2001  
 Yugoslavia : 16.10.2001  
 Arabia Saudita : 28.11.2001  
 Islas Cook : 07.05.2002  
 Mozambique : 12.11.2002  
 Rep. Dem. de Congo : 12.12.2002  
 Tonga : 20.01.2003

#### Declaración del artículo 90

Tayikistán : 10.09.1997  
 Paraguay : 30.01.1998  
 Lao (Rep. dem. pop.) : 30.01.1998  
 Grecia : 04.02.1998  
 Reino Unido : 17.05.1999  
 Irlanda : 19.05.1999  
 Panama : 26.10.1999  
 Costa Rica : 02.12.1999  
 Lituania : 13.07.2000  
 Trinidad y Tobago : 20.07.2001  
 Yugoslavia : 16.10.2001  
 Islas Cook : 07.05.2002

Chipre : 14.10.2002  
 Rep. Dem. de Congo : 12.12.2002  
 Tonga : 20.01.2003  
 Mali : 09.05.2003

## 6. EXCEPCIONES

**República de Corea.** Los Convenios entraron en vigor el 23.09.1966, ya que la República de Corea invocó el artículo común 62/61/141/157 (efecto inmediato) de los Convenios I, II, III y IV, respectivamente.

**Filipinas.** Filipinas ratificó el I Convenio el 07.03.1951.

**Francia.** Cuando Francia se adhirió al Protocolo II, hizo una comunicación relativa al Protocolo I.

**Ghana.** Los Protocolos entraron en vigor el 07.12.1978.

**Namibia.** El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia depositó, el 18.10.1983, un instrumento de adhesión a los Convenios de Ginebra y a sus Protocolos adicionales. Mediante un instrumento depositado el 22.08.1991, Namibia declara suceder a los Convenios de Ginebra, que le eran aplicables por la adhesión, el 31.03.1952, de Sudáfrica a dichos Convenios.

**Palestina.** Con fecha del 21.06.1989, el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores recibió una carta del observador permanente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra informando al Consejo Federal suizo de "que el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, encargado de ejercer las funciones de Gobierno del Estado de Palestina, por decisión del Consejo Nacional de Palestina, decidió adherirse, el 04.05.1989, a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus dos Protocolos adicionales".

El 13.09.89, el Consejo Federal suizo comunicó a los Estados que no puede decidir la cuestión de saber si se trata de un instrumento de adhesión, "debido a la incertidumbre, en el seno de la comunidad internacional sobre la existencia, o no, de un Estado de Palestina".

**Sri Lanka.** Salvo el IV Convenio (adhesión el 23.02.1959), Sri Lanka sólo había firmado los Convenios I, II y III.

**Suiza.** Los Convenios entraron en vigor el 21.10.1950.

**Trinidad y Tobago.** Trinidad y Tobago se adhirió al I Convenio el 17.05.1963.

**Yibuti.** Yibuti hizo la declaración de sucesión al I Convenio el 26.01.1978.

## 7. TOTALES

Numero de Estados partes a los Convenios de Ginebra de 1949 : 191

Numero de Estados partes al Protocolo adicional I : 161

Numero de Estados que han hecho la declaración del artículo 90 : 65

Numero de Estados partes al Protocolo adicional II : 156

Numero de Estados miembros de las Naciones Unidas : 191

Estados miembros de la ONU o partes en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia que no son partes en los Convenios de Ginebra de 1949: MARSHALL, NAURU.

## 8. LISTA CRONOLÓGICA DE LOS ESTADOS QUE HAN HECHO LA DECLARACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DEL PROTOCOLO I

1 Suecia : 31.08.1979

2 Finlandia : 07.08.1980

3 Noruega : 14.12.1981

4 Suiza : 17.02.1982

5 Dinamarca : 17.06.1982

6 Austria : 13.08.1982

7 Italia : 27.02.1986

8 Bélgica : 27.03.1987

9 Islandia : 10.04.1987

10 Países Bajos : 26.06.1987

11 Nueva Zelandia : 08.02.1988

12 Malta : 17.04.1989

13 España : 21.04.1989  
14 Liechtenstein : 10.08.1989  
15 Argelia : 16.08.1989  
16 Rusia (Fed. de) : 29.09.1989  
17 Belarús : 23.10.1989  
18 Ucrania : 25.01.1990  
19 Uruguay : 17.07.1990  
20 Canadá : 20.11.1990  
21 Alemania : 14.02.1991  
22 Chile : 24.04.1991  
23 Hungría : 23.09.1991  
24 Qatar : 24.09.1991  
25 Togo : 21.11.1991  
26 Emiratos Arabes Unidos : 06.03.1992  
27 Eslovenia : 26.03.1992  
28 Croacia : 11.05.1992  
29 Seychelles : 22.05.1992  
30 Bolivia : 10.08.1992  
31 Australia : 23.09.1992  
32 Polonia : 02.10.1992  
33 Bosnia-Herzegovina : 31.12.1992  
34 Luxemburgo : 12.05.1993  
35 Rwanda : 08.07.1993  
36 Madagascar : 27.07.1993  
37 Macedonia : 01.09.1993  
38 Brasil : 23.11.1993  
39 Guinea : 20.12.1993  
40 Bulgaria : 09.05.1994  
41 Portugal : 01.07.1994  
42 Namibia : 21.07.1994  
43 República Eslovaca : 13.03.1995  
44 Cabo Verde : 16.03.1995  
45 República Checa : 02.05.1995  
46 Rumania : 31.05.1995  
47 Mongolia : 06.12.1995  
48 Colombia : 17.04.1996  
49 Argentina : 11.10.1996  
50 Tayikistán : 10.09.1997  
51 Paraguay : 30.01.1998  
52 Lao (Rep. dem. pop.) : 30.01.1998  
53 Grecia : 04.02.1998  
54 Reino Unido : 17.05.1999  
55 Irlanda : 19.05.1999  
56 Panama : 26.10.1999  
57 Costa Rica : 02.12.1999  
58 Lituania : 13.07.2000  
59 Trinidad y Tobago : 20.07.2001  
60 Yugoslavia : 16.10.2001  
61 Islas Cook : 07.05.2002  
62 Chipre : 14.10.2002  
63 Rep. Dem. de Congo : 12.12.2002  
64 Tonga : 20.01.2003  
65 Mali : 09.05.2003

## **Anexo N°3: Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra**

**Tomado del Convenio III de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra"**

### **Artículo 3 - Conflictos no internacionales**

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

\*\*\*\*\*

**Anexo N° 4: Ley No. 418**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

**Hace saber al pueblo Nicaragüense que:**

**LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA  
REPUBLICA DE NICARAGUA**

**CONSIDERANDO**

**I.**

Que es necesario regular el uso del emblema de Cruz Roja, para que tenga sustento jurídico, de conformidad con las disposiciones de los tratados internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitario, así como aplicar la legislación nacional en los casos del uso inadecuado del Emblema y obtener un resultado satisfactorio en la lucha para la protección y respeto de esa noble organización.

**II.**

Que Nicaragua es Estado Parte de los Convenios de Ginebra de 1949, aprobados por Nicaragua en 1952 y sus Protocolos Adicionales en 1977, aprobados por el Decreto No. 2010 del 22 de Septiembre de 1998 de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y del Reglamento sobre el uso del Emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales, adoptado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

**III.**

Que por Decreto Ejecutivo Número 23, del 10 de Enero de 1934, el Gobierno de Nicaragua, a través del Presidente de la República de ese entonces, Doctor Juan Bautista Sacasa, reconoció la existencia de Cruz Roja Nicaragüense, como Sociedad Nacional única, que funcionará en todo el territorio de la República.

**IV.**

Que no existe en Nicaragua una legislación que proteja y regule el uso del emblema, y por ello dentro del contexto actual, se propicia la aprobación de la presente Ley.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

**LEY DE PROTECCIÓN Y USO DEL NOMBRE Y DEL  
EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA**

**CAPITULO I  
Normas Generales**

**Arto.1. Objetivo de la Ley**

El objetivo de la presente Ley es regular las condiciones y modalidades para la protección del nombre y del emblema de la Cruz Roja, así como la denominación "Cruz Roja" y "Media Luna Roja" y las señales distintivas para la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios.

Son igualmente protegidos por la presente Ley, las señales distintivas para la identificación de las unidades y los medios de transporte sanitarios, de conformidad con el Anexo y, del Protocolo Adicional de 1977.

La presente Ley, se aplicara íntegramente a los supuestos de uso de la Media Luna Roja y de otros emblemas o signos previstos mediante la adopción de nuevos acuerdos internacionales y utilizados a los mismos fines que la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

**CAPITULO II  
Uso del Emblema**

**Arto.2. Emblema.**

El Emblema de la Cruz Roja, así como la denominación "Cruz Roja" y "Cruz de Ginebra", solo podrán ser utilizados para los fines previos en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.

La Cruz Roja Nicaragüense, sus filiales así como las sociedades de Cruz Roja extranjeras son las únicas autorizadas a utilizar la denominación de "Cruz Roja" en el territorio de la República de Nicaragua.

### **Arto.3. Uso del Emblema**

El uso protector del emblema tiene por fin señalar el personal, los bienes, unidades y medios de transporte sanitarios y religiosos, a los cuales, en ocasión de un conflicto armado, se les confiere protección en los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales. El Emblema será en estos casos de las mayores dimensiones posibles para permitir su visibilidad.

El uso indicativo, señala las personas o bienes que tienen relación con una institución de la Cruz Roja, el cual será de tamaño relativamente pequeño.

### **Arto.4. Fuerzas Armadas**

Los servicios sanitarios de las fuerzas armadas nicaragüenses usarán, bajo el control del Ministerio de Defensa, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el emblema de la Cruz Roja, para dar a conocer su personal, unidades de transporte de tierra, mar y aire, materiales y establecimientos. El personal sanitario llevará un brazalete y una tarjeta de identificación provistos del emblema, los cuales serán proporcionados por el Ministerio de Defensa. El personal religioso agregado a las fuerzas armadas se beneficiará de la misma protección que el personal sanitario y se dará a conocer de la misma manera.

### **Arto.5. Hospitales y demás unidades sanitarias civiles**

Con la autorización expresa del Ministerio de Salud, bajo su dirección, el personal sanitario civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios de transporte sanitarios civiles destinados, en particular, al transporte y a la asistencia de heridos, de enfermos y náufragos, estarán señalados, en tiempo de conflicto armado, mediante el emblema de título protector.

El personal sanitario civil llevará un brazal y una tarjeta de identidad, provistos del emblema proporcionado por el Ministerio de Salud.

El personal religioso civil agregado a hospitales y demás unidades sanitarias se dará a conocer de la misma manera.

#### **Arto.6. Uso del emblema protector por la Cruz Roja Nicaragüense**

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Nicaragüense, podrá poner a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas personal sanitario, así como unidades y medios de transporte sanitarios. Dicho personal y dichos bienes estarán sometidos a las leyes y los reglamentos militares y podrán ser autorizados por el Ministerio de Defensa a enarbolar en emblema de la Cruz Roja a título protector. Dicho personal llevará un brazal (sic) y una tarjeta de identidad, de conformidad con el artículo 4 de la presente Ley.

La sociedad nacional, podrá además utilizar el emblema protector para su personal, instituciones y medios de transporte sanitarios en las mismas condiciones que las establecidas bajo el artículo 5 de la presente Ley.

#### **Arto.7. Uso del emblema indicativo por la Cruz Roja Nicaragüense**

La Cruz Roja Nicaragüense está autorizada a utilizar el emblema a título indicativo, para indicar que una persona o un bien tiene un vínculo con ella. El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier confusión con el emblema a título protector y se guiará, por las normas establecidas en el Reglamento sobre en uso del emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja por las sociedades nacionales, adoptada por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y sus modificaciones ulteriores, al igual que la reglamentación interna que se puede derivar de la presente Ley.

Las sociedades nacionales de la Cruz Roja extranjera que se hallen en territorio de la República de Nicaragua, con la autorización de la institución nacional y de conformidad con el reglamento interno, utilizarán el emblema en las mismas condiciones que ésta última.

#### **Arto.8. Organismos Internacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja**

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas las actividades.



### **CAPITULO III**

#### **Medidas de Control y Sanciones**

##### **Arto.9. Medidas de Control.**

Las autoridades de Nicaragua velarán, en cualquier tiempo por el estricto respeto de las normas relativas al uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, de las denominaciones "Cruz Roja" y "Media Luna Roja" y de las señales distintivas. Ejercerán un estricto control sobre las personas autorizadas a utilizarlos. Para ello tomarán todas las medidas necesarias para evitar todos los abusos, en particular dando a conocer lo más ampliamente posible las normas en cuestión entre las fuerzas armadas, las fuerzas de policía, las autoridades y la población civil.

##### **Arto.10. Cometido de la Cruz Roja Nicaragüense**

La Cruz Roja Nicaragüense colaborará con las autoridades para prevenir y reprimir cualquier abuso a la presente Ley. Esta tendrá derecho a denunciarlo ante la autoridad competente y a participar en el proceso penal, civil o administrativo.

##### **Arto.11. Abuso del Emblema.**

Toda persona natural o jurídica que sin autorización hiciere uso del emblema de la Cruz Roja o de los vocablos previamente mencionados en ésta Ley, o de cualquier otra imitación que pudiere prestarse a confusión, especialmente cuando el uso se hiciere en letreros, carteles, anuncios, prospectos o papeles de comercio, mercancías o embalajes, rótulos o marcas de fábrica, membretes comerciales o en placas de identidad, serán sancionadas de acuerdo con la legislación nacional vigente.

Si la infracción la comete una persona jurídica (sociedad comercial, asociación u otros), la sanción se aplicará a las personas naturales que resulten responsables de haber cometido la infracción.

##### **Arto.12. Abuso del Emblema a Titulo Protector en tiempo de guerra.**

Toda persona que intencionalmente y apelando a la buena fe del adversario, haya cometido o dado la orden de cometer actos que causen la muerte o atenten gravemente contra la integridad física o la salud de un adversario, haciéndole creer que tenía derecho u obligación de conferir la protección prevista en las normas de derecho internacional humanitario, utilizando el emblema de la

Cruz Roja o una señal distintiva de esta forma p rfida, ser  castigado conforme la normativa penal vigente.

#### **Arto.13. Abuso de la Cruz Blanca sobre fondo rojo**

Dada la confusi n a que pueda prestarse la bandera Suiza o el uso de la Cruz Blanca sobre fondo rojo, con el emblema de la Cruz Roja toda persona que lo utilice indebidamente, ser  sancionada de acuerdo a la legislaci n nacional vigente.

#### **Arto.14. Registro**

El Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual, el Registro Mercantil y el Registro de Personas Jur dicas sin fines de lucro, no autorizar n la inscripci n de dibujos, logotipos, textos o modelos industriales o de cualquier otro tipo contrarios a la presente Ley.

#### **Arto.15. Medios de Transporte Sanitarios**

Para los efectos de  sta Ley se entiende por "medios de transporte sanitarios", todo equipo de transporte de cualquier naturaleza que est  al servicio de la Cruz Roja o de entidades sanitarias estatales, que transporten personas, equipos o materiales para el cumplimiento de los fines de esas instituciones.

#### **Arto.16. Transitorio**

Las personas naturales o jur dicas que est n utilizando un emblema o denominaci n similar al de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, tendr n un plazo de un a o, para eliminar su uso a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Toda infracci n a la presente Ley una vez pasado el plazo establecido, ser  sancionada de acuerdo con lo establecido en la legislaci n nacional.

#### **Arto.17. Vigencia**

La presente Ley entrar  en vigencia a partir de su publicaci n en la Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la Rep blica de Nicaragua, a los veintis is d as del mes de febrero del a o dos mil dos. WILFREDO NAVARRO

MOREIRA, Presidente por la Ley de la Asamblea Nacional. RENE HERRERA ZUNIGA, secretario de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, quince de Marzo del año dos mil dos.-  
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.

## **Anexo N°5: Artículo 90 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales**

### **Artículo 90 - Comisión Internacional de Encuesta**

1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante llamada la Comisión, integrada por quince miembros de alta reputación moral y de reconocida imparcialidad.
  - b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo menos hayan convenido en aceptar la competencia de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y ulteriormente a intervalos de cinco años, el depositario convocará una reunión de representantes de esas Altas Partes contratantes, con el fin de elegir a los miembros de la Comisión. En dicha reunión, los representantes elegirán a los miembros de la Comisión por votación secreta, de una lista de personas para la cual cada una de esas Altas Partes contratantes podrá proponer un nombre.
  - c) Los miembros de la Comisión actuarán a título personal y ejercerán su mandato hasta la elección de nuevos miembros en la reunión siguiente.
  - d) Al proceder a la elección, las Altas Partes contratantes se asegurarán de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de que, en su conjunto, la Comisión ofrezca una representación geográfica equitativa.
  - e) Si se produjera una vacante, la propia Comisión elegirá un nuevo miembro tomando debidamente en cuenta las disposiciones de los apartados precedentes.
  - f) El depositario proporcionará a la Comisión los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o ulteriormente en cualquier otro momento, las Altas Partes contratantes podrán declarar que reconocen ipso facto y sin acuerdo especial, con relación a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la misma obligación, la competencia de la Comisión para proceder a una investigación acerca de las denuncias formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente artículo.
  - b) Las declaraciones antes mencionadas serán presentadas al depositario, que enviará copias de las mismas a las Altas Partes contratantes.
  - c). La Comisión tendrá competencia para:
    - i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracción grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier otra violación grave de los Convenios o del presente Protocolo;
    - ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los Convenios y del presente Protocolo.
  - d) En otros casos, la Comisión procederá a una investigación a petición de una Parte en conflicto únicamente con el consentimiento de la otra o las otras Partes interesadas.
  - e) A reserva de las precedentes disposiciones de este párrafo, las disposiciones de los artículos 52 del I Convenio, 53 del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio seguirán aplicándose a

toda supuesta violación de los Convenios y se extenderán a toda supuesta violación del presente Protocolo.

3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas las investigaciones serán efectuadas por una Sala integrada por siete miembros designados de la manera siguiente:

i) cinco miembros de la Comisión, que no sean nacionales de las Partes en conflicto, nombrados por el Presidente de la Comisión sobre la base de una representación equitativa de las regiones geográficas, previa consulta con las Partes en conflicto;

ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en conflicto, nombrados cada uno respectivamente por cada una de ellas.

b) Al recibir una petición para que se proceda a una investigación, el Presidente de la Comisión fijará un plazo apropiado para la constitución de una Sala. Si uno o los dos miembros ad hoc no hubieren sido nombrados dentro del plazo señalado, el Presidente designará inmediatamente los que sean necesarios para completar la composición de la Sala.

4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 para proceder a una investigación, invitará a las Partes en conflicto a comparecer y a presentar pruebas. La Sala procurará además obtener las demás pruebas que estime convenientes y efectuar una investigación in loco de la situación.

b) Todas las pruebas se darán a conocer íntegramente a las Partes interesadas, las cuales tendrán derecho a hacer observaciones al respecto a la Comisión.

c) Cada Parte interesada tendrá derecho a impugnar dichas pruebas.

5. a) La Comisión presentará a las Partes interesadas un informe acerca de las conclusiones a que haya llegado la Sala sobre los hechos, acompañado de las recomendaciones que considere oportunas.

b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la Comisión dará a conocer las razones de tal imposibilidad.

c) La Comisión no hará públicas sus conclusiones, a menos que así se lo pidan todas las Partes en conflicto.

6. La Comisión establecerá su propio Reglamento, incluidas las normas relativas a las presidencias de la Comisión y de la Sala. Esas normas garantizarán que las funciones de Presidente de la Comisión sean ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación, se ejerzan por persona que no sea nacional de las Partes en conflicto.

7. Los gastos administrativos de la Comisión serán sufragados mediante contribuciones de las Altas Partes contratantes que hayan hecho declaraciones de conformidad con el párrafo 2, y mediante contribuciones voluntarias. La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se proceda a una investigación anticiparán los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por una Sala y serán reembolsadas por la Parte o las Partes que hayan sido objeto de las denuncias hasta el cincuenta por ciento de tales gastos. En caso de presentarse denuncias recíprocas a la Sala, cada una de las dos Partes anticipará el cincuenta por ciento de los fondos necesarios.

## **Anexo N°6: Gaceta N°81**

**Managua, Martes 4 de Mayo de 1999**

### **GACETA No. 81**

#### **PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

### **DECRETO No. 54-99**

**El Presidente de la República de Nicaragua**

#### **CONSIDERANDO**

I- Que la República de Nicaragua es Estado Parte de los Convenios de Ginebra de 1949, que establecen el compromiso de respetar y garantizar la vigencia de dichos instrumentos en toda circunstancia.

II- Que la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra en 1995, se aprobaron las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos para la protección de las víctimas de guerra, en las que se puso de relieve la imperiosa necesidad de que los Estados adopten medidas legislativas internas y reglamentos de aplicación que permitan garantizar el respeto de los instrumentos jurídicos del Derecho Internacional Humanitario;

**En uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política.**

#### **DECRETA**

Arto. 1. Créase la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en adelante la Comisión, cuya función principal es asesorar y respaldar al Gobierno de la Republica en todas las cuestiones relativas a la firma y ratificación o adhesión de los tratados de derecho humanitario, a la incorporación de los mismos en el derecho interno y a la difusión de las normas que contiene.

Arto. 2. La Comisión estará integrada por los representantes designados de las instituciones siguientes:

1. Ministerio Relaciones Exteriores.
2. Ministerio de Educación y Cultura y Deportes.
3. Ministerio de Gobernación.
4. Ministerio de Salud.
5. Procuraduría General de Justicia.
6. Secretaria de la Presidencia.
7. Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional.
8. Comisión Pro-Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional.
9. Corte Suprema de Justicia.
10. Cruz Roja Nicaragüense.
11. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
12. Universidad Nacional (UNAN- LEON).
13. Universidad Centroamericana.
14. Universidad Católica Redemptoris Mater.
15. Universidad para La Paz.

Arto. 3. El Presidente de la Comisión solicitará a los organismos comprendidos del inciso 7 al 15 del artículo anterior la designación de su representante, los que deberán hacerlo en un plazo de 15 días después de recibida la

notificación.

Arto 4. La Comisión será presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y se podrá asistir de miembros de la sociedad civil y expertos en Derecho Internacional en calidad de asesores, quienes deberán ser personas de reconocida moralidad y capacidad y estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Arto. 5. La Comisión, cuando lo considere conveniente, podrá solicitar a las otras dependencias del Gobierno; Así como, a otros Poderes del Estado la participación de representantes de esas Instituciones, cuando por la índole de la materia sea necesario coordinar estudios, acciones y la documentación que sea necesaria, para el cumplimiento de sus fines.

Arto. 6. Para el cumplimiento e sus funciones y responsabilidades, la Comisión elaborará su propio Reglamento Interno.

Arto. 7. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación, en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el veintitrés de Abril de mil novecientos noventa y nueve.

ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.

## **Anexo N°7: Gaceta N°236**

**Managua, Sábado 5 de Diciembre de 1998**

**GACETA # 236**

### **DECRETO No. 84-98**

**El Presidente de la República de Nicaragua**

#### **CONSIDERANDO**

I- Que es obligación del Estado garantizar la salud y la vida de sus habitantes , principalmente , de aquellos que se encuentren en situaciones de riesgo;

II- Que como secuela de la última guerra civil de los años achenta y quedaron deseminadas en las zonas rurales del país , alrededor de cien mil minas antipersonal , que causan con gran frecuencia muertes y mutilaciones , eliminando valiosos recursos humanos y marginando zonas de producción agrícola , constituyendo el desminado , una prioridad urgente para la seguridad de la población y el desarrollo de la economía nacional ;

III- Que para potencializar la necesaria cooperación internacional dirigida a este objetivo , es indispensable realizar mayores esfuerzos de coordinación entre las instituciones del Estado , países amigos , organismos internacionales y la sociedad civil ;

IV- Que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos , tanto en Panamá en 1996, como en Lima en 1997, señaló la urgencia de continuar con las tareas de desminado en la región ;

V- Que es necesario cumplir con los objetivos , propósitos y compromisos adquiridos por Nicaragua con la firma y ratificación de la Convención sobre la Prohibición del empleo , almacenamiento , producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

VI- Que los sitios donde fueron sembradas las minas antipersonal , éstas como una consecuencias del Huracán Mitch, sufrieron desplazamientos lo que agrava la situación de inseguridad ciudadana e impone en estos momentos , la necesidad de su localización para fines de remoción ;

VII- Que la concientización de la población es necesaria para que ese cumpla con éxito el Plan Nacional de desminado y se realice la reincorporación socioeconómica de las víctimas de minas , por lo que la difusión de las consecuencias del uso de estas armas y el acercamiento de la sociedad civil con las autoridades encargadas de la ejecución de esta tarea , despertará el interés y respeto de la comunidad internacional , cuyo apoyo es indispensable.

**En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política**

**HA DICTADO**

**El siguiente :**

**DECRETO**

Arto. 1. Créase la Comisión Nacional de Desminado , en adelante denominada " La Comisión " que tendrá como misión , coadyuvar e impulsar acciones destinadas a apoyar el Programa de Desminado de Nicaragua que dirige el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Nicaragua.

Arto. 2. La Comisión estará integrada por el Ministerio de Defensa, quien la presidirá y formulará la política



nacional del desminado , y por los Vice Ministros de Defensa, Relaciones Exteriores , Gobernación , Salud , Educación Cultural y Deportes , Agropecuario y Forestal y Transporte e Infraestructura ,el Secretario de Cooperación Externa , el Director del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal , el Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social , un Delegado del Ejército de Nicaragua y un Delegado de la Policía Nacional.

Arto. 3. Se invitará a la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional , a la Organización de Estados Americanos ( OEA) , Cruz Roja Nicaragüense , al Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua y a la Comisión Conjunta de Discapacitados por la Paz y la Reconciliación del Departamento de Madriz , a nombrar sus respectivos delegados para que participen como miembros de la Comisión.

Arto. 4. La Comisión se podrá asistir de miembros de la sociedad civil y expertos internacionales en calidad de asesores , quienes deberán ser personas de reconocida moralidad y capacidad y estar en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Arto. 5. Son atribuciones de la Comisión :

- a) Promover el desminado como una de las prioridades humanitarias nacionales.
- b) Apoyar y darle seguimiento a las políticas del Programa Nacional de Desminado y supervisar el desarrollo de sus actividades.
- c) Gestionar la inclusión de programas sociales de rehabilitación y reinserción de las víctimas de las minas antipersonal.
- d) Gestionar la consecución de fondos del exterior e interior del país para las actividades de desminado , canalizar los mismos para el Programa Nacional de Desminado a las diferentes entidades ejecutoras , y darle seguimiento a la administración de dichos fondos , así como canalizar la contribución recibida en materiales y equipos.
- e) El mantener una base de datos sobre las actividades relacionadas al desminado.
- f) Preparar estudios sobre los avances del Programa Nacional de Desminado y mantener informada a la Comunidad internacional sobre los mismos y coordinar los esfuerzos de obtención de fondos de la ayuda internacional y nacional destinados al desminado.
- g) Recomendar la elaboración de estudios , proyectos y dictámenes sobre toda cuestión relacionada con el desminado en Nicaragua.
- h) Proteger Políticas de desarrollo socio-económico que beneficien a las poblaciones nicaragüenses víctimas de las minas antipersonal.
- i) Proporcionar asesoramiento a los funcionarios gubernamentales y de otras instituciones , en lo que se refiere a las funciones de esta Comisión.
- j) Impulsar un programa de difusión de problemas y peligros de las minas antipersonal ,así como de brindar información y educación preventiva a población rural.
- k) Apoyar moral y materialmente a los oficiales , clases y soldados de la Unidad Especial de Desminado de Ejército de Nicaragua que realizan con abnegado y valientes espíritu humanitario y patriótico la riesgosa misión de librar de minas el territorio nacional.
- l) Recibir la información pertinente del Ministerio de Defensa sobre la ejecución del Programa de Desminado en Nicaragua.
- m) Cualquier otra función que sea asignada.

Arto. 6. La Comisión , cuando lo considere conveniente , podrá solicitar a las otras dependencias del Gobierno ; así como , a otros Poderes del Estado la participación de representantes de esas Instituciones en esta Comisión , cuando por la índole de la materia sea necesario coordinar estudios y acciones . Igualmente podrá solicitarles la colaboración que sea requerida y la documentación que sea necesaria , para el cumplimiento de sus fines.

Arto. 7. La Comisión podrá relacionarse con organismos no gubernamentales vinculados con el desminado en Nicaragua ;así como con Organismo Internacionales cuyas atribuciones inciden en las actividades de desminado.

Arto. 8. Actuará como Secretario Ejecutivo de la Comisión , el designado por ésta , La Comisión determinará su propio programa de trabajo y el o los lugares donde efectuará sus reuniones.

Arto. 9. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en " La Gaceta " , Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua , Casa Presidencial , el veintisiete de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho . ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.